



El Aromo
Periódico cultural piquetero

**Gabinete de
Educación
Socialista**



Los docentes
fueguinos en lucha

**Laboratorio
de Análisis
Político**



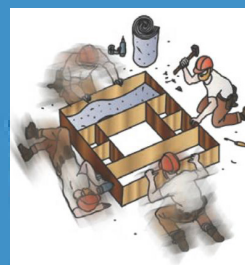
Perspectivas de
la crisis política
española

**Observatorio
Marxista de
Economía**



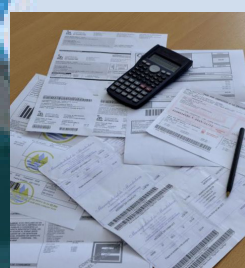
¿Por qué se
endeuda la
Argentina?

**Taller de
Estudios
Sociales**



La estructura de
la clase obrera

**Oficina de
Estadísticas
Sociales**



La suba de tarifas

Volvió

POLÍTICA

- ¿Hay que defender a Dilma?
- El frente interno de Macri
- Tierra del Fuego en llamas: la crisis en una provincia K

CLASE OBRERA

- Los salarios otra vez a la baja
- Cooperativas: un parche insuficiente
- Indígenas urbanos

HISTORIA

- Pueyrredón: otro revolucionario negado
- La polémica sobre la cifra de desaparecidos
- La represión a la docencia bajo el peronismo
- ¿Fue liberal la gran burguesía industrial?

ECONOMÍA

- Entrevista a Minqui Li sobre las perspectivas de la economía china

CIENCIA

- Debate sobre la política científica: ¿continuidad o ruptura?
- La psicología del "quemado"
- Adelanto del prólogo a "El biólogo dialéctico"

EDUCACIÓN

- Vidal prepara la represión a los docentes

GÉNERO

- Femicidios: los números que faltan

El (des)encanto de la política burguesa

 **Lanina Harari**
Editora Responsable

La crisis política está marcando hoy el rumbo de los gobiernos burgueses. Evidentemente, las tareas que les plantea la crisis económica resultan poco seductoras para quienes van a sufrir el ajuste. Por lo tanto, ningún político burgués tiene la posibilidad de lograr gran consenso mediante medidas económicas. Ya lo sufrió Cristina. Y Macri, que prometió el oro y el moro, no ha hecho más que continuar con el ajuste de su antecesora. En ese contexto, presentarse como el paladín de la lucha contra la corrupción parece ser la estrategia elegida no solo por Macri (de la mano de Carrió) sino también por la oposición en Brasil y Venezuela. Parece ser la forma en que la burguesía busca legitimar el cierre por derecha de los bonapartismos que dominaron la última década. Sin embargo, como en el caso argentino, también en el resto de América Latina esta estrategia tiene sus riesgos. Ningún político burgués es impoluto y está latente el riesgo de que una vez echada a andar la pelota, el proceso los lleve puestos a ellos mismos, como es evidente en el caso del vicepresidente brasileño Temer.

El retorno

En su reaparición Cristina buscó contraatacar al macrismo, con el argumento de que buscando la ruta del dinero K, se encontraron con la ruta del dinero M. Pero lo mismo podría decirse al revés. Tanto las acusaciones de corrupción contra el kirchnerismo amenazan con salpicar al macrismo, como los Panamá Papers podrían manchar más a Cristina. En el primer caso porque el beneficiario de la obra pública sobrefacturada por Néstor y De Vido no fue solo Lázaro, sino también empresarios del entorno del actual presidente, como su primo Ángel Calcaterra o Nicolás Caputo. En el segundo, porque en las revelaciones sobre las sociedades off shore aparecen socios de Néstor, como Daniel Muñoz. Si algo dejó en claro Fariña es que todo el armado de corrupción y lavado fue ideado por Néstor, algo que incomodó al kirchnerismo crítico que reivindicaba el gobierno del ex



presidente y criticaba los de su mujer. Todo este destape de la corrupción política puede dejar al descubierto los manejos del conjunto de la burguesía argentina. En estos días se ha repetido que cualquier empresario que se precie de tal tiene una off shore. Y en esa categoría entra el conjunto de políticos burgueses que viene gobernando el país hace 30 años.

La cruzada anticorrupción pretende ser respondida por los políticos bonapartistas con un apoyo popular con el que ya no cuentan. Cristina salió de su letargo en el Calafate e intentó hacer una demostración de fuerza con el acto de Comodoro Py. Tras dejar pasar en silencio los despidos y el ajuste, ahora buscó mostrar que sigue viva políticamente. De poco le sirvió. Se trató más bien de una muestra de la agonía. De los barones del Conourbano que aún dicen responderle solo movilizaron a su tropa dos de ellos: Ferraresi de Avellaneda y Mussi de Berazategui. El acto mostró que su capacidad de movilización ha mermado mucho: lejos está de llenar una Plaza de Mayo. Ya fuera del armado que los gobernadores diseñaron para regularizar el PJ, Cristina quiso reagrupar los restos de su caudal político en reuniones con diputados, senadores y los intendentes peronistas, a la que no asistieron Granados (Ezeiza), Ishii (José C. Paz), Katopodis (San Martín) y Alessandro (Salto).

En su agenda no figuró ninguna reunión con los sindicalistas que la defendieron durante su gestión. Es que parte de ellos, en especial la CGT de Caló, ya se han acercado a Macri y a Moyano. De hecho, mientras ella arengaba frente a tribunales, las tres CGT se reunían con el presidente. Allí Macri intentó sin éxito llevar calma a los sindicalistas. Las medidas “paliativas” del ajuste, que tardaron en llegar, y la entrega de la caja de las obras sociales, no los terminan de conformar. Mientras Cristina había logrado dividirlos, Macri podría verse frente a un aparato poderoso si no termina de conformarlos. El Presidente ya anunció que vetará la ley de emergencia ocupacional que impulsa el sindicalismo.

En la redes del reformismo

La claudicación de la izquierda frente al reformismo no había mostrado, hasta ahora, toda su magnitud. Si bien la defensa más o menos solapada del kirchnerismo –que llegó a extremos ridículos con la TPR- era una muestra de este giro, el caso Dilma ha dejado al descubierto las debilidades políticas de la izquierda. Con la excepción de Izquierda Socialista, todos han salido a rechazar el “golpe institucional”. Es decir, compraron el discurso del PT y del kirchnerismo. Han salido a decir que “la derecha” y “el imperialismo” quieren llevar adelante el ajuste contra los

trabajadores. De nuevo, la misma cantinela que en las elecciones argentinas. Resulta que Dilma y Cristina están a la izquierda de Macri y Temer, que no han realizado ningún ajuste ni han reprimido a los trabajadores. Por supuesto, la corrupción como mecanismo constitutivo de la democracia burguesa no aparece como problemática.

Mientras los trabajadores ya han roto con ese personal político, la izquierda parece quedar atrapada en el mito que los bonapartismos han construido de sí mismos. El PTS ya no oculta su acercamiento al kirchnerismo y su defensa de Dilma. El PO dice oponerse al “golpe”, pero sin defender el gobierno del PT, una posición de lo más confusionista. ¿Sobre qué base se oponen a la destitución sino es sobre la caracterización de que una de las fracciones en pugna es más progresiva que la otra? Así las cosas, este punto parece ser un nuevo parte aguas en el FIT, esta vez como excusa para fracturar el acto del 1º de mayo. El pantano en el que a esta altura está hundido el FIT parece irremediable, en tanto la preservación del aparato y la lucha facciosa se imponen sobre la organización de la vanguardia y la preocupación por atraer los restos del reformismo se prioriza por encima de la construcción de una política independiente de cualquier fracción burguesa. Organizar a la clase de forma independiente implica la delimitación clara del reformismo. Hay que darle una alternativa real y organizarla mediante un llamado a un congreso de trabajadores ocupados y desocupados que aglutine a la vanguardia para discutir una política independiente.

OMAR DIB
ABOGADO

Tel.: (011) - 4383-0098
E-mail: diib@argentina.com

El Aroma
Periódico Cultural Piquetero
Año XIV • Nº 88 • Marzo-abril de 2016

Buenos Aires
ISSN 1851-1813

Editora responsable: Lanina Harari
Diseño e imagen: Santiago Rossi Delaney
Corrección: Rosana López Rodríguez

Redacción: Condarco 90, CABA, CP: 1406
elaromo@razonyrevolucion.org

Para publicitar en *El Aroma*:
publicidad@razonyrevolucion.org

Para comunicarse con el Centro de Estudios
e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS):
ceics@razonyrevolucion.org

Para solicitar cursos de
extensión y perfeccionamiento:
docentes@razonyrevolucion.org

Para comprar libros, revistas, CD's,
periódicos y consultar nuestras promociones:
ventas@razonyrevolucion.org

Para solicitar notas, entrevistas
o difundir material ya publicado:
Julia Egan - 1151650487 -
ryrjulia@gmail.com

Barrilete Libros - Centro cultural
y librería de Razón y Revolución
Condarco 90, CABA, Arg. CP: 1406

www.razonyrevolucion.org

Los artículos firmados corren por exclusiva responsabilidad de los autores, asimismo las opiniones vertidas en las entrevistas corren por exclusiva responsabilidad de los entrevistados.

Todos son Dilma

La descomposición de la política burguesa en Brasil



Nicolás Grimaldi
Grupo de Análisis Internacional

Finalmente, por 367 a 137, la Cámara de Diputados aprobó el inicio al juicio político contra Dilma, acusada de realizar manio- bras fiscales para retrasar el pago de préstamos y maquillar el déficit fiscal. Una práctica co- mún, en la que también incurrió el ex presi- dente Fernando Henrique Cardoso. Ahora será el Senado el que deberá decidir si aprueba o no el inicio del juicio. La izquierda argentina, ha salido a defender nada menos que a un go- bierno que, además de ajustador y poblado de personajes de la rancia derecha, le ha robado alegremente a los trabajadores. El problema es que no comprenden la magnitud de lo que está en juego.

Buenos muchachos

La posible salida de Dilma es solamente el pun- to de partida de una crisis política cuyo fin no se avizora todavía. En los hechos, Dilma queda- ría apartada de su cargo por 180 días, asumien- do su vicepresidente Michel Temer hasta la fi- nalización del juicio. Si el Senado la encuentra culpable, Temer continuaría en el cargo hasta el 2018. Sin embargo, este personaje está sospe- chado por irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral, a lo que debe sumarse que el magistrado de la Suprema Corte, Marco Aurelio Mello, ordenó la apertura del juicio político por el mismo delito que se le impu- ta a Dilma.¹ Si Temer, en consecuencia, es des- tituido antes de fin de año, debería llamarse a elecciones anticipadas. En caso de que el juicio suceda después de fin de año, solo los miem- bros del Congreso votarán a un sucesor hasta el 2018. Durante el tiempo que lleve elegirlo, la presidencia sería ejercida por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que también está procesado por corrupción, cobro de sobornos y por poseer cuentas ocultas en el extranjero, además de estar involucrado en los Panamá Papers. Es decir, si cae Dilma, caen, en un efecto dominó, quienes la voltearon. Si el PT perdió el apoyo popular, sus enemigos no lo aseguran para nada. Un eventual gobier- no de Temer tiene tan solo un 2% de intención de voto, mientras que un 60% pide su renun- cia. En el caso de Cunha, más del 70% del país pide su salida de la Cámara de Diputados. En ese sentido, una de las alternativas que se bara- ja es el llamado a elecciones presidenciales an- ticipadas, en simultáneo con las elecciones mu- nicipales de fin de año. De suceder esto, habrá un rechazo en las urnas ya que los potenciales candidatos, Lula, Marina Silva y Aécio Neves, no logran superar el 21% de intención de voto. El propio Neves está implicado en casos de co- rrupción. Es decir, el vínculo político entre la burguesía y la clase obrera está roto. Como ve- mos, la crisis política de Brasil recién comienza y no tiene un final en el mediano plazo. Ahora bien, ¿estamos ante un golpe de Estado contra Dilma? Por supuesto que no. La sepa- ración de un mandatario a través de un juicio político no es un golpe. La noción de “golpe de Estado” supone la remoción de un gobier- no con medios por fuera de lo legal y, gene- ralmente, remite a un cambio de régimen. Los opositores al “golpe” fundan su defensa del go- bierno PT en la suspensión del orden constitu- cional, al solo efecto de vulnerar los derechos democráticos más elementales de la clase obre- ra y la persecución abierta a sus organizacio- nes. No es este el caso. El juicio político está contemplado en la Constitución. Quienes ini- cian el proceso son partidos republicanos cons- titucionales, como el PMDB y el PSDB, que no deben ser confundidos con el fascismo. Más aún, el PT ha gobernado Brasil en alianza con uno de ellos durante todos estos años. No está planteada ninguna avanzada represiva, ni hay



por el momento ninguna amenaza real al or- den capitalista. Pero hay una cuestión más profunda a obser- var. Quien realmente está echando a Dilma es una alianza aun circunstancial entre la burgue- sía y la clase obrera. Una fracción de la burgue- sía quiere sacar a Dilma para restablecer una dirección legítima y evitar el estallido social que viene gestándose. Otro grupo de dirigentes burgueses quiere aprovechar la situación para hacerse con el poder. Pero la clave es que la cla- se obrera viene acumulando descontento por el ajuste que ha sufrido durante estos años, a lo que se suma una indisimulable irritación con la corrupción del gobierno. Recordemos que las movilizaciones callejeras voltearon al ortodoxo ministro Levy, una especie de López Murphy en versión brasileña. Sin embargo, esta alianza es explosiva en un do- ble sentido. Primero, porque tanto el PMDB como el PSDB han dicho que en caso de ser gobierno deberán profundizar el ajuste, algo que la clase obrera no está dispuesta a aceptar. Segundo, porque como vimos, la clase obrera no apoya ni a Temer ni a Cunha ni a Neves, quiere que se vayan ellos también. Es decir, no están de acuerdo ni en el programa a seguir ni en la dirección que debe hacerlo. En el mismo sentido, no debe confundirse lo que la clase obrera agita, con lo que la oposi- ción quiere hacer con eso. Es completamen- te legítimo que las masas le exijan al gobierno su salida si no cumplió con lo que prometió. Que la oposición se haya apoyado sobre eso, no anula el reclamo. Y es que, en términos po- líticos, estamos ante una crisis en la relación del representado (la clase obrera) y el representante (personal de la burguesía). En Brasil, el repre- sentando le está exigiendo al representante que rinda cuentas o que se vaya. Apoyar a Dilma no solo es frenar ese proceso y contribuir a ce- rrar la crisis, sino negarle a la clase obrera el de- recho a reclamar que sus enemigos no le roben ni hagan lo que quieran una vez que suben al gobierno. Peor aún, es evitar que la clase obre- ra vaya por los empresarios implicados en los casos de corrupción. En otras palabras, evitar que el proletariado desarrolle un combate que recién se inicia. No hay que exigir que se quede Dilma, sino que se vayan ella, Temer, Cunha, Neves y todos los que representan a la clase que gobierna.

¿Se viene la derecha?

El programa del PMDB, en alianza con el PSDB, es la profundización del ajuste. Hace un tiempo, el grupo disidente emitió un do- cumento titulado “Un puente para el futuro”, donde planteaba su plan de gobierno.² Allí, cuestionaba la indexación inmediata de los gastos primarios, planteando que genera de- sequilibrios entre ingresos y egresos, como por ejemplo en el área de previsión social, debido al envejecimiento de la población en las últimas

décadas. En segundo lugar, propone el fin de la indexación de salarios, beneficios de la segu- ridad social, y demás programas pagados por el Estado, para que sea el Congreso y el Poder Ejecutivo los que cada año decidan los aumen- tos otorgados. En tono con lo anterior, pro- pone “presupuesto con base cero”, que signi- fica que cada año se estudiará la continuidad de cualquier programa estatal. Como punto si- guiente, propone ampliar la edad mínima de jubilación y que esta vaya subiendo a medida que se eleve la esperanza de vida. Obviamente, también propone que las jubilaciones tampoco sean ajustables por indexación. En torno al en- deudamiento, el PMDB apuesta al ajuste fiscal para controlar la inflación para bajar los intere- ses de la deuda y evitar que la misma siga cre- ciendo respecto al PBI. Ahora bien, ¿esto quiere decir que el PMDB viene a ajustar porque Dilma no lo ha hecho? No, Dilma ajustó, y mucho. En 2013, el PT atacó las bonificaciones salariales, el seguro de desempleo, las pensiones por fallecimiento, y las pensiones por enfermedad. En el 2015, es- tableció otro recorte sobre los planes sociales. Para este año, el nuevo ministro de Economía, Nelson Barbosa, anunció un recorte del gasto público de 5.780 millones de dólares. Allí mis- mo sostuvo que ya se habían recortado unos 17.260 millones de dólares en 2015. Pero aún hay más. Dilma vetó el reajuste de la Bolsa de Familia, que intentaba acompañar la inflación.³ De esta forma, el presupuesto para el programa creció solo un 3,97%, mientras que la inflación lo hizo en un 16% desde el úl- timo aumento, hace... 20 meses.⁴ Estos vetos fueron ratificados por el Congreso, lo que de- muestra la voluntad de ajuste de la burguesía. Dilma ya había vetado el aumento de 78% a los empleados judiciales.⁵ Es decir, ante el ad- venimiento de la crisis, el PT no dudó y ajustó, lo que explica que la clase obrera haya prota- gonizado más de 3 mil protestas en los últimos años. Lo que vemos a través del PT es la disolución de un partido burgués que había logrado hege- monizar a masas reales, con un proyecto que empezó con un programa reformista y fue acer- cándose cada vez más a cualquier partido con- servador. Es decir, Dilma no es mejor Temer, y aunque lo fuera, no se puede elegir al mejor burgués porque de esa forma se evita la cons- trucción de una alternativa propia.

La izquierda en su laberinto

Como podemos ver, la crisis se está resolvien- do en el campo de la burguesía, que elige el personal político para realizar el ajuste. Hasta el momento, la clase obrera se ha movido den- tro del rechazo a los candidatos burgueses. La izquierda en general caracterizó esto como un golpe. El PO sostuvo que la caída de Dilma im- plicaría un “espaldarazo” a Macri y aceleraría la caída de Maduro. Lo primero solo es cierto si

La posible salida de Dilma es solamente el punto de partida de una crisis política cuyo fin no se avizora todavía. Lo que se agotó no es un personal o un partido, sino la clase misma que gobierna en Brasil. Y no se la va a echar si no se la reemplaza con otra cosa.

la burguesía logra resolver la crisis, lo que no se ve por ahora. Lo segundo puede ser cierto, pero solo es factor de preocupación para aquel que apoya al chavismo y su ataque a la clase obrera venezolana. En una crisis, un revolucio- nario se prepara para intervenir con una polí- tica propia, no para apoyar al enemigo menos despiadado. Altamira, en una entrevista televisiva, dijo que la alianza del PT y el PMDB era “contranatura” y que era previsible que el segundo enfrentara al primero. Según su propio argumento, el PT representa a los trabajadores. Este esquema lo extendió a la fórmula Cristina-Cobos. En am- bos casos, un verdadero disparate. Hace más de 25 años que el PT es un partido burgués y hace más de 15 que abandonó su reformismo, por lo que no extraña su alianza con los conservado- res. Una alianza que duró más de una década. Lo que puso en crisis el acuerdo no fue la “na- turalaleza” fascista del PMDB, dormida duran- te tanto tiempo, sino la completa falta de apo- yo popular a un gobierno que debe encarar un ajuste. La hipótesis sobre Cristina y Cobos es una defensa tardía del kirchnerismo, al que se lo considera portador de intereses antagónicos al resto de los partidos burgueses. El caso es que el PO, cuando le endilga al PTS un seguidismo a Cristina, no hace sino hablar de sí mismo. El MRT de Brasil, ligado al PTS, llamó a lu- char contra el “golpismo institucional” y el ajuste, exigiendo una Asamblea Constituyente. Lo mismo: igual que aquí, apoyan una variante de la burguesía en lugar de desarrollar una po- lítica revolucionaria. Si no se apoya la destitu- ción, Dilma sigue. Si Dilma sigue, ¿qué sentido tiene la “Asamblea Constituyente”? La base de toda esta desorientación es el me- nosprecio a la acción obrera, toda vez que no aparece dirigida por una organización revolu- cionaria. Que el proletariado no haya inter- venido todavía no significa que no pueda ha- cerlo si no se lo prepara. Que no haya exigido la revolución no significa que no se haya pro- nunciado: lo hizo en las 3.000 movilizaciones que son la base de la crisis. Sobre eso hay que trabajar. La clase obrera debe echar a Dilma. Ahora, sin esperar las componendas del senado. Y así como se va Dilma, tienen que irse todos los implicados, políticos y empresarios. Lo que se agotó no es un personal o un partido, sino la clase misma que gobierna en Brasil. Y no se la va a echar si no se la reemplaza con otra cosa. Primero, exigir la revocabilidad inmediata de los mandatos. En segundo lugar, el fin del ajus- te y la degradación de la vida. Si todos ofrecen lo mismo, los trabajadores deben dar un paso al frente y hacerse cargo de la economía. En el marco de la lucha contra Dilma y sus sucesores, la clase obrera tiene que organizarse en asam- bleas estaduales, tiene que convocar un gran congreso de organizaciones obreras, de obreros ocupados, desocupados, de las favelas, las ciu- dades y los suburbios, para debatir cómo se go- bierna y quién lo hace.

Notas

¹La Nación, 17/04/2016.
²Documento disponible en <http://goo.gl/D8NtkW>.
³Globo, 16/12/2015; 01/01/2016; 02/01/2016
⁴Estadao, 02/01/2016.
⁵Página 12, 22/07/2015.

¿Todo sigue igual de bien?

Las tensiones internas del PRO y del gobierno de Cambiemos



Federico Damián Genera
Laboratirio de Análisis Político

El arribo de Macri al gobierno estuvo acompañado por un discurso de “cambio”. Este implicaba, ante todo, “nuevas formas” de hacer política. Prácticas que se contraponían a las de su antecesor. Si antes había personalismo, ahora república. Si antes había una lucha facciosa de poder, ahora federalismo. Si antes había discurso único, ahora hay que “ceder la palabra”. En esa misma línea, se presentó a Cambiemos como un “equipo de trabajo”, ajeno a las luchas internas de cualquier partido —en especial de su rival, el Partido Justicialista—, donde todos están unidos por un “cambio para la Argentina”. Lo cierto es que, a poco de ser gobierno, el frente macrista empieza a mostrar sus primeras fisuras y tensiones internas.

El orden empieza en casa

Tras su triunfo nacional, Macri señaló la necesidad de “fortalecer el partido” y convocó a elecciones internas para abril de este año. No se le escapa que, convirtiéndose en gobierno y teniendo que sostener varios frentes en simultáneo, es necesario contar con un partido ordenado. En principio, el aparato parece controlado. Desde la dirección se dio libertad para conformar listas provinciales, pero con una advertencia “que no haya lío”.¹ Romero, presidente de la junta electoral fue claro en este sentido: “la interna se discute donde se tiene que discutir, que no es en los medios sino puertas para dentro”.² Así fue que, finalmente, se conformaron listas únicas evitando los comicios. Sin embargo, esto no quita que tras la aparente calma, no haya habido algunas internas y cortocircuitos. Veamos.

A nivel nacional el PRO seguirá en manos de Humberto Schiavoni, ex jefe de gabinete de Ramón Puerta en la crisis del 2001 y hoy a cargo de la Entidad Binacional Yaciretá. La ex diputada de la UCD y hoy senadora nacional por Córdoba, Laura Machado, ocupará la vicepresidencia. Ella trabaja en estrecha colaboración con Emilio Monzó, jefe de los diputados PRO, quien si bien tiene conflictos con Vidal ha sido un hombre de confianza de Macri y el responsable de todo el armado político para que el partido trascienda la General Paz. La vicepresidencia estará a cargo de la diputada por Santa Fe, Ana Martínez, quien responde a Larreta. Por último, como secretario general se proyecta Marcos Peña. Cómo puede verse, la cúpula parece ordenada y responde al núcleo duro de confianza de Macri: Peña, Vidal y Larreta. Asimismo, si se observa el cambio de las vicepresidencias, que pasan de Gabriela Michetti y Federico Pinedo a Martínez y Machado, se percibe un intento por darle al partido una composición nacional despegándose del perfil

porteñoista. En la Ciudad de Buenos Aires la interna existió y fue visible: se saldó en las PASO entre Michetti y Larreta. Es sabido que desde un comienzo Macri quería a Michetti como vice y a Larreta como jefe de gobierno porteño. Si el partido terminó yendo a las PASO con dos listas fue producto de la insistencia de Michetti, quien terminó forzando al líder del partido, que aceptó a regañadientes. Finalmente el triunfo de Larreta derivó en el control del partido en CABA: él quedó como presidente y las dos vicepresidencias fueron para personajes de su entera confianza: Carmen Polledo (vicepresidenta de la legislatura porteña) y Martín Borelli (subsecretario de Asuntos Regionales del ministerio de Justicia de la Nación).³ La derrota de Michetti se tradujo en su desplazamiento, junto a Pinedo, de la dirección del partido y el corrimiento a espacios sin ningún poder territorial: Michetti en la vicepresidencia, Pinedo en el senado, Guillermo Montenegro en la Embajada de Uruguay, Daniel Chain está en AySA bajo el control de Rogelio Frigerio, y Hernán Lombardi a cargo del Ministerio de Medios Públicos.

En la provincia de Buenos Aires, el PRO tiene una labor más compleja. Legalmente, el partido esta intervenido, perdió su personería y necesita normalizarse. Si bien la fecha programada era para principios de marzo, María Servini de Cubría estiró la fecha para julio. Al frente de la intervención quedó María Fernanda Inza, una funcionaria PRO que trabaja en la Secretaría Legal y Técnica de Nación que depende de Pablo Clusellas, amigo personal de Mauricio. Vidal es la candidata “natural” a la dirección del partido, luego de ganar la gobernación. No obstante dos nombres aparecen en carrera: Jorge Macri y Emilio Monzó. El primero es intendente de Vicente López; el segundo, el presidente de la cámara de diputados nacional.

Vidal cuenta con línea directa con Nación, lo que se traduce en contactos fluidos con el cuerpo que rodea al presidente. Uno de esos nexos lo realiza Edgardo Cenzón, ministro de Infraestructura, quien tiene la llave de la obra pública provincial y diálogo constante con los intendentes. Su armador político es Federico Salvai, aliado de Peña y Larreta. A su lado Vidal tiene también a Marcelo Gigante, Ministro de Coordinación y Control de gestión, entidad que por su función de control presupuestario lo pone siempre en todas las conversaciones de los intendentes. Su otro aliado fundamental es el actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Él tiene la capacidad no solo de convocar a los intendentes propios, sino también a varios del PJ. Ya se reunió en reiteradas oportunidades con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y con su par de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Si Grindetti le garantiza a la gobernadora el sur

del Conurbano y la tercera sección bonaerense, el vidalista Manuel Mosca (vicepresidente de la cámara de Diputados provincial) brinda presencia fuerte en la séptima sección y Héctor Gay (intendente de Bahía Blanca) en la sexta. Por su parte, Jorge Macri es titular del Grupo Bapro y fue el jefe de la campaña electoral en la provincia. Cuenta con el apoyo de Daniel Angelici, que a su vez ejerce un fuerte dominio en la segunda sección bonaerense. La titularidad del Bapro le permite una vía de financiamiento. A principios de marzo mantuvo diversas reuniones con intendentes de la segunda y tercer sección. Reuniones en las que dejó claro su apoyo a la obra pública. A su vez, controla la primera sección electoral. Producto de la campaña, Macri también ancló en la quinta sección; de hecho días atrás volvió a la costa a mostrarse junto a los intendentes de Mar del Plata, Carlos Arroyo y de Pinamar, Martín Yeza.

Emilio Monzó es otro de los que actores principales en la interna. Tiene poder en la cuarta sección, donde logró colocar tres hombres en la nómina de legisladores nacionales, contactos que quedaron producto de su intendencia en Carlos Tejedor en el 2003. Monzó también tiene una pata en la Octava sección con la presencia de su hermano, el senador Gabriel Monzó. Su capacidad política se puso a prueba durante las elecciones 2015 cuando fue el encargado de instalar la fórmula presidencial de Macri en el interior del país. Por ello fue premiado con el cargo presidente de la Cámara de Diputados. Monzó sabe que cuenta con el visto bueno del presidente, y su cercanía a Frigerio lo mantiene con recursos políticos para actuar.

Este panorama nos permite ver dos cuestiones. La primera es que Vidal es la mejor preparada y quien seguramente se quedará con el partido. Sin embargo, a sus espaldas Jorge Macri y Monzó le pisan los talones. Estas internas hoy están silenciadas, pero seguramente se harán evidentes en las legislativas del año próximo y más crudas aún en la disputa para la gobernación en 2019.

Balcarce 50

Más allá del partido, en el equipo de ministros e incluso entre correligionarios del PRO, también comenzaron a sentirse las tensiones. La primera se manifestó en torno a la discusión de los fondos de coparticipación provincial y tuvo como protagonistas a Marcos Peña (Jefe de Gabinete) contra Rogelio Frigerio (Ministerio del Interior y de Obras Públicas y Viviendas). Peña fue quién redactó el DNU donde se destinaban más fondos a Capital Federal, que pasaba de 1,4 a 3,75% de coparticipación, con el pretexto de poder cubrir sueldos y gastos operativos de la Policía Federal recientemente trasladada por Nación al distrito porteño. A ello se suma que el gobierno ya estaba cumpliendo el fallo de la Corte Suprema que obligaba a restituir el 15% retenido por nación a tres provincias: Córdoba, Santa Fe y San Luis. Esto hizo estallar a los gobernadores, que ya venían exigiendo un trato igualitario en coparticipación, y fue Frigerio quien contuvo la furia. Primero organizó una “mesa chica” para negociar con el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey en el hotel Palacio Duhau. Luego, oficializó la negociación con otra reunión, ya pública, en la Casa Rosada. Allí estuvieron Urtubey y otros 12 gobernadores del PJ (Gustavo Bordet de Entre Ríos, Rosana Bertone de Tierra del Fuego, Domingo Peppo de Chaco, Carlos Verna de La Pampa, Gildo Insfrán de Formosa, Alicia Kirchner de Santa Cruz, Sergio Casas de La Rioja, Lucía Corpacci de Catamarca, Sergio Uñac de San Juan y Juan Manzur de Tucumán). Concluidas las negociaciones, Frigerio encabezó una conferencia de prensa donde anunció que se corregiría el DNU y que Nación se pondría al día con



A poco de ser gobierno, el frente macrista empieza a mostrar sus primeras fisuras y tensiones internas. La suerte del macrismo y de todo su equipo está atada al financiamiento externo y a un ajuste sin demasiada conflictividad.

las provincias transfiriendo fondos por \$ 4.000 millones. Haciendo su parte, Urtubey reconoció públicamente la “buena predisposición” del gobierno y recalcó: “Acompañamos la iniciativa del Gobierno. Hay una decisión tomada para que haya una mayor participación de las provincias en los recursos”.⁴

Hay, sin embargo, un frente que encuentra a Peña y Frigerio aliados. Es la disputa contra el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Peña busca arrebatarle el manejo de los recursos del presupuesto nacional. Con el pretexto de “mayor transparencia”, su estrategia es crear una Oficina de Presupuesto, donde el control de todos los giros presupuestarios pase por la jefatura de gabinete. Un dato anecdótico muestra que ya existían tensiones. En la gira por Davos fue Peña quien eliminó de todas las fotos protocolares a Prat Gay, luego de que este decidiera realizar una conferencia de prensa propia para anunciar los planes económicos y perspectivas del gobierno.

Por su parte, Frigerio quiere amputarle la Dirección Nacional de Relaciones Fiscales con las Provincias.⁵ Se trata de una unidad dedicada a todas las cuestiones relativas a materia fiscal y financiera vinculadas a las jurisdicciones provinciales y municipales, a la vez que se dedica al análisis y sistematización de datos sociales, de producción, indicadores de desarrollo y gestión pública, y una amplia gama de estudios sobre variables económico-fiscales de las provincias y municipios. Es evidente que en la situación en la que se encuentra el gobierno nacional, contar con aliados provinciales (en particular, con los gobernadores del PJ) es una tarea imperiosa. Esta Dirección es una pieza clave, más aún para Frigerio que, como vimos, tiene a su cargo las negociaciones con el interior. En ellas, la cuestión fiscal y presupuestaria es prioritaria. Concentrar ambas funciones, las negociaciones y la administración de la caja, significaría una cuota de poder muy importante. Frigerio tiene, además, dos argumentos para pelear el espacio. Prat Gay puso allí al economista Nadin Argañaraz, quien está vinculado a José Manuel de la Sota. Un hombre con vínculos con el peronismo y el massimo, en semejante posición, no es una garantía de confianza. Por otro parte, Frigerio ya tiene experiencia en la materia, pues se desempeñó en el cargo en 1995, bajo las ordenes de Roque Fernández, por entonces ministro de Economía de Menem.

Como si esto fuera poco, el ministro de Hacienda enfrenta otros ataques. En las propias filas del macrismo recibe las críticas de Melconian (Presidente Banco Nación) y Sturzenegger (Banco Central), quienes lo enfrentan por “gradualista”. Las críticas de todo este arco están enfocadas a la política monetaria (emisión), el limitado recorte fiscal (ajuste) y el uso de deuda internacional para mantener gastos corrientes. El vocero principal de esta crítica es José Luis Espert, quien periódicamente ataca a Prat Gay por no disminuir el gasto fiscal y a su vez realiza una defensa de las políticas de Sturzenegger. Como defensor del actual ministro aparece Javier González Fraga, criticando al presidente del Central por no ponerle un freno a “la gente del mercado [que] es codiciosa y hay que mostrarle la posibilidad de perder”.⁶ Ya ha habido muestras concretas de estos “cortocircuitos”. Sturzenegger se ocupó de limitar la emisión y absorber el excedente circulante monetario mediante la emisión de letras. En

Lidia Mercedes Rodríguez

Paulo Freire

Una biografía intelectual

Surgimiento y maduración de la pedagogía del oprimido

PAULO FREIRE

Una biografía intelectual

LIDIA MERCEDES RODRÍGUEZ

Surgimiento y maduración de la pedagogía del oprimido.

COLIHUE

LIBROS QUE HACEN CAMINO

www.colihue.com.ar



paralelo se detuvieron las regulaciones cambiarias y fue así como el dólar fue ascendiendo hasta tocar los 16 pesos. Inmediatamente, Prat Gay –se dijo que también hubo una llamada del propio Macri⁷– pidió la inmediata intervención de Sturzenegger. Entonces el BCRA salió de la pasividad y en tres días (del 26 de febrero al 1 de marzo), vendió US\$ 515 millones de las reservas⁸. Lo que muestra que, más allá de las rencillas personales, lo que está en juego son dos formas de administrar el ajuste. Existe una fracción dentro del PRO que quiere avanzar sobre la economía con una terapia de shock.

Justicia para todos

La cuestión de la justicia es otro de los grandes focos de tensiones internas en la alianza Cambiemos. El eje del conflicto es el manejo de las causas de corrupción que abarcan a buena parte del equipo de ministros del kirchnerismo y hasta a la propia ex presidente. Dentro de Cambiemos el enfrentamiento se desarrolla entre Carrió y Daniel Angelici. Mientras que Lilita insiste en llevar a fondo las causas de corrupción contra el kirchnerismo, Angelici es mucho más moderado y cauto. Sus enfrentamientos son de carácter público. Durante el mes de marzo Carrió criticó la intervención política que ejercía Macri por medio de Angelici en la justicia, e incluso llegó a acusar al presidente de Boca de buscar la impunidad del kirchnerismo. Por estas afirmaciones, que derivaron en una denuncia formal, fue citada. La diputada prestó declaración testimonial ante el juez federal Sebastián Casanello en el marco de una causa que, por el impulso del fiscal Federico Delgado, comenzó a investigar al presidente de Boca por el supuesto de rol de operador judicial que le endilga la legisladora. Más allá de los alcances de la causa, que probablemente no conduzca a ningún lado pues difícilmente se pueda probar el “tráfico de influencias”, no es novedad el rol de Angelici como operador judicial. En el ámbito porteño su influencia alcanza al ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y al presidente del Consejo de la Magistratura, Enzo Pagani, con quien comparte la dirigencia del Boca Juniors. Meses después de que Macri ganara la presidencia su nombre apareció para manejar la Agencia Federal de Inteligencia (ex Side). La razón es su estrecha relación con Darío Richarte, número dos en la AFI y 3º vicepresidente de Boca. A

su vez, Angelici comparte su estudio de abogados –Estudios Richarte– con Diego Pirola, quien lleva la defensa de Boudou en la causa Ciccone. Dicho de otra manera, el operador de Mauricio en la justicia está asociado con los defensores del personal político que Carrió quiere encarcelar. La renuncia de Oyarbide fue otra muestra de esta batalla. Hacía un tiempo que Angelici mantenía reuniones con él, siendo este juez su principal nexo con la justicia federal. Oyarbide fue clave a la hora de frenar las causas más polémicas sobre corrupción kirchnerista: sobreseimiento al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito, a Boudou por sobrefacturación en las obras del Senado, y cajoneo de causas por irregularidades en Anses. Su estrategia apunta a renunciar, jubilarse y evitar el juicio político en el Consejo de la Magistratura. Lilita no dudó en disparar y reclamó que su renuncia estaba avalada por Angelici. A pesar de las expectativas de Carrió, primero Garavano (Ministro de Justicia) y luego Macri aceptaron la renuncia. La cuestión judicial no es un problema menor porque no es tan sencillo para el macrismo ir a fondo. Para todo político burgués el tema de la corrupción es un arma de doble filo, se sabe dónde se empieza pero no donde se termina, cayendo ajenos y propios en la volteada. Una pequeña muestra es la causa de dólar a futuro por la que recientemente fue a declarar Cristina: el juez Bonadio la inició contra el personal kirchnerista, y ahora el fiscal Jorge Di Lello imputó al propio Bonadio y a Sturzenegger por haber efectuado el pago. El reciente affaire de los *Panama papers* es otro ejemplo. En un principio pareció manchar solo a personajes del PRO, siendo Macri y Grindetti, los casos con más repercusión. Scioli se apuró a señalar “creo en las explicaciones que ha dado Mauricio”.⁹ No pasó mucho tiempo hasta que salió a la luz que el mismo Daniel también estaba implicado en el escándalo, a través su “Gaucho Inc” de la que figura como presidente y director. Probablemente Macri se contente con meter en la cárcel a algún que otro personaje ligado al kirchnerismo. Lázaro Báez y Ricardo Jaime ya tienen prisión preventiva. Podrá avanzar con algunos funcionarios más, pero difícilmente se anime a llegar hasta Cristina. El hecho de que haya sido citada a declarar por una causa menor es todo un dato. Por su parte Carrió podrá hacer todo el alarde que quiera sobre la corrupción y la impunidad, porque es el único capital político que tiene. Pero la estrategia de Macri

es no ir a fondo y difícilmente Lilita se anime a romper con Cambiemos. Es más, ya cambió su domicilio y se anunció su intención de participar como candidata de Mauricio en las legislativas del 2017 de la provincia de Buenos Aires.

¿Para siempre?

Macri a través del PRO y la alianza electoral Cambiemos logró conquistar la presidencia e incluso bastiones impensados como la provincia de Buenos Aires. A pesar de su discurso de “trabajo en equipo”, lo que queda de manifiesto es que esos espacios se encuentran recorridos por tensiones internas. No son, sin embargo, simples peleas personales. En el fondo, lo que genera conflictos son las tareas políticas que el gobierno tiene poder delante: resolver la “herencia”. Por un lado, los problemas de un país quebrado que requieren avanzar con el ajuste. De allí toda la disputa entre gradualismo y shock que ese manifiesta en los pasillos de Hacienda. Por otro, la necesidad de garantizar la gobernabilidad del conjunto del país, lo que obliga a negociar con los gobernadores del PJ, es decir más gastos y cierta capacidad para establecer alianzas. Allí aparecen los roces entre Prat Gay, Peña y Frigerio. Por último, la herencia judicial del kirchnerismo que obliga a Macri a hacer algo luego de haber insistido en su campaña con la lucha anticorrupción. En

el medio de todo eso, mantener ordenado el partido. Es evidente que las contradicciones internas aún no han detonado ni en fraccionamientos explícitos ni en rupturas. Están contenidas. Pero la suerte del macrismo y de todo su equipo está al financiamiento externo y al ajuste sin demasiada conflictividad. Si esas variables, que están íntimamente relacionadas, no se mueven favorablemente, todo el armado del macrismo puede colapsar y hacerse explícito lo que hasta ahora aparece más o menos larvado.

Notas

- ¹Clarín, 28/03/2016, en <http://goo.gl/suRP9O>
- ²Télam, 28/03/2016, en <http://goo.gl/RE7lIN>
- ³Revista Qué, 28/03/2016, en <http://goo.gl/053PnI>.
- ⁴La Nación, 27/01/2016, en <http://goo.gl/7Rdua2>.
- ⁵Infobae, 08/03/2016, en <http://goo.gl/qF9xnA>
- ⁶El Cronista comercial, 03/03/2016, en <http://goo.gl/qZnkv2>.
- ⁷Clarín, 04/03/2016, en <http://goo.gl/iV6ge8>
- ⁸La Política Online, 16/02/2016 en <http://goo.gl/0XyL5C>.
- ⁹La Nación, 05/04/2016, en <http://goo.gl/0SwYyA>.



Opción psicológica

Experiencia y confidencialidad

Coordinación:
Lic. Silvia Weitzman
Lic. Saul Jelen
Docentes UBA

Teléfono: 4861-6355
Los honorarios los convenís
con tu profesional

El espejo austral de la Argentina

La crisis económica y social de la provincia de Tierra del Fuego



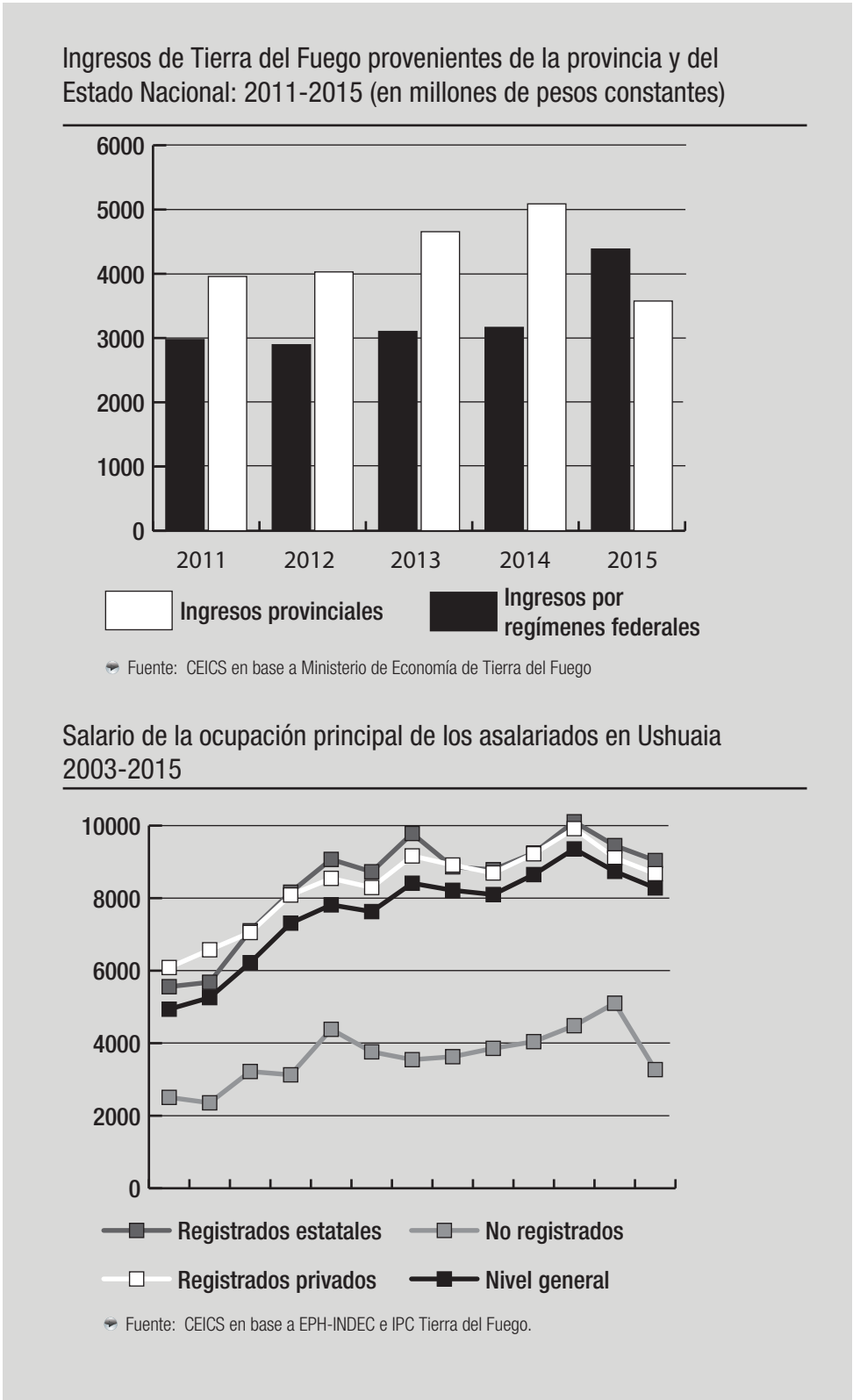
Sebastián Cominiello
Oficina de Estadísticas Sociales-CEICS

En 2011, el gobierno kirchnerista festejaba el récord histórico de empleo industrial en la región fueguina como resultado de los planes de promoción industrial que se sancionaron en 2009. Hoy, lejos de esos festejos ficticios y de esas promesas, la provincia atraviesa una crisis económica, social y política. El conflicto desatado desde principios de año debido a los despidos y las medidas de ajuste por parte del gobierno provincial echa luz sobre las condiciones económicas y sociales en que se desarrolla la provincia más austral del país. Como veremos, Tierra del Fuego es un fiel reflejo en pequeña escala del capitalismo argentino: una estructura productiva ineficiente, donde el Estado sostiene a buena parte de la población.

Una industria provincial chica

Según las proyecciones del INDEC, Tierra del Fuego contaba con 143.987 habitantes en 2015, de los cuales el 99% era población urbana. El crecimiento demográfico entre 2001 y 2010 en la región fueguina fue del 32%, mientras que, en el total del país fue del 9,1%. No obstante, es la provincia con menor población de la Argentina en términos absolutos. En esta zona geográfica se destacan dos actividades, por lo menos desde hace tres décadas. Una de ellas se vincula con el ensamblaje de electrodomésticos y otra el empleo estatal provincial. A mediados de 1960, Tierra del Fuego se dedicaba a la producción ganadera. Luego comenzó la explotación del petróleo y gas en el extremo norte de la isla, una producción relevante hasta el día de hoy. A partir de los años '70 comenzó un proceso de crecimiento de la industria por medio de la sanción de regímenes de promoción industrial. Durante los '70 y los '80 la migración de firmas dedicadas a la producción de televisores fue acompañada por otras empresas productoras de bienes electrodomésticos y de hilados de fibras artificiales. Este hecho dio origen a una estructura industrial diferente de la existente hasta ese entonces. Fundamentalmente se realizaba el armado de televisores y electrodomésticos (ensamblaje) con componentes importados.¹ Nos encontramos entonces, con el primer antecedente de las industrias de ensamblajes de la década kirchnerista. El perfil manufacturero emergente estaba dominado por estas tres actividades que, en conjunto, dieron cuenta del 81% del producto fabril fueguino.

Durante el la etapa kirchnerista, en 2009, el Estado sancionó la Ley de Impuestos Internos, la cual, como su nombre lo indica, incrementó los impuestos y duplicó el IVA a los productos importados. De esta forma, se avanzó en la sustitución de importaciones: si en 2008 se importaban casi todos los celulares, dos años después, casi el 80% se ensamblaba en la isla. Lo mismo sucedió con los monitores LCD: Tierra del Fuego abastece el 85% del mercado interno, mientras que antes era todo importado. Sin embargo, en 2012, el 37,3% del valor total exportado por la provincia correspondió al rubro Combustibles y energía (93% destinado a Chile), las manufacturas de origen industrial contribuyeron con un 25% y los productos primarios, con casi el 23%. El 15% restante lo aportaron las manufacturas agropecuarias.² Como vemos, más allá de las promociones encabezadas por el Estado, la industria del ensamblaje no logra transformarse en una plataforma que exceda los límites de nuestro país. Incluso se encuentra por debajo del de rubro Combustibles y energía. En este sentido, la provincia cuenta con un desarrollo productivo chico que depende exclusivamente de los subsidios y gravámenes estatales. La actual crisis en Tierra del Fuego se enmarca en un contexto de



reducción del financiamiento del Estado. Por ello toda la estructura fueguina tiende a colapsar y choca con sus propios límites.

La estatización de los isleños

La estructura del mercado de trabajo en la provincia de Tierra del Fuego muestra el elevado peso del empleo estatal. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el empleo público contribuyó un 29,8% a la ocupación durante el año 2015. La industria manufacturera, un 18%. Estos dos sectores explican la situación social de casi la mitad de la población ocupada fueguina. A su vez, según información del Ministerio de Trabajo de la Nación, la ocupación de la rama “Radio y Televisión” (ensambladoras), registró en el año 2014 a 8.344 empleados, cifra que representaba el 21% del total del empleo registrado privado de la provincia. Comparado con otras provincias, Tierra del Fuego se caracteriza por el más alto nivel de empleo estatal del país. En 2013, contaba con 122 estatales cada mil habitantes. Algo equiparable a las provincias de Santa Cruz (105), Neuquén (94), La Rioja (99) y Catamarca (104), mientras que, el promedio del total del país era de 49.³ El elevado peso del empleo público redundaba en que el 42% del total de gastos del Estado provincial se dirigían a la remuneración del personal estatal. Es decir, poco menos

de la mitad va destinado a sostener el empleo. Esto, más que tratarse de un buen desempeño del Estado, nos habla de lo poco que tiene para ofrecer el sector privado en la provincia. Por un lado, la industria de la provincia se sostiene con subsidios estatales; y, por otro, la mayoría de los puestos de trabajo son ocupados por personal estatal. De este modo se entiende por qué Tierra del Fuego requiere de fondos que no puede generar y de los recursos del Estado Nacional. Como se observa en el Gráfico I, desde el año 2011, y a partir de los fondos federales, el Estado Nacional aportó el 43% de los ingresos de la provincia. Entre los años 2003 y 2015, la coparticipación federal que recibió Tierra del Fuego en términos reales (aplicando el índice de precios de la provincia) se incrementó un 81%.

La crisis en Tierra del Fuego se desata en un momento de fuerte disminución de los ingresos recaudados por la provincia. Como se advierte en el gráfico, la recaudación provincial se redujo en un tercio durante el año 2015 respecto del 2014. Por esa razón, la isla requirió de un mayor presupuesto por parte del Estado Nacional. A pesar del incremento del orden del 39% de fondos nacionales, el resultado de recursos totales de los que dispuso la región austral durante el año 2015 fue negativo, puesto que disminuyó un 3,5% respecto del año anterior.



Tierra del Fuego es una provincia en llamas. Se ha desatado una crisis social, política y económica debido a su endeble estructura productiva y su dependencia del presupuesto estatal. Estas características ilustran los límites del capitalismo en Argentina.

En este contexto, la gobernadora del Frente Para la Victoria, Rosana Bertone, impulsó un plan de ajuste: despidió a cerca de 1.000 trabajadores estatales e implementó un paquete de medidas que atenta contra las ya precarias condiciones de vida y trabajo de los obreros. En efecto, este ajuste viene a deteriorar una caída del poder adquisitivo que remite al año 2013. Como se observa en el Gráfico II, los asalariados registrados del sector público y privado vieron deteriorarse su poder adquisitivo entre los años 2013 y 2015 en un 11,5%, cuyo nivel se asemeja al peor momento de la crisis de 2009. Mucho peor es la situación de los trabajadores “en negro”, quienes en un año perdieron una capacidad de compra del 36%. Esta caída salarial se traduce en un elevado índice de pobreza, el cual se estimó durante el año 2015 en un 27%. Por su parte, para el mismo período, una de cada tres personas que residían en hogares cuyo jefe es un asalariado registrado del sector privado, era pobre.

Una vuelta al 2001

La crisis de Tierra del Fuego impulsó a la gobernadora provincial a ejecutar un ajuste que representa un ataque brutal a la clase obrera fueguina. Un ajuste que se parece mucho al que implementó De La Rúa en plena crisis de 2001. Quizás por ello no sea casual que este paquete de medidas haya sido sancionado por el Frente Para la Victoria con el apoyo de la UCR. Las medidas impulsadas por la gobernadora Bertone incluyen un recorte de salarios de los estatales y una suba en la edad y la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarse. De los 25 años de aportes (los “25 inviernos”) que sancionaba la legislación provincial, ahora se deberá aportar 30 años. Por su parte, la edad jubilatoria se amplía de 50 y 55 años para mujeres y hombres, respectivamente, a los 60 años para ambos sexos. Es decir, el estado provincial propone que la clase obrera fueguina realice 10 años más de aportes y de trabajo para las mujeres y de 5 años más de aportes y trabajo para los hombres. No obstante, esta medida es de mediano plazo. Para el corto, la Gobernadora sancionó la emergencia del sistema previsional y creó un fondo solidario para el pago de jubilaciones al que aportan jubilados y trabajadores en actividad. A este fondo “solidario” los trabajadores activos deberán aportar un 1% de sus haberes si tuvieran menos de 45 años; un 3% si tuvieran entre 45 y 50 años y un 4,5% si tuvieran más de 50. Como puede observarse, una vez más la crisis se descarga sobre las espaldas de los trabajadores. La clase obrera fueguina paga el estallido de una crisis que se debe a una estructura productiva inviable. Un fiel reflejo a escala provincial del funcionamiento del capitalismo argentino.

Notas

¹Roitter, Mario: *La industrialización reciente en Tierra del Fuego*, CEPAL, 1987. Disponible en <http://goo.gl/PYJmx4>.

²Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias: *Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur*, 2013. Disponible en <http://goo.gl/rr8dJp>.

³Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía. Disponible en: <http://goo.gl/PZnb1J>.

El conflicto en el fin del mundo

Estatales y metalúrgicos frente al ajuste en Tierra del Fuego



Juan Manuel Duarte
Grupo de Investigación de Historia de la
Economía Argentina

En todo el país se suceden despidos tanto en el sector público como privado, y en muchas provincias se desarrollan situaciones de conflicto particulares. El ajuste es presentado por el llamado “progresismo”, cuya voz más escuchada es la del Frente para la Victoria, como la consecuencia de la victoria de Macri. Lo cierto es que en las provincias gobernadas por estos personajes Nac&Pop, la situación no es diferente. Tanto el FPV como el PRO son garantes del funcionamiento del capitalismo en nuestro país y, como tales, hacen lo que está a su alcance para cerrar las cuentas fiscales, golpeadas duramente por la situación de la economía nacional y mundial.

En este marco, todos los gobernadores tocaron la puerta de la Casa Rosada en pedido de ayuda económica. En el caso de Tierra del Fuego, se logró materializar un acuerdo de asistencia financiera del Estado Nacional a la provincia mediante el convenio 17.421 que fue ratificado por la ley provincial N° 1.067¹. Por supuesto, hay problemas estructurales locales que deben atenderse para hacer frente a la emergencia económica provincial, a los que el ejecutivo provincial recién asumido respondió con la propuesta de leyes 1.068, 1.069 y 1.070, que modificaron las leyes que regulan el sistema previsión y la obra social provincial. Todo esto, aprobado por una cómoda mayoría otorgada por los legisladores del FPV y la UCR.

Como respuesta, en la provincia más austral del país se viene desarrollando un conflicto de gran envergadura que puede servir de ejemplo de las luchas que los trabajadores tenemos por delante.

El frío ajuste...

Muchos trabajadores recuerdan la extensión de la edad jubilatoria en el año 1993, de la mano de Carlos Menem y su reforma del Estado. Millones eran obligados a continuar trabajando cinco años más para acceder a la jubilación. Lo que se buscaba era una reducción del presupuesto destinado al pago de los haberes, y una fuente de recursos adicional no solo de la mano de aquellos que seguirían aportando para obtener el mismo “beneficio”, sino de quienes se morirían antes de llegar a la edad sin cobrar nada.

Algunas provincias continuaron haciéndose cargo de las jubilaciones de los trabajadores provinciales, y no traspasaron esos aportes a la caja de ANSES. Por este motivo Formosa, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen regímenes jubilatorios diferentes para sus empleados. Las jubilaciones que pagan las cajas de la provincia tienen generalmente menores requisitos que los que pide ANSES para un beneficio similar. Y los sueldos son calculados de una manera más favorable al jubilado en la mayoría de los casos. En el caso de las provincias patagónicas, los sueldos y jubilaciones tienen adicionales por las condiciones desfavorables de la zona, lo que además justifica el hecho de tener que acceder antes al retiro.

Esos “privilegios” ya fueron atacados por Cristina Kirchner y Diego Bossio, que dieron pelea por los fondos que reclamaba la provincia de Córdoba para sostener su caja de jubilaciones². Bossio argumentaba que Córdoba paga jubilaciones caras, y que debía “armonizar” el sistema previsional³. Ahora son muchos los gobernadores que ven estas cajas como una variable para llevar adelante el ajuste. Si los institutos provinciales se declaran en emergencia o insolventes, se va a intentar “armonizarlos” cambiando los requisitos para acceder a las prestaciones —como pasa hoy en Tierra



del Fuego- y, si no lo logran, es posible que el Estado Nacional busque colocarlos en la órbita de ANSES, lo que significaría una importante pérdida de conquistas para los trabajadores. En las medidas propuestas desde el ejecutivo fueguino se reconoce la emergencia económica del IPAUSS (la caja de jubilaciones fueguina) y se lo disuelve. Se reglamenta además un escandaloso descuento adicional, compulsivo pero “solidario”, a los trabajadores en actividad y los jubilados. El descuento se hace automáticamente en función de una escala por nivel de ingresos y edad, reglamentada en la misma ley. Por ejemplo, según lo dispuesto, los trabajadores activos tendrán que pagar un 1% de aportes adicionales si son menores de 45 años. En caso de tener entre 45 y 50 años, deberán aportar un 3%, y aquellos cuya edad exceda los 50 años pagarán el 4,5%. En el mismo acto legal, se decide la incautación de las utilidades del Banco de la Provincia, como parte de la medida para aumentar la recaudación.

Así como aumentan las tarifas en aras de la federalización de la miseria, con el argumento de “la igualdad” van a nivelar hacia abajo al conjunto de los trabajadores. El ejemplo de Tierra del Fuego permite ver como la gobernadora Bertone, como buena kirchnerista, mete la mano en la lata de los aportes jubilatorios para ajustar el bolsillo del trabajador.

...al calor de la lucha

El ajuste se desarrolla en marco de una escalada conflictividad en varios gremios estatales y docentes provinciales (ver nota en esta misma edición). A esto se suma la grave situación de los trabajadores de las fabricas metalúrgicas y ensambladoras de artefactos eléctricos y electrónicos, que ven amenazada su continuidad laboral y el pago de los sueldos en el marco de la crisis de la rama, con reclamos y acciones laborales desde hace más de dos años. Todos estos sectores tienen un importante peso en el empleo dentro de la provincia.

Tras las sanción de las leyes, en una larga y custodiada sesión, que culminó en la madrugada del 9 de enero, asambleas y juntadas de firmas buscaron el apoyo de la mayoría de los

fueguinos. Es que la solidaridad entre los distintos sectores se va imponiendo por la magnitud de la batalla en curso. En un conflicto que lleva más de 50 días, las movilizaciones en la calle se sucedieron semana a semana. Algunas son consideradas las más grandes de la historia de la provincia, como la del 9 de marzo que reunió a más de 16.000 trabajadores. Solo la UOM se desplazó por las calles de Río Grande, junto a más de 6.000 metalúrgicos, el 29 de marzo. El pico en la conflictividad lo marcaron los cortes de rutas en toda la provincia —que fueron levantados el 27 de marzo—, y el acampe realizado en la sede de la Legislatura Provincial, que cuenta con guardia permanente de trabajadores de distintos sectores. El 12 de abril se realizaron varios piquetes en distintos puntos de toda la provincia, mientras que sectores como los bancarios, se sumaron a las medidas declarando estado de asamblea durante dos horas del horario de atención. Sin embargo, un pase a ofensiva por parte del gobierno parece vislumbrarse tras la visita de Rogelio Frigerio para los actos del 2 abril, y el envío de tropas de gendarmería dispuesto por Patricia Bullrich a pedido de la gobernación. Esto demuestra un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el provincial, y trae a la memoria aquellas jornadas de lucha contra los despidos y cierres de fábrica en la década de los 90. En esa oportunidad, el obrero Víctor Choque era asesinado en Ushuaia por el accionar conjunto de gendarmería y policía provincial.

A la cabeza... del ajuste

Hasta ahora, tienen un lugar protagónico las conducciones de ATE (que nuclea estatales, lo que incluye a jubilados) y la UOM (que reúne a los trabajadores de las fabricas ensambladoras). Marcelo Córdoba, Secretario general de ATE Río Grande, se muestra confundido por la política de la gobernadora, y declara que las medidas lo sorprenden porque están “lejos de la doctrina justicialista”⁴. Luis Raña, conducción del mismo gremio, entiende, en el mismo sentido, que la gobernadora no es una “verdadera” kirchnerista, sino más bien una menemista⁵. Este artificio, que muchos kirchneristas

El ajuste es presentado por el “progresismo” como la consecuencia de la victoria de Macri. Lo cierto es que en las provincias gobernadas por estos personajes Nac&Pop, la situación no es diferente. El ejemplo de Tierra del Fuego permite ver cómo la gobernadora Bertone, como buena kirchnerista, mete la mano en la lata de los aportes jubilatorios para ajustar el bolsillo del trabajador.

“puros” esgrimen contra aquellos que quedan expuestos por las políticas de ajuste, se cae rápidamente con solo mirar unos kilómetros más al norte, donde Alicia Kirchner no se queda atrás en cuanto a represión y medidas reaccionarias. Por su parte, UPCN —reconocido por ser eternamente oficialista— merece una mención por su coherencia: ha decidido dejar pasar los despidos en todos lados sin chistar. Oscar Martínez, de la UOM, es, para colmo, diputado nacional por el Movimiento Solidario Popular, un partido provincial que garantiza el quórum al FPV cada vez que lo necesita. Pues bien, este señor se levantó de la sesión que pretendió tratar la baja del impuesto a las ganancias. No conforme con esto, es cómplice de la situación precaria en la que son contratados temporariamente los trabajadores que dice representar. No solo dejó avanzar la precarización en la provincia. Avaló la caída y suspensión de más de 6.000 contratos temporarios entre 2014 y 2015, argumentando que no deberían considerarse despidos, sino simplemente “finalizaciones” de contratos.⁶ El mismo argumento canallesco que el macrismo usa para dejar a miles de trabajadores estatales en la calle.

Mientras tanto, los trabajadores de la empresa Foxman, en donde se ensamblan electrodomésticos de la empresa Crown Mustang, decidieron hacerse cargo de la fábrica tras 4 meses sin cobrar sueldos, en el marco de una política de vaciamiento por parte de la patronal. La UOM responde tramitando un “bono solidario”⁷...

Por otra dirección

Para derrotar el ajuste, además de bonos y colectas para los compañeros que no cobran sueldos, es necesaria la nacionalización del conflicto. La mayoría de los gremios de peso, como ATE y la UOM no están haciendo nada para lograrlo. Tienen estructuras enormes y manejan toda la plata que se nos descuenta mes a mes, pero juegan para la patronal. El PRO y el FPV ya se han puesto de acuerdo en lo fundamental para intentar derrotar a los trabajadores fueguinos. Cuentan con Caló, como queda claro en lo que relatamos. Necesitamos un congreso nacional de trabajadores ocupados y desocupados, con delegados mandatados de cada lugar del país. Esta es la herramienta que nos permitirá derrotar las maniobras de las burocracias sindicales, los planes de los gobiernos provinciales y el nacional, y discutir las experiencias de lucha para sacar las conclusiones que permitan encarar el combate que se viene.

Notas

¹ <http://goo.gl/IHFLPd>
² <http://goo.gl/ungQvi>
³ <http://goo.gl/LbwWao>
⁴ <http://goo.gl/eThs6s>
⁵ <http://goo.gl/x3l50k>
⁶ <http://goo.gl/ZfD4vp>
y <http://goo.gl/4TXHvE>
⁷ <http://goo.gl/Jdi9kM>

A la deriva

La situación de la clase obrera ocupada



Julia Egan
Taller de Estudios Sociales-CEICS

Desde la asunción de Macri, todo el arco de la burocracia sindical se alineó bajo el argumento de la “gobernabilidad”: habría que dejar pasar un tiempo prudencial para que el nuevo presidente mostrara los resultados de las medidas económicas. Aun cuando ya corrían 20 mil despidos estatales y otras decenas de miles del sector privado, Moyano se jactaba de que nunca había realizado un paro en los primeros 50 días de ningún gobierno. ATE, por su parte, tardó casi tres meses en llamar a un paro nacional de estatales, principal rama afectada por el ajuste, mientras que a la CTA le tomó un mes más evaluar la gravedad de la situación. Pasaron más de 120 días desde la asunción de Macri y los sindicatos siguen sin asomar la cabeza, más allá de alguna medida aislada de cualquier plan de lucha. En esta nota, evaluaremos la situación actual de clase obrera ocupada en relación con los reclamos salariales, los despidos y las acciones para enfrentar el ataque del macrismo. Veremos que, a derecha e izquierda, las direcciones sindicales brillan por su ausencia. Mientras la burocracia ya acordó con Macri hace rato (con la entrega de los fondos de las obras sociales y aun después del desplante de Ganancias), la izquierda repite la tara que viene frenando su protagonismo y se divide en las disputas faccionales. En el medio, los trabajadores quedan cada vez más expuestos a una derrota que indudablemente dejará sus heridas.

Paseando tranquilamente detrás de la tortuga

Algunos sectores de la burocracia se empeñaron en generar expectativas respecto de los reclamos salariales. Mientras que Moyano anunciaba abiertamente su acuerdo con Macri, adelantando que su piso iba a ser del 28%, Barrionuevo se jugó con pedidos del 50%, Yasky del 40% y otros como Martínez (Construcción) y Schmidt (Transporte) vacilaban en un 30%. Sin embargo, la acuciante situación económica a la que son sometidos los trabajadores que hace años vienen perdiendo el poder adquisitivo del salario real, empujó al pedido de bonos de fin de año (ATE Buenos Aires, CICOP, AJB, APL, UOM, curtidores), sumas extraordinarias (comercio) o directamente sumas en concepto de adelanto de paritarias (bancarios, supervisores metalmecánicos), para apaciguar la situación. Hasta el momento, se cerraron 23 acuerdos

paritarios. De ellos, nueve son semestrales e incluyen a los gremios de estatales de Buenos Aires (UPCN y FEGEPPBA), Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), comercio (FAECYS), mecánicos (SMATA), judiciales (UEJN), Federación de la Carne, estaciones de servicio (FOESGRA), construcción (UOCRA) y los gráficos de Buenos Aires (Federación Gráfica Bonaerense). Mientras el aumento promedio de los acuerdos anuales alcanza el 32%, el de los semestrales es del 20,4%. Para estos últimos las situaciones son diversas: los estatales bonaerenses lograron apenas un 15% hasta julio, los playeros un 17% hasta septiembre, mecánicos 19%, trabajadores de frigoríficos 20%, judiciales 21%, todos en dos cuotas; por su parte, los gráficos un 25% en tres cuotas más una suma extraordinaria no remunerativa de \$2.000 y los empleados de comercio un 23% más una suma no remunerativa igual, ambos en dos cuotas. En el caso de los mineros, recibieron un 22% entre febrero y julio, sin embargo su implementación varía según cada empresa. Este acuerdo constituye una estafa puesto que implica que si una empresa otorgó un aumento con vencimiento en el mes de marzo, el acuerdo paritario de este año se aplicará recién durante abril, sin retroactividad para los dos meses anteriores. Una tercera modalidad fue la de los docentes neuquinos, que arreglaron un 22% por cuatro meses. El problema que presentan estos acuerdos es que, una vez cumplido el plazo, los sindicatos deben demostrar el suficiente poder de imposición para lograr la reapertura de las paritarias y además un aumento acorde a las necesidades del momento. Un caso aparte lo constituyen aquellos gremios que habían firmado por más de un año, ya que respetaron el 27,8% anual impuesto por Cristina y se libraron a la suerte del proceso inflacionario de los últimos meses. La UTA heredó del año pasado un acuerdo vergonzoso, cuando firmaron aumentos a 18 meses y su última cuota implica hacer frente al aumento del costo de vida con tan solo 10,6% por seis meses. Algo similar sucedió con ferroviarios, que había acordado a 16 meses y la última cuota cuatrimestral implicó un aumento del 13,8%. Si bien los acuerdos anualizados parecieran ser una mejor opción, tienen dos problemas. En primer lugar, el promedio de aumentos está inflado por la influencia de acuerdos docentes que superan el 30%. Y de aquí surge el segundo problema, que es que muchos de los sindicatos docentes provinciales presentan estos arreglos sin advertir que una parte de ellos corresponde a fondos nacionales como el Incentivo Docente (FONID), que son sumas no remunerativas, es

decir, en negro. Por ejemplo, en el caso de los maestros santafesinos el acuerdo anunciado es del 35%, pero el aumento real al básico es del 27%, para los cordobeses el total es de 32,7% pero el real también del 27%, y para los bonaerenses, 34,6%, con un aumento real del 25%. Los sindicatos docentes no solo no lograron imponerse al techo impuesto por el macrismo sino que además reforzaron la estructura salarial que hace tiempo viene dañando el bolsillo de este sector.¹ Esto debe sentar un precedente para las provincias que aún no cerraron sus acuerdos. Otros casos por encima del 30% son la administración pública de San Luis (40%), trabajadores de la salud de Tucumán (38%), estatales de Formosa (35%), panaderos (34%), municipales de Santa Fe (33%) y seguros (32%). Aun con estas cifras, no logran superar la inflación interanual que según diferentes estudios privados promedia el 35%; ni hablar de recuperar lo perdido tras la devaluación del 40%.

Haciendo la plancha

Como vimos, hasta los “mejores” acuerdos logrados resultan insuficientes. Aun así, los gremios que alcanzaron arreglos más beneficiosos son los que realizaron alguna medida de acción directa. Tal es el caso de los trabajadores de la salud de Tucumán, que atravesaron un mes con dos paros y asambleas hospitalarias, tras rechazar el ofrecimiento gubernamental de un 30%. También los docentes de Santa Fe que, con las deficiencias mencionadas, lograron superar en un punto la paritaria nacional, tras una movilización y un paro que impidió el inicio de clases. En la misma provincia, los trabajadores municipales realizaron dos paros provinciales de 48 horas y así pasaron del 28% ofrecido por el gobierno a un 33% de aumento. Sin embargo, los logros se limitan a este panorama. Desde el primer paro de ATE a fines de febrero, se realizaron 148 acciones que involucraron paros (48%), marchas (18%), piquetes (18%), concentraciones (10%), jornadas de lucha, retención de tareas y acampes (9%). La mayoría de las acciones fueron realizadas por trabajadores estatales (71%), al igual que los paros (76%). De los reclamos vertidos en las medidas, el 48% estuvo relacionado con el pedido de aumento salarial o de apertura de paritarias, el 30% fue contra los despidos y el 22% con condiciones de trabajo. De las demandas de los paros, el 55% se relacionó con paritarias o salarios y el 24% con despidos. Los paros de estatales mostraron un movimiento muy similar, con un 57% de demandas por salarios y un 24% por despidos.

Pasaron más de 120 días desde la asunción de Macri y los sindicatos siguen sin asomar la cabeza, más allá de alguna medida aislada de cualquier plan de lucha. A derecha e izquierda, las direcciones sindicales brillan por su ausencia. Mientras la burocracia ya acordó con Macri hace rato, la izquierda repite la tara que viene frenando su protagonismo y se divide en las disputas faccionales.

El detalle referente a los reclamos no es un dato menor, sino que nos estaría mostrando una menor preocupación por los despidos, a pesar de su magnitud, desplazándolos hacia el problema salarial. Si a esto le sumamos el bajo desempeño de las negociaciones paritarias y la alta fragmentación de la lucha (no hay paros generales y las medidas son sectoriales y escasas), se podría entender que la regimentación del movimiento obrero a partir de los despidos masivos estaría funcionando. En términos paritarios, lo que estaríamos viendo es una tendencia a seguir la línea impuesta por Macri, ya sea por los porcentajes acordados o por el tiempo de duración de los acuerdos, lo cual es todavía más peligroso, ya que no sabemos cuál será el panorama del mercado de trabajo hacia mediados o fin del año. De aumentar los despidos, aún los sindicatos más poderosos se verán imposibilitados a negociar la reapertura de paritarias o un porcentaje acorde al aumento del costo de vida. Aún falta ver qué pasa con camioneros, gastronómicos y metalúrgicos, que terminarán de dar el tono a la negociación, pero es poco probable que se desvíen del camino delineado.

Ni resistencia, ni aguante, ni lucha

Las direcciones sindicales burócratas parecen haber decidido esperar hasta que aclare. Con el dinero de las obras sociales y del fondo de desempleo, van a dejar que pase la tormenta, conservar sus estructuras y con ello una base que les permita trascender este gobierno. No hay otra explicación que justifique no haber movido un pelo por los casi 68 mil despidos en el sector privado en solo cuatro meses. Entre los estatales, UPCN va en la misma línea, mientras que ATE llama a un paro sin articulación alguna con un plan de lucha general para el sector. Si esperábamos que los partidos de izquierda constituyeran un lugar de concentración de la lucha sindical, han fallado nuevamente, tal como lo hicieron con la experiencia del FIT. Más allá del pedido en el Congreso de impedir despidos, propuesta que comparten con el moyanismo, continúan con actitudes internistas mezquinas del estilo de no compartir siquiera una lista para elecciones gremiales, como sucedió en gráficos. Hace meses que insistimos con el llamado a un Congreso de trabajadores ocupados y desocupados (incluyendo a obremos cooperativizados, perceptores de planes sociales). Esto no es un capricho. Lo que está en juego es una nueva derrota histórica de la clase obrera. Si el bonapartismo hizo retroceder la conciencia y la organización forjada tras el Argentinazo, es trabajo de los revolucionarios sacar a la clase obrera de la pasividad, dejando de lado sus disputas faccionales y asumiendo con responsabilidad las tareas urgentes del momento.

Notas
¹Véase Cubilla, Sandra: “Al borde”, en *El Aromo* n° 89. Disponible en <http://goo.gl/a15i7x>.

En busca del Aromo

Obreros misioneros en la producción forestal de la provincia de Entre Ríos



 Ezequiel Flores
Taller de Estudios Sociales-CEICS

En números anteriores de *El Aromo*¹ vimos que la rama forestal en la provincia de Misiones se caracteriza por su elevado nivel de concentración y composición orgánica. Como consecuencia de ello, se produjo la descalificación en las labores de la fase primaria y la reducción de la cantidad de trabajadores ocupados en dichas tareas, incrementando la masa de población obrera que se constituye en población sobrante para el capital. Expulsados de la rama y sin otras alternativas para vender su fuerza de trabajo en su provincia, estos obreros resultan mano de obra barata para contratistas y empresas forestales, tanto locales como de otras provincias. En calidad de migrantes temporarios, los trabajadores se desplazan principalmente a las plantaciones de pino y eucalipto en Corrientes y Entre Ríos, donde el avance técnico de la actividad es menor. Simultáneamente, una parte de estos desocupados también es contratada para tareas de poda y mantenimiento en postes de media y alta tensión en el Delta de Buenos Aires. En esta nota, examinaremos las condiciones de trabajo y vida de los migrantes temporarios que se desplazan a la provincia de Entre Ríos.

Paraíso de eucaliptos

La forestación en Entre Ríos avanzó estimulada por una política de desgravaciones impositivas. Así, hacia la década de 1970 se sembraron 60 mil ha de eucaliptos en Concordia, una zona fundamentalmente citrícola y ganadera. Actualmente, la provincia cuenta con 154 mil ha de bosque implantado, concentradas en los departamentos de Concordia, Federación y Colón. El 69% de dicha superficie está cubierta por eucaliptos. En informes técnicos, se identifican distintos tipos de forestadores según el perfil tecnológico con el que se realiza la producción². Las explotaciones de menor capacidad tecnológica representan el 20% de la superficie total del área y emplean al 15% del total de mano de obra. Realizan tareas mínimas de mantenimiento y el destino de la madera es el procesamiento para la obtención de celulosa o la producción de tableros. Las explotaciones de uso medio de tecnología representan el 65% de la superficie total y emplean al 24% del total de mano de obra. La madera obtenida se destina mayoritariamente a aserrío y minoritariamente al triturado para celulosa. Luego de cada turno de cosecha realizan tareas post cosecha y

podas bajas. También preparan el suelo, plantan, y finalmente controlan malezas y plagas. No realizan raleos. La tala se realiza con motosierra, la extracción con tractor con *linga* y la carga con cargadora frontal. Por último, las plantaciones de mayor nivel tecnológico ocupan el 15% de la superficie forestal y emplea al 61% del total de trabajadores. Este estrato busca obtener rollizos de calidad para aserrío y, por tanto, incorporan plenamente tareas de poda y raleo en los tres turnos de cosecha. A diferencia de lo que ocurre en la provincia de Misiones, la pervivencia de pequeñas y medianas forestaciones³ y la necesidad del ojo humano para clasificar el rebrote de eucalipto,⁴ retrasan la mecanización en Entre Ríos, lo que implica relativamente altos requerimientos de fuerza de trabajo, que es cubierta en un 80% por obreros rurales provenientes de Misiones. Además, estos trabajadores realizan la elaboración de distintos tipos de postes y se insertan, aunque en menor medida, en los aserraderos. Se suele señalar que la mano de obra local no se insertaría mayoritariamente en la fase primaria de la rama, debido a su inexperiencia y a las miserables condiciones laborales de una actividad considerada como riesgosa.⁵ No obstante, hay un tercer elemento de importancia que queda relegado: la preferencia de los contratistas por trabajadores misioneros, a quienes les atribuyen menor conflictividad que sus pares entrerrianos, mejor conocimiento del oficio y mayor adaptación a las condiciones del monte.⁶ Más allá de lo que digan los empleadores, lo que sucede es que la condición de trabajador migrante les permite prolongar la jornada laboral aumentando la tasa de explotación. Esto queda claro al momento de verificar la forma de remuneración. Los obreros forestales que viven y trabajan en Entre Ríos perciben una paga por jornal, mientras que los migrantes temporarios son remunerados a destajo. Podría plantearse que la radicación en Entre Ríos de los migrantes y su familia, es una mejor opción. No obstante, la realidad muestra que, en los casos que esto ha ocurrido, las condiciones de vida no mejoran sustancialmente. De hecho, tienen que empezar por conseguir un alquiler y, debido a los bajos salarios, las mujeres suelen emplearse en labores de otros cultivos, como el arándano. Por otro lado, la mano de obra local es ocupada mayoritariamente en la industria de aserrío y en el armado de cajones para la rama avícola y citrícola. Aquí podemos observar similitudes en las condiciones de contratación entre los obreros locales y los migrantes temporarios: en conjunto, el sector primario y secundario de la

rama, presenta niveles muy altos de trabajo en negro y trabajo infantil. Durante el 2015, las fuentes oficiales relevaron 2.582 casos de trabajadores en negro, de estos el 94% se detectó en Concordia. Además, en Colón se constataron casos de trabajo infantil.⁷

Infierno laboral

Volviendo al sector primario, la intensidad del trabajo hace que el grueso de los trabajadores sean varones jóvenes (entre 18 y 35 años). A su vez, el inicio en la actividad suele suceder a muy temprana edad (12 o 15 años de edad), lo que repercute en un bajo nivel de escolarización. Sirven de ejemplo las denuncias de niños trabajando en tareas como el pelado de rollizos durante el raleo.⁸ Como norma general, los migrantes temporarios se encuentran sin registrar y alternan 45 días de permanencia en Entre Ríos con un máximo de 10 días de estadía en su lugar de origen. Así, por cada 3 meses de trabajo, tienen tan sólo 20 días no laborables. En un año, pueden concretar 6 ciclos migratorios. Los pocos obreros contratados en blanco, deben viajar todos los meses. En cambio, los que se emplean sin registrar disponen de un mayor plazo entre viaje y viaje. Para estos últimos, la frecuencia de viajes depende de si consiguen alguna forma complementaria de ingresos en Misiones. Un claro ejemplo lo constituyen quienes poseen pequeñas parcelas y alternan la venta de su fuerza de trabajo con el cultivo de alimentos para consumo propio y para la venta. Así, la venta de lo producido en la chacra puede permitirles coyunturalmente reducir la cantidad de migraciones laborales durante el año. No obstante, dicha producción se limita solo a complementar los ingresos asalariados, siendo estos insuficientes para invertir en capital, extender los terrenos o innovar tecnológicamente. En los bosques de eucalipto, la jornada laboral se extiende de 10 a 12 horas, de lunes a sábado, descansando el domingo si es que no tienen que recuperar días de trabajo perdidos por lluvia u otras contingencias. En los campamentos, los obreros permanecen en precarias e improvisadas carpas de lona negra, casillas rodantes o de madera, éstas últimas armadas por ellos mismos a partir de retazos. En cualquiera de estas situaciones, los trabajadores viven hacinados y no cuentan con servicios básicos como luz eléctrica y agua potable. Al estar alejados de los centros urbanos, los alimentos son vendidos con sobrepagos por los propios contratistas quienes, a su vez, son propietarios de las máquinas y herramientas de trabajo (salvo en

En los últimos 30 años, la rama forestal en Misiones expulsó trabajadores rurales. Imposibilitados de vender su fuerza de trabajo en la provincia, los trabajadores se desplazan temporariamente a las forestaciones de Entre Ríos. Sobre esta determinación, se erigen las precarias condiciones de contratación y trabajo que sufren en la vecina provincia.

los casos de obreros propietarios de motosierras y ganchos para descortezar). Las tareas de cosecha (volteo, pelado, apilado y carga en camiones) son remuneradas a destajo. Lo mismo sucede con la poda y fumigaciones. Respecto a la cosecha, en sus inicios, la organización del trabajo en el monte establecía la división de tareas entre el motosierrista y sus ayudantes (peladores, apiladores y cargadores). Si bien la misma se mantiene, en ocasiones un mismo motosierrista realiza las tareas de volteo o corte y pelado o descortezado. La polivalencia laboral aumenta el riesgo de accidentes en una actividad ya de por sí riesgosa. Lo más común es que producto de las intensivas jornadas, los obreros acumulen lesiones que en un futuro les impedirán continuar empleándose en la actividad. Como están en negro, no gozan de obra social o de licencias por accidente.

La necesidad apremia

Como vimos, en Misiones, producto del avance de la mecanización, los obreros forestales fueron expulsados de la rama quedando desempleados. Este proceso reveló su condición objetiva de sobrantes para el capital. Sobre esta determinación, se erigen las precarias condiciones de contratación y trabajo que sufren en Entre Ríos. La primera batalla que dar, en términos sindicales, es el blanqueo de todos estos compañeros de forma inmediata y combatir la intermediación laboral a cargo de los contratistas. Esto pone sobre la mesa la necesidad de un sindicato nacional que defienda, con un programa clasista, a todo el proletariado rural, permanente y migrante.

Notas

¹Véase Flores, Ezequiel: “Los que quedaron en el camino. Cambio técnico y condiciones de trabajo en la producción forestal en Misiones”, en *El Aromo*, n° 82, enero-febrero 2015; Flores, Ezequiel: “Triturables. Condiciones de trabajo y lucha sindical en la industria celulosa del Alto Paraná misionero”, en *El Aromo*, n° 87, noviembre-diciembre, 2015; Flores, Ezequiel: “Caídos de la rama. Desocupación y organizaciones campesinistas en el Alto Paraná misionero”, en *El Aromo*, n° 88, enero-febrero 2016.
²Díaz, Diana y Bardomás, Silvia (2010). “La demanda de mano de obra en forestación (eucalipto), provincia de Entre Ríos.” En Neiman, Guillermo (dir.): *Estudio sobre demanda de trabajo en el agro argentino*, Ediciones Ciccus, Buenos Aires, pp. 105-118.
³Véase <http://goo.gl/cGuX2o>.
⁴Los árboles de eucalipto producen cepas de nuevos eucaliptos conocidas como “rebrote”. De estos rebrotes, hay que realizar una selección de lo que sirve para elaborar postes.
⁵Díaz y Bardomás, op. Cit.
⁶Alberti, Alfonsina, Bardomás Silvia y Schiavoni, Gabriela: “La ruta a Concordia: Migración y ciclos laborales de trabajadores forestales misioneros”, Ponencia presentada en V Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo, septiembre, 12 y 13, Posadas, Argentina. Disponible en <http://goo.gl/OwQTBg>.
⁷Véase <http://goo.gl/FPLzfe>.
⁸Véase <http://goo.gl/7vzIAS>.

La patria cooperativa

La creación sistemática de cooperativas de trabajo durante el kirchnerismo

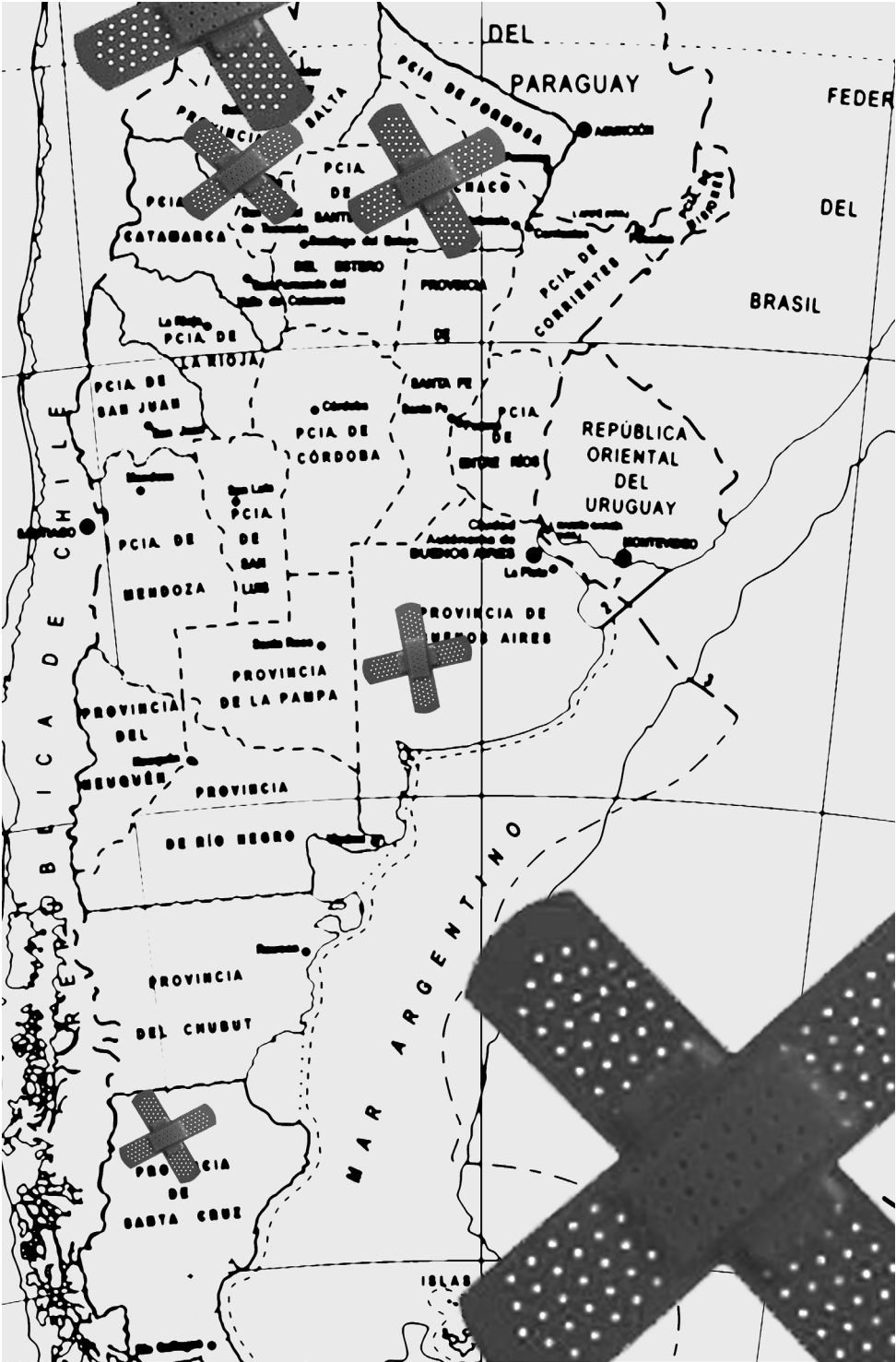


Nahuel Audisio
Taller de Estudios Sociales-CEICS

“Con nuestras organizaciones hemos resistido durante años al modelo neoliberal, pero hoy ya no se trata de resistir sino de utilizar la experiencia y la fuerza acumuladas para construir una nueva Argentina”.¹ Con estas palabras, se daba a conocer el frente de piqueteros kirchnerista, una alianza entre las organizaciones piqueteras autonomistas y reformistas con el gobierno kirchnerista que recién se hacía cargo de un país en crisis. Néstor prometía revertir los efectos de las políticas menemistas que llevaron a las crisis de 2001, redistribuyendo la riqueza y terminando con la pobreza y la desocupación. En el fondo, el objetivo principal era cooptar y estatizar al movimiento piquetero. No era posible contener a las bases si no se mejoraban mínimamente sus condiciones de existencia. Entonces el kirchnerismo creó una serie de programas sociales que tuvieron como eje algún tipo de contraprestación al subsidio recibido por los trabajadores. La creación de cooperativas se convirtió en la vía principal para implementar esta política. No es casual que la mayoría de estas cooperativas se hayan creado en las provincias más pobres y en donde el movimiento piquetero tuvo mayor fuerza años anteriores.

Cooperativo y solidario

Si bien la creación de cooperativas de trabajo no es un fenómeno reciente en la historia argentina, es recién en la década de 1990 que empieza a crecer en forma sostenida. En total, para la década de 1990 se registraron en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) 412 cooperativas de trabajo. Pero es el kirchnerismo el que se va a concentrar en aumentar el padrón del INAES. El registro de cooperativas durante este gobierno va a aumentar en forma exponencial. Para el inicio del mandato de Néstor, la cantidad de cooperativas creadas era de 1.365. Entre los años 2000-2003 se habían registrado 817 entidades, duplicando solo en 3 años la cantidad de cooperativas creadas durante la década menemista. En los dos primeros años gobierno kirchnerista, se crearon un total de 3.249 cooperativas, muy por encima de los tres años anteriores. La creación de estas cooperativas se da en el contexto del mayor período de movilizaciones del movimiento piquetero durante los gobiernos kirchneristas.² El año 2006, presenta una disminución de la cantidad de cooperativas creadas. En total se crean 934 entidades. Esta disminución coincide con un importante aplacamiento de los conflictos y movilizaciones del movimiento piquetero. El objetivo político se concretó: una gran fracción del movimiento piquetero fue incorporado al estado y fueron desarticulados los movimientos opositores, estableciendo así una nueva relación de fuerza entre ambos. Esto repercutió en la creación de las cooperativas de trabajo. Entre los años 2007 y 2008 se crean 1.769 cooperativas. La creación de cooperativas va a estallar en 2009 con la creación del Plan Argentina Trabaja. Ese año se crean 2.741 cooperativas. Para su implementación, el Ministerio de Desarrollo Social acuerda con los Entes Ejecutores (municipios, provincias, federaciones o mutuales) la formación y capacitación de cooperativas por medio del INAES, compuestas por alrededor de 60 trabajadores cada una, quienes tienen a su cargo la ejecución de obras públicas locales que demandan mano de obra. Entre los años 2010 y 2011 se crean 3.066 cooperativas de trabajo. Manteniéndose estable pero con un piso aún más elevado respecto a los años anteriores. La última gran explosión de cooperativas



ocurre en el año 2012: se crearon 5.848. En un año, se radicarón a lo largo de todo el país la misma cantidad que en cinco años de ejercicio del poder kirchnerista. El gobierno necesitaba mantener el reflujo del movimiento piquetero que había aumentado su presencia en las calles. Una vez que se aquietaron las aguas, la cantidad de cooperativas radicadas disminuyó conformándose 1.817 entidades para el año 2013. En el año 2014, la radicación de cooperativas ascendió a 4.321 entidades como respuesta al claro repunte de las exigencias de los cooperativistas, quienes habían ganado un gran protagonismo en las movilizaciones, cortes de calle y acampes. El último año de kirchnerismo nos dejó una disminución importante de cooperativas mientras que las movilizaciones y exigencias se mantuvieron. Es que el gobierno llegó con las últimas fuerzas para mantener el aparato asistencialista que mantuvo a los piqueteros bajo su ala.

Cooperando con la miseria

En las provincias del norte es en donde mayor cantidad de votos obtuvo históricamente el kirchnerismo. Es también en donde más creció el empleo público y las cooperativas de trabajo, factores claves para explicar esta supremacía de FVP en todas las elecciones en las que participó. El promedio de cooperativas radicadas en el conjunto de las provincias del norte es de una cooperativa cada 627 habitantes, mientras que en la región centro (excluyendo la provincia de Buenos Aires), es de una cooperativa

cada 2.735 habitantes. Veamos entonces como se reparte la caja en las principales provincias cooperativas. En Jujuy, existen 1198 cooperativas, lo que representa una cooperativa cada 562 habitantes. La provincia tenía para 2001 el 26,1% de los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El cuarto más alto del país. Para el año 2003, el porcentaje de desempleo en el conglomerado San Salvador de Jujuy- Palpalá era de 39,3% mientras que la pobreza en el año 2003 era de 69,5%. Con este panorama, el paliativo de las cooperativas era fundamental para mantener la gobernabilidad. Once años después, la pobreza disminuyó tan solo al 27,3% para el aglomerado San Salvador de Jujuy- Palpalá.³ Chaco es una de las provincias más pobres del país y que más cooperativas tiene radicadas en su territorio. Actualmente se encuentran activas un total de 1.716 cooperativas, conformando un promedio de una cooperativa cada 615 habitantes. Para el año 2003, en el Gran Resistencia había un porcentaje de desempleo de 40,5% y una pobreza de 67,4%. En el año 2014, el 42% de los obreros chaqueños se encontraba aún bajo la línea de la pobreza. La provincia que sigue en cantidad de cooperativas radicadas por habitante es Tucumán, con un promedio de una cooperativa cada 690 habitantes. Para el 2003, año en que comienzan a crecer las cooperativas, el porcentaje de desempleo y pobreza era de 39,6% y 64,4% respectivamente para el aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo. Para el mismo aglomerado, en el 2014 la pobreza había disminuido a un 22,2%.

La creación de cooperativas se convirtió en la vía principal para cooptar al movimiento piquetero. No es casual que la mayoría de estas cooperativas se hayan creado en las provincias más pobres y en donde el movimiento piquetero tuvo mayor fuerza años anteriores.

En Santa Cruz, cuna del movimiento piquetero, se encuentran radicadas 331 cooperativas de trabajo. Esta provincia presenta un promedio de una cooperativa cada 718 habitantes, lo que la convierte en la cuarta provincia con mayor promedio de la Argentina. Para el año 2003, el porcentaje de desempleo era de 29,1% para el aglomerado Comodoro Rivadavia - Rada Tilly mientras que el porcentaje de pobreza era de 28,6%. Once años después, la pobreza alcanzaba el 8,6%. Si tenemos en cuenta el total de cooperativas radicadas, el 26,4% se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Para el año 2008, en esta provincia existían 3.367 cooperativas con un total de 3.180.100 asociados. Es decir, el 20% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires integraba una cooperativa. Para el año 2016, la cantidad de cooperativas de trabajo sólo en la provincia de Buenos Aires ascendió a 11449. En un lapso de 6 años de gobierno kirchnerista aumentaron un 340%. Igualmente, si tenemos en cuenta la cantidad de cooperativas por habitante, la provincia tiene una cooperativa cada 1.364 habitantes ubicándose por debajo de las provincias más pobres del país.

Somos los mismos de siempre

Como vimos, el kirchnerismo sembró cooperativas por todos lados. Principalmente en las provincias más pobres y en las más conflictivas. El conjunto de programas sociales que incluía la creación de estas entidades fueron implementados con la supuesta idea de redistribuir la riqueza. Pero el kirchnerismo se fue y dejó a enormes masas de obreros bajo la línea de pobreza. Si bien se revirtió la situación crítica del 2001, las cifras resultantes en 2014 no muestran una erradicación de la pobreza. A pesar del favorable precio de los commodities, solo logró contener al movimiento piquetero manteniéndolo en condiciones de vida miserables. En la región del norte, los piqueteros llevaron a cabo enormes luchas y fueron la punta de lanza para el desarrollo de los métodos que expulsarían a una fracción de la burguesía del poder en el 2001. Luego de esa expulsión, fue el mismo movimiento piquetero el principal beneficiado de los programas sociales. Tras ser desarticulado, los obreros desocupados que lo componían fueron sometidos a condiciones de miseria mientras la burguesía recompuso sus ganancias. No es casual que la gran mayoría de las cooperativas se radiquen en estas provincias a partir de la asunción de Nestor Kirchner ni que se hayan conformado aparatos políticos como el de Milagro Sala. Si el macrismo no consigue la plata suficiente, en estas provincias volverán a explotar la mayor parte de los conflictos de cooperativistas y desocupados. Volveremos a ver entonces aquellas grandes jornadas en donde los métodos piqueteros se imponían al ajuste de la burguesía. Para ello, la izquierda debe buscar organizarlos independientemente y repudiar las direcciones que aceptaron la miseria que ofreció el kirchnerismo, como la de Sala.

Notas

¹<http://goo.gl/X410ZY>
²<http://goo.gl/PDjZ3E>
³Estimación propia en base a datos del IPC San Luis.

¿Un conurbano indígena?

Acerca de organizaciones de “Pueblos Originarios” asentadas en el Gran Buenos Aires



Roberto Muñoz
Taller de Estudios Sociales-CEICS

Si uno se guía por las imágenes ampliamente difundidas en medios masivos de comunicación, por parte de la producción académica o por la intervención de diferentes partidos políticos, la supuesta “cuestión indígena” en Argentina estaría asociada a zonas rurales, alejada de los grandes centros urbanos. La Iglesia Católica y diversas ONG organizan colectas regulares para llevar donaciones al Impenetrable, equipos periodísticos se internan en el monte chaco-salteño para mostrar el hambre, partidos revolucionarios organizan viajes al interior rural de Formosa para conocer la realidad de los “hermanos aborígenes”. Sin embargo, los datos más inmediatos acerca de los llamados “Pueblos Originarios” muestran que siete de cada diez de las personas que se definen como parte de ese conjunto difuso, viven en ciudades. Es más, actualmente, uno de cada tres de ellos vive en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA -Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires-). Esto se desprende del Censo Nacional de Población de 2010, según el cual, del total de habitantes de la región Metropolitana, alrededor de 249 mil se reconocen como descendientes de, o pertenecientes a un pueblo originario, lo que equivale al 28% de la población que se identifica de esa manera a nivel nacional. En otras palabras, como ya dijimos en notas anteriores,¹ si tiene algún asidero hablar de cuestión indígena en Argentina, lo primero que salta a la vista es que se trataría de una cuestión eminentemente urbana. Esta concentración poblacional en el conurbano bonaerense hace inteligible la proliferación de entidades como las que siguen: Comunidad Indígena del Pueblo Guaraní “Cacique Hipólito Yumbay”, de Glew; Comunidad Indígena del Pueblo Moqoit “Nogoyin Ni Nala”, de Rafael Calzada; Comunidad Indígena del Pueblo Toba “Migtagan”, de San José; Comunidad Indígena del Pueblo Mapuche “Juan Kalfulkura”, de Longchamps, entre muchas otras dispersas a lo largo de los 24 partidos que lo componen. Veamos cómo se constituyen, quiénes las conforman y cuáles son sus principales reivindicaciones y demandas.

Tierra y vivienda

Es un lugar común afirmar que la principal demanda de los llamados Pueblos Originarios es disponer de las tierras que les corresponderían por derecho ancestral para poder desarrollar su vida, atada a pautas diferentes a las que rigen la sociedad capitalista. La Constitución Nacional de 1994 incluyó un apartado que establece la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios”, a la vez que reconoce “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano”. Esta normativa y la suscripción de Argentina al Convenio 169 de la OIT -que fija derechos especiales para los pueblos indígenas- dispararon los reclamos en ese sentido. Para poder tramitarlos, el Estado exige contar con personería jurídica. Es así que desde entonces emergieron gran cantidad de asociaciones indígenas. Sigamos el derrotero de una de las “comunidades indígenas”, instalada en la localidad de Glew: el nucleamiento guaraní “Cacique Hipólito Yumbay”. Compuesta actualmente por 18 familias, sus primeros integrantes llegaron a mediados de los 70. La familia troncal, oriunda del Chaco boliviano, vivía en Salta, primero en el campo y más tarde en la ciudad de Tartagal, trabajando en los ingenios de la zona. Con la crisis de la actividad y el avance de la frontera agropecuaria, fueron desalojados de las tierras que ocupaban. Luego, en sucesivos viajes, estas familias unidas por lazos parentales terminaron recalando en el barrio de



Pompeya de la Ciudad de Buenos Aires. Años después, escapando del hacinamiento, llegaron a Glew. Una vez aquí, sufrieron nuevos intentos de desalojo. Recién en este punto y ante esta situación, deciden tramitar una personería jurídica que les habilite el reconocimiento estatal como comunidad indígena. Finalmente, luego de sortear todo tipo de trabas burocráticas, la “comunidad” logró la compra de las tierras que ocupaban gracias a fondos otorgados por el INAI (Instituto de Asuntos Indígenas)². Se trata de un caso excepcional. El resto de las organizaciones con características similares de la zona todavía no corrió la misma suerte. Pero además, hay que resaltar que fuera de toda alusión culturalista, la descripción de los avatares de estas familias es la misma que la de miles de obreros por acceder a un techo. Sería difícil encontrar diferencias entre la condición social de estos “indígenas” y, por ejemplo, los que protagonizaron las tomas recientes de terrenos en Merlo.³

Migrantes

El mismo CNA 2010 indica que un porcentaje elevado de esa población que se reconoce como indígena ha migrado recientemente a la región del AMBA. Un 15% de ellos nació en otro país (podemos suponer, al señalarse una presencia “aymara” de una magnitud similar, que entre ellos se encuentra parte de la población de origen boliviano que vive en esta zona) y, en el caso de los argentinos, un 38,8% declaró haber nacido en otra provincia. El ejemplo más claro de este proceso se observa entre los que adscriben al “pueblo Qom”, oriundos de la región chaqueña y que desde la década del 60 y más marcadamente desde los 90, constituyen la mayoría de los que se establecen en el eje Rosario-Buenos Aires-La Plata. Precisamente, en las últimas décadas, varias de las provincias extra-pampeanas, en cuyos espacios agrarios se desarrollaban los tradicionalmente llamados cultivos industriales, experimentan un proceso de reconversión productiva a raíz de la reubicación de la producción ganadera y, fundamentalmente, del avance de los cultivos pampeanos, teniendo como punta de lanza a la soja y el paquete tecnológico asociado a ella. Esta modalidad implicó un corrimiento de la frontera agrícola sobre tierras hasta entonces consideradas marginales para el desenvolvimiento de la acumulación de capital. Una de las consecuencias de estas transformaciones fue la expulsión de importantes contingentes de población sobrante para el capital que salen de su estado latente y se hacen visibles al instalarse en las periferias de las ciudades. Esto explica el crecimiento demográfico de varias ciudades del interior así como también su asentamiento en Buenos Aires, entre otras. En ese sentido, se trata de una tendencia histórica al éxodo rural protagonizado por la pequeña burguesía pauperizada y, fundamentalmente, por la clase obrera que queda desocupada. La provincia de Chaco es un caso paradigmático al respecto: en el período intercensal 1991-2001, pierde 60

mil habitantes rurales⁴. Es dentro de este contexto general que en varias localidades del GBA han ido surgiendo entidades que se organizan en relación a la adscripción indígena de sus miembros. Desde la antropología, algunos trabajos se detienen en analizar las características que asume el proceso migratorio, destacando que su concepción de “comunidad” actuaría como factor de cohesión y solidaridad, que les permitiría “mantener viva su cultura” en los ámbitos de llegada. Una de las expresiones de este fenómeno sería la proliferación de “barrios tobas” en diferentes ciudades. Otros discuten si, en la nueva vida citadina, el avance de la “asalarización” entre estos pobladores pone en crisis o no su identidad indígena⁵. Todos estos planteos parten del error de considerar como específico de los llamados indígenas elementos que atraviesan a extensas capas de la clase obrera. ¿Qué diferencias sustantivas hay entre esta forma de organizar la migración basada en lazos intra/inter familiares y la que realizan los obreros agrícolas tucumanos o santiagueños que migran a levantar la cosecha de fruta fina en Río Negro o realizar el desfile del maíz en la región pampeana? ¿Acaso son distintas a las de los obreros bolivianos que se instalan en la ciudad de Buenos Aires y se emplean en los talleres de confección? Por otro lado, la idea del “avance de la asalarización” parte del supuesto falso de que en sus tierras de origen vivían bajo un modo de producción distinto, desconociendo el proceso de proletarianización ya completado hace por lo menos un siglo. Precisamente, es su condición de obreros desocupados lo que provoca la migración y una vez acá, como los mismos antropólogos señalan, siguen reproduciendo su vida estrictamente como obreros: fundamentalmente, como cartoneros o empleándose en las ramas de la construcción o de servicios (limpieza y mantenimiento) y, en el caso de las mujeres, en el empleo doméstico. Lejos de cualquier idealización académica o de las pretensiones indigenistas de retornar a los espacios “ancestrales”, una integrante de la comunidad mocoví de Berisso, decía: “Los que

Si tiene algún asidero hablar de cuestión indígena en Argentina, lo primero que salta a la vista es que se trataría de una cuestión eminentemente urbana. Los “indígenas” migran escapando de la desocupación y encuentran empleos precarios, estacionales, de bajos salarios. De allí que sus demandas inmediatas sean las mismas que el resto de los trabajadores

siguen en Santa Fe siempre dicen ‘me gustaría vivir en la provincia de Buenos Aires’. Porque a ellos no les llega nada, viven de lo que pueden sembrar o de criar animales. Es feo vivir allá, porque incluso las casitas son de nylon, es re pobre. Nosotros acá tenemos poca tierra, pero tenemos trabajo”.⁶ En síntesis, las aparentes diferencias culturales no tienen ninguna importancia. Sus condiciones de vida y de trabajo no difieren de las de amplias capas de la clase obrera. Migran escapando de la desocupación más cruda y acá encuentran empleos precarios, estacionales, de bajos salarios. De allí que sus demandas inmediatas, más allá de cualquier particularidad idiosincrática, sean las mismas que el resto de los trabajadores: trabajo, vivienda, educación, etc.

Obreros ocupados y desocupados

Una vez más, insistimos en la condición obrera de esta población. Las disposiciones estatales que fijan que la conciencia individual de su identidad indígena debe ser considerada como criterio fundamental para determinar su adscripción a un “pueblo originario”, los aísla del resto de la clase y los deja en manos ya sea de punteros de los partidos burgueses o de ONG ligadas a la Iglesia. El seguidismo de los partidos de izquierda en este terreno atenta contra la necesidad de soldar las fracturas en el interior de la clase obrera. Más allá de particularidades culturales, todos están atravesados por la relación de explotación en las que están insertos, y esa es su determinación fundamental.

Notas

¹Véase Muñoz, Roberto: “Ideas medievales”, en *El Aromo*, n° 81, 2015.
²Weis et. al.: op. cit.
³Véase Egan, Julia: “Okupas. Sobre las condiciones de vivienda durante la década kirchnerista”, en *El Aromo*, n° 88, 2016.
⁴Véase Muñoz, Roberto: “Vamos al corte. Reestructuración agraria y organizaciones campesinas en Chaco”, en *El Aromo*, n° 68, 2014.
⁵Véase Weiss, Laura et. al.: “Pueblos indígenas urbanos en Argentina: un estado de la cuestión”, en *Revista Pilquen*, vol. 16 n° 1, Viedma, 2013.
⁶Véase <http://goo.gl/Yo3r2N>.

Haunebu II

Ulises Pastor BARREIRO

Más información en:
www.ulisesbarreiro.com.ar

“Peligroso y de ideas depravadas”

La acción revolucionaria de Juan Martín de Pueyrredón



Juan Flores y Diego Dolgopol
Grupo de Investigación de la Revolución
Burguesa - CEICS

Poco se sabe sobre la figura de Juan Martín de Pueyrredón. Apenas si se menciona en los textos escolares y académicos su trayectoria política previa a su llegada al Directorio. Suele incluso ser caracterizado como una figura conservadora y reaccionaria (Puiggrós), cuando no un carrerista más del personal político revolucionario (Halperín Donghi). Sin embargo, como veremos, un mínimo acercamiento a los datos empíricos correspondientes al período 1806-1810 permite barrer con dichos prejuicios.

Familia de burgueses

Pueyrredón perteneció a una familia de comerciantes y propietarios de tierras de San Isidro. Durante la sucesión de la testamentaria de su padre, se encargó del giro de numerosas mercancías agrarias adquiridas en estancias, a la par de proseguir ciertas negociaciones subsidiarias de la ruta gaditana. Hacia 1795, se trasladó a Europa. En Cádiz se vinculó a la compañía de su tío Diego, a partir de la cual adquirió una buena cantidad de mercancías. Volvió a Buenos Aires en 1802 para colocarlas en el Virreinato. Por su correspondencia sabemos que, además del giro de variada mercadería, se insertaría en el tráfico de cueros.¹ De este modo, su actividad económica se ligó también a la campaña. Allí construyó sólidas relaciones con estancieros y hacendados. Ello repercutió en sus conocimientos técnicos sobre la producción. En su correspondencia, Pueyrredón aconsejaba a sus hermanos sobre la administración de estancias, así como demostraba ser lector del *Semanario de Agricultura, Industria y Comercio* de Hipólito Vieytes. Dichos negocios serían finalmente interrumpidos durante las Invasiones de 1806. Un nuevo deber revolucionario demandaría nuevas tareas.

Un peligro para la Corona

A comienzos de 1810, Pueyrredón se hallaba escondido en Río de Janeiro, bajo el amparo del conde de Linhares, ministro de la Corona portuguesa. En efecto, era objeto de persecución de sus mayores enemigos. Uno de ellos solicitaba al Marqués de Casa Irujo —embajador español en la Corte portuguesa— que procurara dar con él y apresararlo, para enviarlo a la metrópoli:

“Son infinitos los datos que constituyen a Don Martín de Pueyrredón sospechoso de aquella clase de hombres peligrosos e inquietos. Él fue uno de los que estando los ingleses apoderados de esta ciudad juntó gente y se batió con Beresford en el campamento de Pedriel con ánimo e intención de proclamar la independencia si salía vencedor.”

El relato continúa señalando su intensa agitación política:

“Enseguida pasó a España y resentido sin duda al verse poco premiado escribió al cuerpo de Húsares de que fue jefe, una proclama sediciosa (...) El 14 de junio, cuando me hallaba en la otra banda, congregó una Junta con el intento que no se me recibiese al mando de estas Provincias, en cuyo medio fundaba la idea de sublevar e inducir a la Independencia.”

Concluía finalmente: “No tengo duda que su conducta será la de continuar sus depravadas ideas”.² Quien escribe estas líneas es el Virrey Cisneros, un enviado de la Junta Central de Sevilla, con el deber asignado de encauzar el orden perdido en el Río de la Plata para 1809. Pueyrredón es caracterizado como un hombre de “proclamas sediciosas”, que busca “sublevar”



al pueblo de Buenos Aires con ideas “depravadas”, y con vocación de construir los organismos más dinámicos del proceso (las milicias). En resumen, parece tratarse de un auténtico militante revolucionario de la época. Y es que el nuevo virrey no elucubraba en el aire; estaba muy al tanto de la trayectoria política de Pueyrredón hasta esa fecha. Veamos un poco el recorrido que tanto inquietaba en la península. Durante la primera invasión inglesa, su situación económica holgada le había permitido armar tropas con sus propios recursos. El Cabildo reconoció más tarde que Pueyrredón “no dispensó gasto” en la empresa, tanto en alimento y vestido, como con el reclutamiento de peones.³ Estaba además acompañado de elementos de la burguesía rural, como estancieros y propietarios de tierras. Se trataba de una burguesía que se armaba en el contexto de una invasión, pero con una estrategia propia. Es en ese contexto que Pueyrredón se convierte en una dirección erigida en el marco de la apertura del proceso revolucionario. De este modo, dirigió una serie de importantes combates: tras ser derrotado en una avanzada del enemigo en la Chacra de Pedriel, lo veremos triunfar con las tropas de Liniers, en la Reconquista del 12 de agosto de 1806. Reconquistada Buenos Aires, Pueyrredón se ocupó de formar un Batallón de Húsares, en el cual obtuvo el grado de coronel. Unos meses más tarde, el Cabildo le encomendaba una misión, eligiéndolo para informar a la Corona lo sucedido en Buenos Aires y obtener las gracias y mercedes reales. Retengamos este dato, porque nos da la pauta de la importancia del personaje como cuadro político. No cualquier dirigente sería elegido para presentarse ante el Rey y la Corte, en nombre del Cabildo. Sin embargo, el desprecio que percibe por parte de Godoy —ministro de la Corona— y la intención de esta última de disolver las milicias lo convencen de que estas negociaciones fracasarían. Para 1808 el avance francés sobre la península era incontenible. El rey Carlos IV abdicaba su trono y su heredero, Fernando VII era aprehendido. Comenzaba, de este modo, la formación de Juntas de gobierno y la resistencia del pueblo español. Pueyrredón era testigo allí de la descomposición del orden feudal. Era evidente que ya nada podía esperarse de ese imperio en decadencia. En una carta privada a un amigo —José Núñez— lo expresaba de este modo: “La Ruina de este Reino va a seguirse inmediatamente; y no crea usted otra cosa, aunque algunos escriban ocultando las divisiones en que están las provincias (...) Ya llegó amigo mío el tiempo de desengañarnos”.⁴ Fue así que ante el derrumbe de la monarquía, sus acciones más inmediatas distaron de

reflejar a un fiel súbdito de la Corona. En su lugar, Pueyrredón planeó desde Cádiz un viaje a Londres, que las autoridades francesas impidieron. Su intención era celebrar tratados comerciales con mutuas ventajas. Así envió a dos emisarios que procurarían avanzar en las negociaciones, con resultados más o menos positivos: aunque Inglaterra no apoyaría ninguna secesión abiertamente, podía volverse un aliado diplomático a futuro.⁵ José Moldes —uno de los emisarios— recordaba años después que el objetivo era “solicitar la protección inglesa para la independencia de esta América”. Se trata de un dato fundamental para calibrar a Pueyrredón en su justa medida: dichas negociaciones eran realizadas por su exclusiva cuenta —es decir, a espaldas de un Cabildo presidido por peninsulares y con Álzaga como figura central— y con una finalidad claramente independentista. Es evidente que no se actúa así sin un programa claro y decididamente revolucionario. En un tono similar a sus otras correspondencias escribiría a los Húsares:

“Compatriotas, compañeros, después de las obscuras y complicadas noticias que tendréis de los acontecimientos de España y Europa, mi llegada os ilustrará a fondo de lo más sustancial y verdadero. Oiréis de mis labios el lenguaje de la verdad y el desengaño, y formaréis el saludable sistema, que os inspiren mis sensibles observaciones.”⁶

Efectivamente, Pueyrredón prometía una sociedad nueva para la burguesía criolla.

La persecución

Pueyrredón emprendió su retorno a mediados de noviembre de 1808. Sin embargo, al arribar a Montevideo, en enero de 1809, Francisco Javier Elío —gobernador de dicha plaza— decidiría su detención, la cual se extendería por el plazo de cuarenta días. Las acusaciones provenían del propio Álzaga y sus partidarios. Habían dado con las cartas remitidas a José Núñez y con la proclama a los Húsares. No estuvo exento de ciertos ribetes cinematográficos su periplo: Elío lo remitió a España para que allí sea juzgado, pero al pasar cerca de las costas brasileras, Pueyrredón perforó una parte de la nave, por lo cual todos debieron abandonarla en botes. Conducido encadenado hasta una posada, lograría escapar con ayuda de un marinero. Oculto un tiempo en Río de Janeiro, retornó a Buenos Aires en junio de 1809. Ya en la ciudad, retomaría la conducción de los Húsares.

Para ese entonces, la sociedad de Buenos Aires se hallaba cada vez más polarizada. La llegada

Son numerosas las fuentes que sindican a Juan Martín de Pueyrredón como uno de los más decididos revolucionarios del Río de la Plata entre 1806 y 1810. No es casual que sean comúnmente omitidas por los académicos: su objetivo es ocultar tanto la existencia de clases en la revolución como a sus representantes más conspicuos.

de Cisneros representaría un motivo de discusión táctica entre los revolucionarios: ¿debían esperar mayor apoyo popular o bien, avanzar sin dilaciones? Belgrano relataba así los sucesos:

“Llegó la hora y apareció en mi casa don JMP y me significó que iba a celebrarse una junta de comandantes en la casa de éste, a las once de la noche, a la que yo precisamente debía concurrir; que era preciso no contar sólo con la fuerza, sino con los pueblos y que allí se arbitrarían los medios.”

Pueyrredón estuvo entre quienes plantearon desconocer la autoridad de Cisneros. De hecho, se negó a jurar fidelidad al nuevo Virrey, lo cual le valió ser apresado en el cuartel de Patricios. El propio Cuerpo, con una fuerte movilización, lo ayudaría a escapar nuevamente. Belgrano lo envió entonces a proseguir las negociaciones —finalmente fallidas— con Carlota en Río de Janeiro.

Así, no es de extrañar que Pueyrredón fuese catalogado por los contrarrevolucionarios como sedicioso y propagador de ideas subversivas. La misma Junta de Sevilla observaría que su conducta estaba dirigida hacia la independencia, que su presencia era “peligrosísima” y que había que aislarlo. Ante la persecución, Pueyrredón debió refugiarse hasta junio de 1810 en Río de Janeiro.

Un imprescindible

Son numerosas las fuentes que sindican a Juan Martín de Pueyrredón como uno de los más decididos revolucionarios del Río de la Plata entre 1806 y 1810. No es casual que sean comúnmente omitidas por los académicos: su objetivo es ocultar tanto la existencia de clases en la revolución como a sus representantes más conspicuos. En cambio, hemos observado aquí entonces a un cuadro fundamental en el proceso revolucionario, que ocupó cargos políticos de relevancia y que llevó adelante con decisión el programa burgués. Queda probada además la existencia de un programa independentista, llevado adelante por la clase social que venía a instaurar nuevas relaciones sociales. En este marco, la actuación de este revolucionario, no puede dejar de destacarse.

Notas

¹Lafuente Machain, Ricardo: *Juan Martín de Pueyrredón visto a través de un copiadador de cartas*, Buenos Aires, 1940

²Gammalsson, Hjalmar: *Juan Martín de Pueyrredón*, Goncourt, Buenos Aires, 1968, p. 91

³Documentos del Archivo de Pueyrredón, Tomo I, Museo Mitre, Buenos Aires, 1942, p.46.

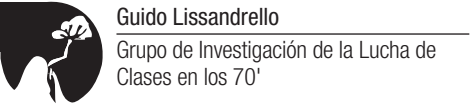
⁴*Mayo Documental*, Tomo III, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1961, p. 48

⁵Documentos del Archivo de Pueyrredón, Tomo II, Museo Mitre, Buenos Aires, 1942, pp.64-65

⁶*Mayo Documental*, Tomo III, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1961, pp. 151-152

El significado de los números

Reseña de *Mentirás tus muertos. Falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos*, de José D’angelo, El Tatú Ediciones, 2015



Declaraciones recientes del nuevo Ministro de Cultura de CABA, Darío Lopérfido, han instalado una vez más en la escena política la discusión en torno a la cifra de desaparecidos en la década del 70. Negando que se tratara de 30.000, Loperfido señaló que el número fue inventado para obtener subsidios. Unos días antes, el diario *La Nación* publicó una nota que llamaba a la “concordia” y a la urgente necesidad de dar protección a los militares que se convirtieron durante el kirchnerismo en presos políticos, violando el orden jurídico y poniendo en el banquillo de los acusados a los “defensores del Estado”. En esta línea interpretativa se ubica un libro editado a mediados del año pasado que, escrito por un ex carapintada que participó de la represión en el copamiento de La Tablada, intenta poner en cuestión el “mito de los 30.000”.

Sangre y billetes


El libro busca poner en duda la fiabilidad de los listados oficiales¹ sobre detenidos-desaparecidos y víctimas de la represión estatal en los 70. Su línea interpretativa no es novedosa en sí misma, reproduce lo que sistemáticamente defiende la derecha procesista: lo que aconteció en aquella etapa sería un proceso de guerra en la que movimientos insurgentes plantearon una amenaza a la existencia de la Argentina y por lo tanto “un Estado y la sociedad a la que éste representa tienen derecho a defenderse de una agresión tal” (p. 20). Lo que hubo, en todo caso, fueron formas de accionar ajenas a las reglas de la guerra, en tanto los métodos “de las FFAA y de Seguridad en aquellos años fueron en extremo desafortunados” (p. 21). Sobre esa base se habrían montado los gobiernos democráticos para introducir una lectura parcial de los hechos. De este modo el triunfo militar de la fuerza social contrarrevolucionaria en los ’70 no se habría traducido en el plano político e ideológico. Allí habrían triunfado los guerrilleros, convirtiéndose en administradores de la memoria y el relato de aquellos años. Además, el Estado los habría beneficiado económicamente mediante las leyes reparatorias: la ley 24.043 que beneficia a detenidos puestos a disposición del ejecutivo (PEN) o de tribunales militares, y los detenidos en centros clandestinos de detención desde el inicio del Estado de sitio (6/11/74) hasta el retorno de la democracia; la 24.321 que otorga constancia de denuncia formal a toda aquella persona que hubiera desaparecido involuntariamente de su domicilio; la 24.411 que beneficia a los causahabientes de desaparecidos y asesinados por el

terrorismo de Estado; la 25.914 que indemniza a los hijos nacidos en cautiverio; la 26.564 que amplía el beneficio de las leyes 24.043 y 24.411 a todas las víctimas desde el 16 de junio de 1955; y la 26.913 que otorga una pensión a aquellas personas que acrediten haber estado detenidas por causas políticas hasta el retorno a la democracia (lo que se superpone a las indemnizaciones anteriores). Curiosamente, las tres primeras, que son las leyes fundamentales, fueron obra del menemismo, mientras que las tres restantes fueron del kirchnerismo. El autor calcula, a partir de información suministrada por el Ministerio de Economía, que estas leyes habrían significado para el erario público una carga de u\$s 1.850.104.963. Según el CELS para 2004, serían 8.000 los beneficiarios por casos de desaparición forzada y asesinato. Lo más novedoso del libro es su intento por depurar el listado oficial confeccionado por la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) en 2006, que fue producto de la corrección, actualización y ampliación del elaborado por la Conadep en 1984. Para ello contrasta los casos con publicaciones de las organizaciones político-militares y con diarios de tirada masiva. De esta manera, cada capítulo del libro comienza con una narración novelada, aunque basada en hechos y datos reales, de un caso testigo que ejemplificaría una figura que se incluyó como desaparecido, pero que no merecería revestir como tal. Luego, se listan aproximadamente una decena de casos similares y se adjuntan las fuentes probatorias. Los casos son diversos: personas que figuraron en el listado de CONADEP, pero ya no lo hacen en el de la SDH (capítulo I), las cuales totalizan 2.549 casos; guerrilleros muertos en copamientos de instalaciones militares (capítulo II); ajusticiamientos de militantes por las propias organizaciones armadas por casos de traición y delación (capítulo III); suicidios para evitar la captura por las fuerzas represivas (capítulo IV); asesinatos y desapariciones fuera del territorio nacional (capítulo V); casos en los que los cuerpos aparecieron tiempo después en fosas comunes o que existieron partes militares que informaban el deceso (capítulo VI); ocultamientos de cuerpos por parte de las organizaciones armadas para que las fuerzas represivas no pudieran propagandizar la muerte de referentes (capítulo VII); la muerte accidental de guerrilleros por errores en la fabricación de explosivos o en la manipulación de armamento (capítulo VIII); y, por último, casos en los que no se tiene absolutamente ninguna información sobre la persona en cuestión (sólo un nombre, un apodo o un apellido) o que no podrían ser caracterizados como muertes producidas por el Estado, como el asesinato de Eduardo Aulet a manos de los integrantes del llamado “Clan Puccio”. Como puede apreciarse, la exclusión de algunos

casos es bastante dudosa. Difícilmente puede quitarse responsabilidad al Estado en el asesinato y/o desaparición en operativos coordinados con las fuerzas represivas de países vecinos, habida cuenta de la existencia del Plan Cóndor. Lo mismo puede decirse de la “iniciativa privada” de los grupos paramilitares creados desde el Estado, que en muchos casos también operaban por cuenta propia para su beneficio. Es bastante discutible que el entierro masivo en fosas comunes de NN, aunque haya existido un parte oficial, escape a la política de desaparición. Si bien el autor no termina de dar una cifra acabada, se desprende de su lógica argumental que a las 8.368 víctimas que figuran en el Informe de la SDH habría que restarle las 1.279 ejecuciones sumarias, que no serían “excesos” sino la legítima defensa del orden en un contexto de guerra, y otra centena de casos como los ya mencionados, que dejarían el número total por debajo de los 7.000.

De números y procesos

Mediante esta operación el autor busca presentar una cifra sensiblemente menor a la que se ha instalado históricamente y pretende mostrar que su “exageración” estuvo al servicio de un fin espurio. Es decir, que se inventó para conseguir subsidios. Sin embargo, la cifra de los 30.000 surgió como parte de la campaña de denuncia de los organismos de derechos humanos que buscaron ayuda en el exterior y que, en ese momento, no contaban más que con datos fragmentarios y un clima completamente adverso a la búsqueda. Allí se constituyó como la cifra simbólica que permitió articular la lucha contra la dictadura y luego, para ciertos sectores de los organismos de DDHH, contra los gobiernos democráticos. Hoy hay quienes se indignan y sostienen que “la cifra no puede cuestionarse”. Se trata de una posición irracional, pues la cuantificación de un proceso social permite mensurarlo correctamente. La existencia de una consigna histórica no debe obturar una comprensión profunda del fenómeno. Lo que condensa la cifra de bajas en el proceso revolucionario de 1969 a 1976 es la magnitud de la matanza que la clase dominante tuvo que llevar a cabo para defender el capitalismo y exterminar a la fuerza social que lo amenazaba. Dimensiona también los alcances de esa fuerza. Y en este punto, no cabe la distinción entre detenido-desaparecido o ejecutado, porque todos contribuyen a la tarea de producir bajas materiales en la fuerza social revolucionaria. Incluso se debiera contemplar las prisiones legales, que dejaron inactivos a militantes, y las bajas morales, aquellos que como producto del avance represivo y de la derrota fueron abandonando el campo de la revolución. Siguiendo el criterio de bajas materiales,




La existencia de una consigna histórica no debe obturar una comprensión profunda del fenómeno. Lo que condensa la cifra de bajas en el proceso revolucionario de 1969 a 1976 es la magnitud de la matanza que la clase dominante tuvo que llevar a cabo para defender el capitalismo y exterminar a la fuerza social que lo amenazaba.

los listados más representativos parecen ser los del Equipo de Antropología Forense (EAF) y los del grupo de investigación de Inés Izaguirre, que rondan los 10.000 y 12.000, respectivamente. Un cálculo más preciso sólo puede surgir del acceso público a todos los archivos de la dictadura, que desde Alfonsín para acá se han mantenido en la más absoluta oscuridad. Sin embargo, el problema central está en otro lado. Una de las pocas virtudes que tienen los libros de la visión apologética de la dictadura es que tiende a presentar el proceso de los 70 de manera descarnada. El alfonsinismo y el kirchnerismo han querido cifrar las culpas en el personal político de las Fuerzas Armadas, reconociendo en menor o mayor medida responsabilidad a las organizaciones armadas. De allí surgió la idea del “terrorismo de Estado”, un Estado que incumple sus funciones de garante del conjunto de la ciudadanía. La derecha procesista, en cambio, en su pragmatismo, reconoce la existencia de un estado de guerra, de un enfrentamiento social. Una lectura, en definitiva, más profunda, que reconoce lo que el resto de la burguesía quiere ocultar: se mató desde el Estado, en democracia y en dictadura, para defender un orden social particular, que se asegura la ganancia de unos pocos a costa del sufrimiento y la muerte de la mayoría. Ese ordenamiento es el que sigue vigente, porque con la democracia, a diferencia de lo que sostienen los gobiernos de Alfonsín para acá y desde la propia derecha procesista, no ganamos. La tarea de los revolucionarios de hoy no puede reducirse al reclamo de justicia por las consecuencias de la derrota. El mejor homenaje a nuestros caídos está en recuperar sus banderas, las banderas del socialismo, y llevarlas al triunfo. Como señalamos hace tiempo: Justicia no, Socialismo.


Notas

¹Se trata del listado elaborado por la Conadep en 1984, que registra 8.961 casos de desaparición forzada, y el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006 con 7.098 desapariciones y 1.279 ejecuciones sumarias.



25 años construyendo territorio de pensamiento crítico

www.topia.com.ar
4802-5434 – 4326-4611
revista@topia.com.ar
editorial@topia.com.ar



Dossier: El planeta insomne. Una subjetividad que no duerme
David Le Breton, Juan Carlos Volnovich y Eduardo Botero Toro


Editorial: Por una memoria crítica (A 40 años del golpe cívico- militar en la Argentina)
Enrique Carpintero

Hágase la luz. La electricidad y los cambios culturales
César Hazaki

El cine y el fin del dormir
Héctor J. Freire

24/7. El capitalismo tardío y el fin del sueño
Jonathan Crary

Hospital Tornú



Desigualdad, umbrales de violencia estatal y agenda de derechos humanos
Maristella Svampa

Muerte y manicomio 1959. El invierno de Alsogaray.
Carla Pierri

La última sesión y otros relatos
César Hazaki

Cinco historias que sostendrán al lector en vilo y pondrán en jaque su propia memoria. Historias que obligan a hacer retroceder el olvido y sus peligrosas lagunas. Una red de significaciones compleja y profunda se va entramando entre estos personajes que Hazaki nos presenta en este su cuarto libro. Historias incómodas, difíciles e impactantes que conmueven.

Libro digital
Descarga libre
Formatos: PDF | ePub | Mobi

Los pizarrones tienen oídos

La docencia en los primeros gobiernos peronistas (Parte I)



Marina Kabat

Grupo de Investigación de la Historia de la Clase Obrera Argentina

La educación en el peronismo clásico

El peronismo procura contener a la clase obrera dentro del marco institucional burgués. Esto requiere el desarrollo de una fuerte faceta represiva que no se manifiesta solo en la clausura de sindicatos y el encarcelamiento de dirigentes no cooptados, sino que opera también

en el plano ideológico. El peronismo encara, por todos los medios posibles, una batalla por la conciencias. De ninguna manera se trata de una guerra limpia. No hay una contrastación abierta y democrática de ideas. Muy por el contrario, hay un férreo control de los medios de comunicación, por el cual se veda el acceso a la radio a los opositores, y se censuran los diarios nacionales, provinciales y hasta locales. En esta campaña por la construcción de hegemonía, la educación escolar ocupa un rol central. Por eso, el cuerpo docente va a estar permanentemente vigilado.

Si los maestros debían transformarse en vehículos activos del adoctrinamiento peronista, antes el cuerpo docente debía ser depurado. El primer ensayo general se produce en el período 1943-1945, cuando de la mano de la enseñanza religiosa se busca barrer con todos los profesores y maestros contrarios a esta nueva visión del mundo que buscaba imponerse en las escuelas. Desde el punto de vista de las autoridades educativas, que contaban con el apoyo de Perón, no servía de nada dictar algunas horas de religión si se mantenía en el resto del currículo y del plantel docente una ideología contraria a la iglesia. Se debía borrar todo rasgo de laicismo y liberalismo. Los docentes ateos, socialistas y judíos serían blancos de cesantías. Sin embargo, las autoridades militares carecieron de la fuerza para mantener sus posiciones y muchas medidas fueron revertidas.

Bajo el manto democrático de las presidencias peronistas se imponen medidas más autoritarias que en los años de gobierno militar. La profundización y consolidación en el tiempo de las medidas represivas requería un mayor consenso del que podían gozar los autores del golpe de junio de 1943. Este consenso se obtiene, aunque no sin resistencia, después de 1946. Bajo el gobierno peronista se establecerá un riguroso sistema de control sobre el ingreso a la docencia, donde la afiliación partidaria pasa a ser un requisito ineludible. Por otro lado, mediante cesantías se depura el cuerpo docente. El principal gremio docente, primero ADA luego UDA, avala este sistema de ingreso y promueve la destitución de los docentes opositores. Cuando las cesantías se generalizan, encara una tibia defensa de los despedidos, en especial si se trata de maestros peronistas despedidos, al parecer por error. Pero, a diferencia de lo que ocurre en el 45, el gobierno no da marcha atrás. No revisa siquiera la cesantía de muchos

docentes peronistas, acusados de 'contreras' por cuestionar alguna política particular, o por haberse opuesto a dirigentes políticos o gremiales locales.

Para detectar a los docentes indeseables se crea el Servicio de Enlace y coordinación del Ministerio de Educación, que trabajaba en colaboración con la CIDE para identificar los docentes contrarios a la "doctrina nacional".

Ingreso a la docencia

Como en cualquier profesión, en la docencia los mecanismos de acceso al empleo, a las promociones y traslados resultan cuestiones clave dentro del ordenamiento legal de la actividad y hoy ocupan largas páginas del Estatuto Docente. Sin embargo, este marco regulatorio no existió bajo los primeros gobiernos peronistas. Si bien las labores docentes en la actividad privada fueron reglamentadas en 1947, los maestros públicos no gozaron de un estatuto hasta 1954. No respondió al proyecto presentado por el sindicato docente UDA, sino a un decreto. Su contenido defraudó a la docencia y generó mucho malestar en el gremio. A pesar de ello, UDA lo defendió. Según UDA, sus gestiones en favor del estatuto habían colocado a la entidad al borde de la ruptura con el gobierno, sumamente reacio a sancionarlo, por ello, más allá de su contenido había que celebrar la sanción del estatuto -no importaba cuáles fueran su contenidos y sus falencias- como un logro, como un antecedente perfectible.¹ Lo cierto era que el estatuto no establecía mecanismos claros y democráticos de acceso a la docencia o de promociones en su interior. Esto permitía que se produjeran nombramientos a dedo, por lo cual llegaron a proliferar los nombramientos de cargos docentes sin títulos.

La seccional chaqueña de UDA, por ejemplo, se quejaba por carta al secretario general de esta entidad, por los manejos existentes en la cobertura de cargos vacantes: "no existe el espíritu justiciero que debiera primar previo estudio de los antecedentes de los aspirantes. Por las suplencias que existen en la ciudad y sus alrededores, es una lucha sin tregua en la que triunfa, naturalmente, el mejor recomendado. Los colegas que llegan a esta Delegación solicitando nuestro apoyo se sienten defraudados ante nuestra inacción." Prosigue: "nos limitamos a avalar fichas (fichas de afiliación al gremio y/o a la CGT y al partido peronista)" para que otros,



El peronismo encara una batalla por las conciencias en la cual la escuela ocupa un rol central. Por eso, el cuerpo docente va a estar permanentemente bajo la lupa. Primero, se implementó un riguroso control político sobre el ingreso a la docencia. Cuando esto no fue suficiente, Perón instaló una oficina de la CIDE en el Ministerio de Educación.

"sin detenerse a estudiar los antecedentes de los aspirantes, los ubican haciendo primar su autoridad política dentro del ambiente. (...) Somos estatuas de piedra en todo lo que se realiza a nuestro alrededor".²

Este sistema de recomendaciones no solo constituye un mecanismo de clientelismo político violatorio de los derechos laborales docentes. Su principal función es el contralor político sobre quienes ingresan a la docencia. El sistema estaba tan institucionalizado que el Ministerio de Educación confecciona una ficha preestablecida para tal trámite. La ficha requería completar datos personales del aspirante, su título y cargo al que aspira (hemos encontrado fichas con pedido de horas de secundario, cargos de maestras o directoras en escuela y hasta de una cátedra en la Facultad de Derecho). Al anverso de la ficha se lee:

"RESPONSABILIDAD DEL RECOMENDANTE

Por la presente asumo la responsabilidad sobre las condiciones del señor....

Mi recomendado reúne las cualidades exigidas por el Excmo. Señor Presidente de la Nación, General Juan Perón, en su circular pública del 17 de junio de 1946, con referencia a candidatos a ocupar cargos en la Administración Nacional. Es decir:

- 1° Compenetración con el gobierno a fin de que su labor no sea obstaculizadora;
- 2° Honestidad de conducta;
- 3° Capacidad técnica y de trabajo.

Conozco en todas sus consecuencias lo establecido en los Arts. 5° y 7° de dicha circular, que dice lo siguiente:

'Art. 5° Las personas que garanticen a quienes hayan de cubrir las vacantes se responsabilizan de la actuación del empleado'

'Art. 7° No se nombrará para ningún cargo ni empleo a personas que estén vinculadas a intereses ajenos a la Administración del Estado' Firma del garante...."³

Las confirmaciones o traslados que tramitaba el gremio seguían, aunque de otra forma, este mismo criterio. Las planillas de pedido de confirmación de horas que tramitaba ADA (entidad antecedente a UDA) eran acompañadas siempre por el certificado de afiliación partido peronista, más una ficha completada por ADA con el concepto político, gremial y profesional del docente en cuestión. Por ejemplo, en una ficha avalada por ADA para la confirmación de horas se lee: concepto docente: "sobresaliente", político: "es peronista de ley", gremial: "muy buen elemento colabora con la agremiación."⁴ Más aún la simple afiliación no bastaba para obtener nombramiento, pues se llegó a exigir un año de antigüedad en el partido. La delegación chaqueña de UDA se queja de que muchas maestras recién recibidas no contaban con dicha antigüedad, ya que esperan a cumplir 18 años para afiliarse.⁵ Ante este reclamo, se exceptuó del requisito de antigüedad en el partido a las docentes que tomaran cargos en el interior de esta provincia, no así en la Capital.

El despacho de la CIDE en el Ministerio de Educación

El control sobre todas las esferas del sistema

LIBRERIA **HERNANDEZ**

TODOS LOS LIBROS

Av Corrientes 1436
TEL: 4372-7845 (Rot)
C1042 AAN Buenos Aires
Av Corrientes 1311
www.libreriahernandez.com.ar

¿Un liberalismo desarrollista?

El programa económico de la gran burguesía industrial en la Argentina



Gonzalo Sanz Cerbino
Grupo de Investigación sobre la Historia
de la Burguesía

Las disputas interburguesas, tanto en los 70 como en la actualidad, suelen ser leídas por un amplio abanico intelectual que va del peronismo a la izquierda trotskista, como la lucha entre una burguesía nacional, proteccionista y reformista, que se enfrenta a la “oligarquía” y los “monopolios” que abrazarían las ideas liberales. Entre estos últimos se suele incluir una larga lista de “enemigos de la nación”: la gran burguesía agropecuaria, los grandes industriales, las empresas trasnacionales y el capital financiero. Todos ellos compartirían un mismo diagnóstico respecto los problemas económicos de la Argentina y una misma solución: las “recetas” liberales. Si la plata no alcanza, ajuste; si hay déficit, achicar los gastos del Estado; si los costos son altos, eliminar los mecanismos proteccionistas y que el que no pueda competir se funda. El resultado de este tipo de políticas sería la “desindustrialización”, la “reprimarización de la economía”, la miseria y el desempleo. Aunque estas interpretaciones gozan de gran popularidad, muchos de los supuestos de los que parten no terminan de encajar. Uno de sus principales problemas es que la gran burguesía industrial y la burguesía agropecuaria no suelen ponerse de acuerdo a la hora de formular un programa económico común. Por eso, la protesta agropecuaria emerge incluso bajo gobiernos que el sentido común asocia a las políticas “liberales”, como los de Onganía, Videla o Menem. El núcleo del problema es que en la Argentina, hasta los industriales de mayor tamaño demandan políticas proteccionistas, que se financian con recursos del agro. Como veremos, el programa de los capitales nucleados en el Consejo Empresarios Argentino (CEA) en los 60 y 70 presenta diferencias de peso con las propuestas defendidas en ese entonces por la burguesía agropecuaria.

Liberalismo estatista

El CEA, cuya formación data de 1967, reunió a un selecto grupo de capitales de origen nacional y extranjero, los más importantes que acumulaban dentro del territorio argentino.¹ Según Ricardo Grüneisen, titular de Astra y presidente del Consejo en 1970, se trataría de “una organización constituida por hombres de empresa del más alto nivel que representan a medio centenar de firmas de gran envergadura”.² A diferencia de otras corporaciones, el CEA no se organizaba por ramas: lo integraban representantes de capitales industriales, agropecuarios, comerciales y financieros. Sin embargo, un análisis de su composición demuestra que en el predominaba una fracción: la burguesía industrial de mayor tamaño. En los 70 revistaban en el CEA las dos siderúrgicas privadas más grandes del país (Acindar y

Techint); la más importante productora de papel y celulosa (Celulosa Argentina); las químicas y petroquímicas de mayor tamaño (Ducilo, Duperial, PASA, Ipako –del Grupo Garovaglio y Zorraquín-, Electroclor del Grupo Celulosa, Monsanto y Compañía Química de Bunge y Born); algunas de las petroleras más importantes (Astra, Cities Services y la Compañía General de Combustibles del Grupo Soldati); importantes constructoras (Gesimes del Grupo Soldati, Techint Ingeniería, Constructora Lanusse y Polledo S.A.); algunas de las principales agroindustrias (Molinos Río de la Plata de Bunge y Born, la tabacalera Massalin, la yerbatera Las Marías, Noel S.A., Ingenio El Tabacal y FASA); las textiles que dominaban el mercado local (Alpargatas, Grafa de Bunge y Born y Ducilo); las principales automotrices (Fiat, Ford e IKA-Renault), la productora de cables Pirelli y la cementera Loma Negra. Incluso aquellos capitales que basaban su acumulación en la productividad del agro argentino, interviniendo en la producción, elaboración o comercialización de productos rurales, se habían volcado a la producción industrial: es el caso de Bunge y Born, Garovaglio y Zorraquín, la familia Lanusse y el Grupo Braun, dueño de los Astilleros Astarsa (entre otras compañías). Los bancos, que también tenían una presencia importante en el CEA, pertenecían a estos mismos grupos económicos que basaban su acumulación en la producción manufacturera.

Además de tener en común su carácter predominantemente industrial, estos capitales se destacaban por su importante escala, que les permitía dominar el mercado interno e incluso exportar eventualmente, con apoyo estatal, cuando su producción no llegaba a ser absorbida dentro de las fronteras nacionales. Esto no implica que pudieran prescindir de la protección de la que gozaba todo el capital industrial en la Argentina. Por el contrario, estas empresas se encontraban entre las más favorecidas por el esquema proteccionista. Varias de ellas se beneficiaron de los regímenes de protección a las industrias sustitutivas, que inició Frondizi y continuaron sus sucesores. Es el caso de la celulosa, el cemento, la petroquímica, la petrolera, la siderúrgica y las automotrices. De esta forma pudieron contar no solo con aranceles que las protegieran de la competencia externa, sino también con financiamiento preferencial (a tasas negativas) para inversiones y desgravaciones impositivas en los marcos de los regímenes de promoción industrial. Las textiles, además de protección tarifaria, supieron aprovechar las políticas provinciales o regionales de promoción industrial, instalando plantas en diferentes puntos del país. A esto hay que agregar la integración de varios de estos capitales al Estado, como proveedores o adquiriendo insumos a precios preferenciales. Un caso típico es el de las constructoras, todas orientadas a la realización de obras públicas. También la

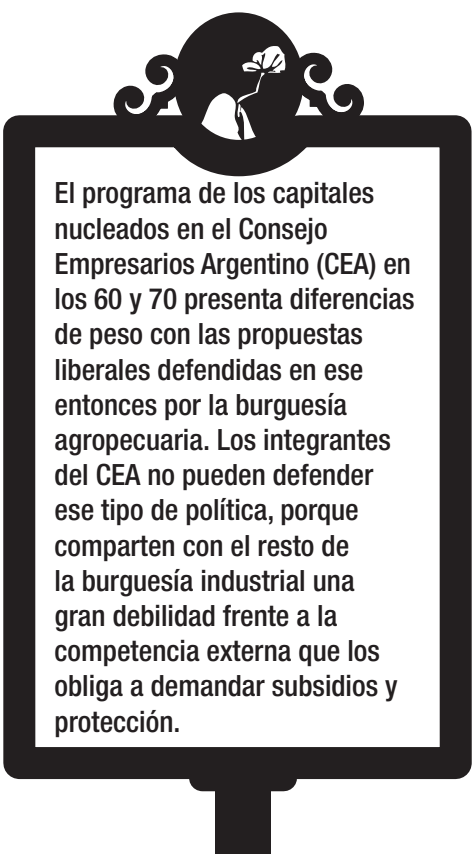
siderurgia y la petroquímica, que adquirirían sus insumos de SOMISA, YPF o Gas del Estado a precios que llegaron a estar por debajo de los costos de producción. Las petroleras, a su vez, eran proveedoras de YPF, que por el régimen de contratos debía comprar su producción. Lo mismo sucedía con Siderca, la productora de tubos para perforaciones petroleras de Techint, cuyo principal cliente era YPF. Esta dependencia de la protección estatal explica por qué estos capitales, a pesar de haber compartido frentes con la burguesía rural, no podían comulgar con su programa.

La base de los frentes entre la gran burguesía industrial y agropecuaria era la coincidencia en la necesidad de un ajuste. Frente a la crisis fiscal y de balanza de pagos, producto de los límites de la renta de la tierra para seguir sosteniendo a otras fracciones de la clase dominante más allá del agro, ambos sectores postulaban la necesidad de recortar gastos y transferencias. Acordaban, por ejemplo, en la necesidad de poner un límite a los reclamos salariales de la clase obrera y aumentar la productividad industrial. Sin embargo, las coincidencias no eran tantas a la hora de reducir los gastos estatales. En septiembre de 1976 por ejemplo, Edmundo Paul, presidente de Celulosa y miembro del CEA, señalaba que el principal desafío para las autoridades militares sería avanzar en la reducción del gasto público:

“Para mí, lo fundamental que subyace, y que el Estado tiene que corregir con urgencia, es que en la Argentina se usan demasiados recursos en sectores improductivos. En todos estos años, la economía ha visto un avance creciente de la participación del Estado en el producto bruto. Estoy seguro que se podría hacer prácticamente una curva donde se vería que el descenso de la economía argentina es paralelo al aumento de la participación del Estado. [...] Todo el mundo se aflige por el ausentismo o por la falta de productividad de determinadas industrias, pero pocos parecen afligirse por la enorme falta de productividad que significa un exceso de empleados públicos.”³

Sin embargo, no debe deducirse de este tipo de intervenciones la propuesta de un “Estado mínimo”, posición más cercana al programa de la burguesía agropecuaria.⁴ Ni siquiera Martínez de Hoz, a quien livianamente se suele identificar con el liberalismo más extremo, sostenía este tipo de posiciones. Siendo presidente del CEA, en junio de 1975, el futuro Ministro de Economía señaló:

“No se puede discutir que al Estado le corresponde el control de la economía para asegurar la competencia en el mercado y los intereses generales de la Nación, así como la orientación y el impulso de la economía mediante los mecanismos de estímulo y desaliento que tiene a su disposición, tales como el impositivo y el crediticio.”⁵



El programa de los capitales nucleados en el Consejo Empresarios Argentino (CEA) en los 60 y 70 presenta diferencias de peso con las propuestas liberales defendidas en ese entonces por la burguesía agropecuaria. Los integrantes del CEA no pueden defender ese tipo de política, porque comparten con el resto de la burguesía industrial una gran debilidad frente a la competencia externa que los obliga a demandar subsidios y protección.

No implicaba, claro está, comulgar con el tipo de intervención que se identificaba con el peronismo:

“Esto no significa aceptar que el Estado intervenga en tal forma en la economía que pretenda reglamentar minuciosamente la actividad de la empresa privada quitándole toda posibilidad de libertad de decisión en cuanto a lo que ha de producirse y las mejores formas de hacerlo.”

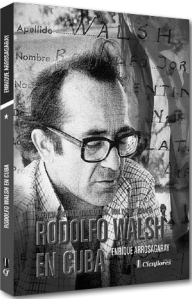
Sin embargo, la posición no deja de tomar distancia de la caricatura liberal tan en boga. Agostino Rocca, dueño de Techint y socio vitalicio del CEA, también se permitía defender un mercado libre en el que no sea “el Estado quien determine todo lo que se tiene que hacer”. Sin embargo, no dejaba de marcar un límite que lo distanciaba de las posiciones de la burguesía agropecuaria: “aclaramos: nada de laissez faire. El Estado no podrá estar ausente. Después de la crisis del ’30 el Estado orientador y regulador de la economía pasó a ser una realidad en el mundo. El Estado determina el marco en el cual los privados tienen libertad de actuar.”⁶

Liberalismo proteccionista

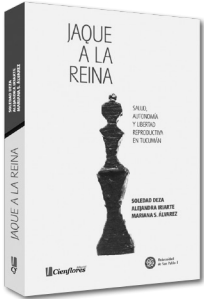
La posición ocupada por estos capitales en la estructura económica puede explicar este tipo de afirmaciones. Como representantes de intereses industriales que dependían de la protección estatal, no podían ser partidarios de un “Estado mínimo”. Pero al tratarse de las capas más concentradas de la burguesía industrial, podían proponer como solución a la crisis un ajuste que avanzara sobre una porción del gasto: aquella que se utilizaba para sostener a las capas más débiles de la industria y el nivel de vida de los asalariados. La misma lógica se replicaba en las posiciones respecto a la protección de la industria. Las políticas promocionales fueron defendidas por miembros del CEA o representantes de los capitales que lo integraban a lo largo

Algunos títulos de Editorial Cienflores

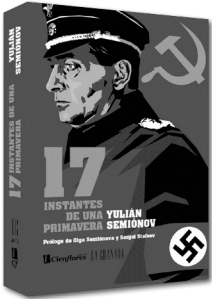
I Novedad



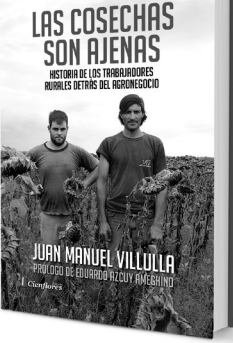
Rodolfo Walsh en Cuba
Enrique Arrosagaray



Jaque a la reina
Soledad Deza
Alejandra Iriarte
Mariana S. Alvarez



17 Instantes de una primavera
Yulián Semiónov



Las cosechas son ajenas
Juan M. Villulla



Editorial especializada en ciencias sociales, historia, estudios latinoamericanos y marxismo.

WWW.EDITORIALCIENFLORES.COM.AR

CEL: 15-6534-4020 / 15-2181-7356



EditorialCienflores



@Ed_Cienflores



editorialcienflores@gmail.com



de todo el período estudiado. Edmundo Paul, en 1976, por ejemplo, señaló objeciones a las propuestas de retirar la protección a la industria nacional, argumentando que todavía no se estaba en condiciones de competir a escala internacional. Aunque no se oponía al objetivo de que la industria nacional alcanzara una productividad que le permitiera competir a escala mundial, señaló que solo podía aspirarse a ello en el largo plazo, y mientras tanto, era necesario mantener la protección:

“Creo que la industria, como cualquier sector del país, debe estar preparado para evolucionar. Evolucionar, muchas veces quiere decir cambiar y, a veces, hasta desaparecer para transformarnos en algo totalmente distinto. Creo que todos los sectores pretenden que ese cambio sea formulado con tiempo. Cuando en Europa se quiso hacer el Mercado Común, que llevó a un enorme estado de competencia entre países, fue aceptado; lo único que se tomaron diez años para hacerlo [...] Si al industrial se le dice que las normas van a ser cambiadas en un determinado sentido, y se le da tiempo para razonar, con la inventiva que caracteriza a nuestra población se va a allanar esa nueva situación. Lo que no se puede pretender es que las reglas bajo las cuales el industrial se instaló, de buenas a primeras, ya no sirvan y haya que cambiarlas por otras. Eso no se puede hacer porque, evidentemente, el industrial no está preparado.”⁷

Uno de los capitales que más fervientemente defendió la protección estatal para el desarrollo de la industria fue Techint. El título de un artículo escrito en 1970 por dos directivos del grupo (Arnaldo Musich, director de Propulsora Siderúrgica y Humberto Rosa, presidente regional de Techint Ingeniería), resulta bastante gráfico: “La protección del acero”. El artículo comienza con una crítica a todos los gobiernos, de Frondizi en adelante, que más allá de lo declamado “poco hicieron” para que el país aumentara su producción de acero. En particular criticaban la política siderúrgica de Onganía, que mientras proclamaba la meta de duplicar la producción de este insumo, establecía políticas que atentaban contra ella. Los cuestionamientos poco tenían de “liberales”: se objetaba la reducción de aranceles y la “competencia desleal” de SOMISA, que vendía sus productos a “precios políticos” como medida contracíclica para reactivar la industria. O sea, se cuestionaba la reducción de la protección en la rama. Para que se alcanzaran las metas establecidas, sostenían, no cabía más alternativa que redoblar la protección:

“Aquí se trata un presupuesto básico de esa política, del que depende que el país alcance la meta que se ha trazado. Se trata de la necesaria protección que requiere la producción de

acero en masa en un país en desarrollo como la Argentina hasta tanto las plantas promovidas no alcancen la producción efectiva correspondiente a la capacidad instalada.”⁸

En concreto se exigía la “aceptación del precio real del acero en el mercado interno” y “una barrera que preserve ese precio real de las importaciones del producto durante todo el decenio”. Sobre el primer punto señalaban que:

“El precio real del acero en el mercado interno argentino debe ser por lo menos 30% superior al precio vigente en la Comunidad Económica Europea durante el número de años necesarios hasta que la producción efectiva de las dos grandes plantas propugnadas por el gobierno nacional alcancen la capacidad que deben tener instaladas las mismas a mediados del presente decenio.”

Y agregaban:

“La tarifa aduanera debe asegurar la permanencia de ese precio real interno a lo largo del período indicado, aumentando su nivel o siendo complementada mediante medidas equivalentes cuando los países productores elevan sus exportaciones de acero a raíz de la reducción de sus demandas internas.”⁹

Sin embargo, esta protección no debía generalizarse. No podía ser para todos. Como señaló el titular de Techint, Agostino Rocca, en 1969, la protección debía limitarse a las empresas “del tamaño adecuado”:

“Todos los países se trazan una política y establecen medidas de fomento que constituyen un aliciente para desarrollar la industria. El Plan Siderúrgico Argentino fijó las normas para que las empresas del país de tamaño adecuado logren la producción que satisfaga el consumo previsto”.¹⁰

Edmundo Paul, en una conferencia organizada por IDEA en diciembre de 1975, explicaba los alcances y las limitaciones que debía tener la protección industrial. Tomando como ejemplo la industria celulósica y papelerera, que representaba, señaló cuál sería el nivel de protección que consideraba “lógico”: “[para lograr sustituir papel de diarios, la rama demandó] como única medida, un 30 por ciento de protección aduanera, necesaria, fundamentalmente, para evitar dumpings y sobreproducción”. A su vez, se propuso destinar una tercera parte de lo recaudado a incentivar “la forestación, por considerarla imprescindible.” Sin embargo, estas mismas empresas debieron intervenir para evitar que esa protección se generalice: “[las grandes papeleras, que] bregaron muchos años para que se crearan las condiciones que posibilitaran las instalaciones de fábricas de papel de diario,

[tuvieron] luego que luchar inversamente para evitar que se adjudicaran más fábricas de las que la capacidad forestal permitía.” El mismo ejemplo daba en relación a la fabricación de celulosa de fibras largas: “vicisitudes semejantes tuvo la instalación de la fábrica de celulosa de fibra larga, en la que también hubo que evitar la instalación de más plantas de las que podía alimentar la madera disponible.” Cabe aclarar que, en este último caso, quien se benefició de la protección primero y de las restricciones después, fue Celulosa Argentina, la empresa que presidía Paul. Un asistente a la charla señaló la contradicción entre el “libre mercado” que Paul defendía y su posición respecto a los aranceles aduaneros. Ante la pregunta sobre si con “la implantación de una economía de mercado” no se deberían “reducir drásticamente las protecciones aduaneras con miras a igualar las oportunidades de los más eficientes”, Paul volvió a insistir en que ese tipo de reformas no podían hacerse de buenas a primeras.¹¹ El economista Carlos García Martínez, entonces asesor de la UIA y futuro funcionario en el gabinete de Martínez de Hoz, fue quien mejor expresó esta posición solo en apariencia contradictoria, que defendía la protección industrial sin renegar de la defensa de la libertad de mercado. Consultado en 1970 sobre la política de promoción industrial sostuvo:

“La promoción significa un alto costo para el país por la pérdida de ingresos fiscales y salida de divisas por la compra de bienes; por esas razones debe manejarse delicadamente sin perder en ningún momento su carácter selectivo.

Si todas las actividades se promocionaran, no se otorgarán en definitiva ventajas comparativas que induzcan la creación de nuevas actividades o la ampliación de las existentes. [La promoción] debe también manejarse con criterio restrictivo y no ser una panacea para la ineficiencia.”¹²

El CEA proponía entonces una posición intermedia entre la quita de todo tipo de protección a la industria que propugnaba la burguesía agropecuaria, y la protección indiscriminada por la que bregaba la burguesía más débil. ¿Sobre quiénes debía recaer esa “protección selectiva”? Sobre los capitales de mayor escala, los más eficientes y los que estuvieran más cerca de alcanzar ese objetivo que la gran burguesía relegaba a un futuro muy lejano: la competitividad internacional y, eventualmente, la exportación de manufacturas. Esos capitales eran precisamente los que se habían nucleado en el CEA.

Cualquier parecido con la actualidad...

Los grandes industriales nucleados en el CEA tuvieron una influencia decisiva sobre los gobiernos dictatoriales de Onganía y Videla. Las políticas que implementaron estuvieron muy lejos de la caricatura liberal y de los postulados de la burguesía agropecuaria, que clamaba por la eliminación de todo tipo de transferencias del agro a la industria. Los integrantes del CEA no pueden defender ese tipo de política, porque comparten con el resto de la burguesía industrial una gran debilidad frente a la competencia externa, que los obliga a demandar subsidios y protección. El problema es que no siempre hay plata para sostener a todos. Cuando la renta de la tierra comienza a mostrar límites para seguir sosteniendo los esquemas proteccionistas, la gran burguesía industrial recurre al endeudamiento externo y clama por el ajuste. Un ajuste limitado, que no remueva sus bases de sustentación. Mientras nos exigen a los obreros ajustar el cinturón, siguen llenándose los bolsillos y despilfarrando los recursos que generamos en reproducir una industria ineficiente e inviable.

Notas

¹Hemos analizado la constitución del CEA en *El Aromo* N° 84, <http://goo.gl/1QwLUM>.

²*Mercado*, 5/2/1970.

³*Mercado*, 2/9/1976.

⁴Ya hemos analizado el programa agropecuario en los '70, que se expresó en la Comisión de Enlace. Ver *El Aromo* N° 70, <http://goo.gl/Yo0PGJ>.

⁵*Mercado*, 5/5/1975.

⁶*Mercado*, 6/5/76.

⁷*Mercado*, 2/9/1976.

⁸*Mercado*, 6/8/1970.

⁹Idem.

¹⁰*Mercado*, 23/12/1969. Las cursivas corresponden al original.

¹¹*Mercado*, 4/12/1975.

¹²*Mercado*, 19/12/1970.



Eduardo Sartelli

Adiós a la Argentina, una crónica radial de la decadencia nacional

En *Código de Barras*, por Frecuencia Zero, FM 92.5 - www.frecuenciazero.com.ar.
Todos los lunes, a las 11 horas.



✉ [codigodebarras@frecuenciazero.com.ar](mailto:codigoдебarras@frecuenciazero.com.ar)

f www.facebook.com/frecuenciazerofm



A fines de los 80, Ud. estuvo activamente involucrado en el movimiento democrático de los estudiantes chinos. Participó en manifestaciones y protestas entre 1989 y 1990. ¿Qué balance puede hacer de esa experiencia?

El movimiento estudiantil de 1989 fue un evento histórico complicado. En retrospectiva, ocurrió durante la transición de China desde el socialismo maoísta hacia el capitalismo neoliberal. El maoísmo sentó las bases de la industrialización china y fue muy efectivo en satisfacer las necesidades básicas de la población. Sin embargo, no fue capaz de resolver varias contradicciones históricas que enfrentaba China durante los 60 y 70.

Durante los 80, la cúpula del Partido Comunista comenzó a perseguir una “reforma económica” orientada al mercado, comenzando por la privatización de la agricultura. Los trabajadores estatales seguían protegidos por varios derechos socialistas (seguridad laboral o “Tazón de arroz de hierro”). No obstante, políticamente, la clase obrera se encontraba desorientada e imposibilitada de organizarse como una fuerza efectiva. Desde el punto de vista de los gerentes de empresas estatales, estas se volvieron ineficientes y sus trabajadores muy indisciplinados, por lo que no eran adecuadas para competir en el mercado capitalista global. De acuerdo a economistas y gerentes, la ineficiencia del sector estatal contribuyó a la creciente inflación y los déficits de comercio chinos durante la segunda mitad de los 80, condición no muy distinta a la crisis del régimen de sustitución de importaciones latinoamericano.

La emergente clase media urbana (pequeña burguesía) aspiraba a tener un standard de vida comparable al de los profesionales occidentales (profesores universitarios, investigadores, médicos, abogados, artistas, etc.) y adoptaron el capitalismo globalizado. Políticamente, se encontraban representados por los intelectuales liberales y los estudiantes más politizados siguieron su ejemplo.

El movimiento de 1989 fue liderado por los intelectuales liberales. Desafortunadamente no hubo influencias marxistas o socialistas entre los estudiantes. El objetivo del movimiento consistía en presionar al Partido Comunista para que les permita (y a través de ellos, a la pequeña burguesía) tener participación en el poder político. No obstaculizaron la transición hacia el capitalismo y de hecho, demandaron un ritmo más acelerado de privatización y liberalización.

Muchos obreros participaron en el movimiento, motivados por la desilusión con el Partido Comunista y el resentimiento generado por la creciente desigualdad económica. Pero carecían de liderazgo político y no pudieron permitirse luchar por sus intereses de clase. Cuando el Partido Comunista se puso a la ofensiva y el ejército entró en juego, el movimiento fue brutalmente reprimido y muchos obreros perdieron sus vidas. Irónicamente, hacia los 90, muchos intelectuales liberales se unirían a la conducción del Partido Comunista, abogando por una privatización radicalizada que dejaría sin trabajo a decenas de millones de empleados estatales.

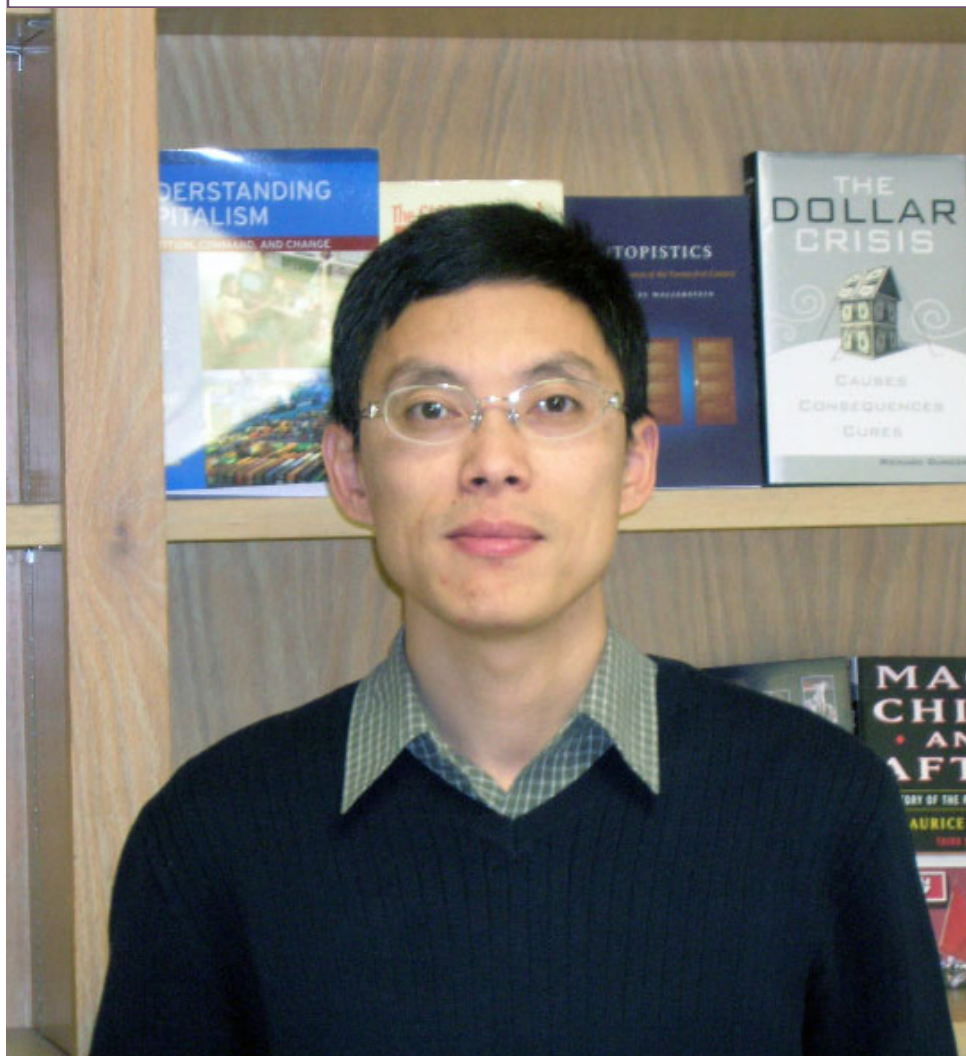
En 1990, fue enviado a prisión. Su pensamiento sufrió una transformación radical. Como estudiante usted estaba a favor de las reformas políticas y económicas orientadas hacia el capitalismo. ¿Cómo puede explicar este cambio? ¿Por qué decidió abandonar las teorías “científicas” burguesas?

Fui un estudiante de economía en la Universidad de Beijing desde 1987 hasta 1990. Muchos de mis profesores fueron reconocidos defensores de la “reforma económica” neoliberal y estudiamos economía neoclásica así también como las últimas teorías neoliberales como el monetarismo y el nuevo institucionalismo. Mis compañeros y yo estábamos convencidos de que China debía perseguir la privatización para poder alcanzar la prosperidad económica. Adoptamos una actitud elitista hacia la clase obrera y los considerábamos “perezosos”.

ENTREVISTA

“Es imperativo que la humanidad termine con el capitalismo antes de que el capitalismo termine con nosotros”

Entrevista a Minqi Li, economista y activista chino
Profesor de la Universidad de Utah



Durante las manifestaciones de estudiantes, cuando los obreros vinieron a apoyar el movimiento democrático, me encontré en una posición intelectual incómoda. Pensaba: “¿Acaso esta gente (los obreros) saben que si nosotros (los intelectuales liberales) estuviéramos en el poder, lo primero que haríamos sería privatizar todo y despedirlos?”. Luego, reflexionando sobre el movimiento, me di cuenta de que un error clave tenía que ver con la inhabilidad y la falta de interés de los liberales de movilizar a los obreros.

Todo esto estaba relacionado con la cuestión de “clases”. Así que pensé en el análisis clasista de Marx y lo útil que podía resultar después de todo. Estuve preso dos años, desde 1990 a 1992. Eso me dio la oportunidad de leer varios trabajos clásicos de Marx, Lenin y Mao, así también como obras de autores marxistas modernos. Comencé a reconocerme como “socialista revolucionario” cuando salí de prisión. Probablemente sea imposible dar una respuesta universalmente correcta con respecto al “conocimiento científico y su determinación”. Sin embargo, personalmente adopto la clásica postura Marxista-Leninista sobre este tema. Las ideas humanas son reflejos de un mundo externo que existe “objetivamente” (entendiendo “objetivamente” como ideas cuya existencia no

depende de ningún pensamiento humano o de fuerzas super-naturales como el acto de creación de Dios). Nuestras ideas pueden reflejar “correcta” o “incorrectamente” el mundo externo. A través de prácticas sociales (prácticas de producción material, la lucha de clases y experimentos científicos), es posible que las ideas humanas progresen gradualmente hasta el punto en que nuestro pensamiento subjetivo refleje más o menos “correctamente” la realidad objetiva. Tanto el desarrollo de las prácticas humanas como el de las ideas son procesos de evolución que interactúan constantemente entre sí. En lo que a la lucha de clases y la conciencia social concierne, es inevitable que las posturas sociales que uno adopte sean reflejo de sus condiciones de vida materiales. No obstante, siendo intelectuales (generalmente de un extracto social pequeño burgués), es posible considerar las contradicciones existentes desde un punto de vista que contemple la totalidad de la sociedad (y no solo del entorno más inmediato). Especialmente en tiempos de contradicciones de clase muy intensa, es posible que algunos de ellos se unan a la causa de las clases oprimidas y explotadas basándose en un conocimiento de las contradicciones estructurales existentes en nuestro sistema social.

En esta entrevista el economista chino explica cuáles son las condiciones para el estallido de la crisis en China, los límites que encuentra la burguesía para superarla y cuál es la situación de los obreros de ese país. En esta entrevista el economista chino explica cuáles son las condiciones para el estallido de la crisis en China, los límites que encuentra la burguesía para superarla y cuál es la situación de los obreros de ese país.

Con respecto a su último libro (*China and the 21st Century Crisis*, Pluto Press, 2015), usted menciona la creciente preocupación entre el establishment no solo acerca de la salud de la economía china sino también de las consecuencias que esta podría tener para la economía mundial en términos de recesión. ¿Qué factores económicos apoyan este posible desenlace?

El boom capitalista de China estuvo basado en la explotación intensiva de grandes masas de mano de obra barata, el agotamiento de recursos naturales y la degradación ambiental, así también como en el acceso a los mercados capitalistas occidentales. Estas tres condiciones fueron socavadas.

A medida que las economías estadounidenses y europeas se estancan y luchan contra las cada vez más profundas crisis, el crecimiento de las exportaciones chinas se desacelera severamente. Los sistemas ecológicos chinos se encuentran al borde del colapso. Se ha formado una gran masa obrera china que desde 2007 viene librando batallas cada vez más militantes y efectivas. La evidencia actual sugiere que el promedio de la tasa de ganancia ha decrecido agudamente en los últimos años. Si sigue esta tendencia, la economía china probablemente sufra una grave crisis en los próximos años.

También menciona que la economía capitalista va a sufrir su tercera “crisis estructural”, cuyo tamaño y alcance va a ser mayor que la crisis de 1968-1989. En este sentido ¿Piensa que el capitalismo ha desarrollado un nuevo patrón de acumulación desde los ‘90? No obstante, si consideramos que la recuperación de la tasa de ganancia no fue saludable (lo que se ve en las sucesivas burbujas que tomaron poco tiempo para estallar), ¿se encuentra cerrada la “crisis estructural” iniciada a fines de los ‘60?

En respuesta a la crisis estructural de 1914 a 1945, el sistema del mundo capitalista sufrió grandes reestructuraciones bajo la hegemonía norteamericana. Grandes sectores del gobierno y las políticas macroeconómicas keynesianas fueron implementadas para estabilizar las economías capitalistas. Se establecieron las instituciones del Estado de Bienestar para amoldarse a las necesidades de la clase obrera occidental. Los Estados Unidos pujaron por la descolonización para acomodarse a las demandas de los movimientos no-occidentales de liberación. Incluso se le otorgó a la Unión Soviética un nivel de participación en el sistema a través de la Conferencia de Yalta.

Las reestructuraciones tuvieron éxito en crear condiciones favorables para la acumulación del capital global y condujeron a un boom sin precedentes en la economía capitalista en los 50 y 60. No obstante, el éxito del capitalismo global también había creado nuevas condiciones sociales. Hacia los 60, la clase obrera tanto del núcleo como de la periferia del sistema capitalista mundial se volvió más fuerte y militante, dando paso a un declive general de la tasa de ganancia en el primero y crisis de acumulación en la segunda.

El neoliberalismo fue la contra-ofensiva organizada por las clases capitalistas mundiales para torcer el balance global de poder y revivir la tasa de ganancia. Debe ser reconocido que, por lo menos en los Estados Unidos, la clase capitalista logró recuperar la participación en los beneficios y la tasa de ganancia. El neoliberalismo ha durado por más de tres décadas. En esta medida, no puede ser considerado efímero. De todas maneras, el “éxito” neoliberal estuvo parcialmente basado en la transferencia de capital industrial a una nueva gran área geográfica con una mano de obra barata masiva. Esta reubicación ha creado un nuevo sector de condiciones históricas que condujeron a la formación de la clase obrera más numerosa del mundo: la clase obrera industrial de China. Este crecimiento puede perjudicar las bases no solo del capitalismo chino sino también del capitalismo global.

Considerando las relaciones comerciales de Estados Unidos y China, ¿cuál es el peso del capital ficticio en la economía mundial? ¿Y en el caso de China? ¿Cuáles son las proporciones de la burbuja inmobiliaria, el endeudamiento del gobierno local y el sistema bancario paralelo chino? ¿Estos fenómenos pueden ser las causas de las caídas en los mercados de valores ocurridas en los últimos meses?

Personalmente no creo que el “capital ficticio” sea la dimensión más importante de la crisis capitalista global actual. Las contradicciones del capitalismo global yacen en los conflictos de clase, las contradicciones ecológicas y el declive de la hegemonía estadounidense (imperialismo norteamericano). Gran parte de las inversiones chinas se encuentran probablemente financiadas por deuda. En cierta medida, la deuda del sector no-financiero en relación al PBI es actualmente similar a la deuda de Estados Unidos en relación a su PBI antes de la “Gran Recesión” de 2008-2009. La insostenibilidad de la deuda puede ser uno de los detonantes de la crisis China por venir.

Usted señaló que la tasa de ganancia en la economía china estuvo cayendo con un ritmo acelerado desde 2007 ¿Cuáles son las causas detrás de esta caída? ¿Cuáles son las razones y las consecuencias del estancamiento de la economía china?

En los 90 y a principios de los 2000, la tasa de ganancia promedio del total de la economía china fue el doble de alta que la de Estados Unidos. Desde 2007 aproximadamente, la tasa de ganancia en China declinó precipitadamente. Este declive fue causado por la caída de la participación en ganancias (ganancias como

una parte del PBI), reflejando la fuerza de las clases obrera y las luchas clasistas y en parte causada por la caída de la relación capital-producto. El problema de la relación capital-producto es resultado de las altas tasas de inversión que fallaron en elevar el índice de crecimiento económico en los años recientes.

Algunos señalan que la caída del crecimiento chino se relaciona con un giro en la política económica desde un “modelo orientado a las exportaciones” a “un modelo orientado al mercado doméstico”. Este hecho podría explicar la enorme expansión monetaria y del crédito doméstico, de salarios y de aumento de costos industriales. De todas maneras, esto parece ser parte de otra burbuja provocada por la reducción de la competitividad de las exportaciones chinas y la consecuente desaceleración de la actividad industrial ¿Cómo analiza este proceso?

Se ha hablado mucho de reorientar la economía china hacia la demanda doméstica. De hecho, en los últimos años, la inversión ha representado al menos la mitad del crecimiento económico chino. Pero las elevadas tasas de inversión condujeron a la caída de la relación capital-producto, de la tasa de ganancia y al aumento de las tasas de los índices de deuda en relación al PBI. Alternativamente, una mayor demanda doméstica puede ser conseguida a través de una mayor participación del consumo en el PBI. No obstante, un mayor consumo puede requerir mayores salarios, lo que afectaría la ganancia capitalista. El dilema económico chino refleja la contradicción estructural de una economía semi-periférica en el sistema mundial capitalista. Durante años China ha sido el centro global de exportaciones manufactureras basadas en la explotación de mano de obra barata. Pero ahora que los obreros chinos demandan salarios más altos y ampliación de derechos económicos y sociales, tanto la participación de ganancias como la tasa de ganancias se encuentran bajo presión. Por otro lado, China no puede competir con los países centrales en el campo tecnológico. Como resultado el capitalismo chino comienza a perder competitividad en el mercado global.

Las políticas keynesianas para promover la demanda no pueden alejar el fantasma de una nueva recesión. Especialistas que aplicaron esas políticas dicen que los Estados ya no pueden contar con esa herramienta. El Banco Popular de China intenta poner en práctica esas recomendaciones desde el 2014, provocando la burbuja actual ¿Qué piensa sobre el margen de maniobra con el que cuentan los bancos centrales mundiales para posponer la crisis aplicando políticas expansivas?

Se debe reconocer que a pesar de que en los Estados Unidos, Europa y Japón el aumento masivo de la emisión y el déficit gubernamental fracasaron como medidas para sacar a esas economías del estancamiento, sí lograron prevenir que ocurra otra Gran Depresión. El gobierno chino actual está ideológicamente comprometido con las políticas neoliberales, como la privatización o la liberalización financiera. En la práctica, cuando surge la amenaza de una desaceleración en el crecimiento, se intenta la aplicación de algunas políticas de estilo keynesiano. Pero prefieren implementar políticas que favorezcan a las clases capitalistas, como la flexibilización monetaria y la baja de cargas impositivas, que son menos efectivas. Una política expansiva más efectiva se enfocaría en el gasto en asistencia social y en la inversión directa en nuevas empresas estatales. Las contradicciones estructurales de la economía china tienen que ver con su incapacidad de continuar el proceso de acumulación basado en la explotación de mano de obra barata y la masiva degradación ambiental a medida que esta aumenta su costo y los trabajadores se vuelven más militantes. Las políticas keynesianas no pueden responder a este tipo de crisis de la misma manera en que no pudieron hacerlo durante las crisis de los 60 y 70.

En “términos capitalistas”, ¿qué posibilidades cree que hay de superar la crisis? ¿Cuáles son las posibilidades del capitalismo de encontrar un reservorio de mano de obra barata como lo fue China durante los 90 y 2000?

Si no hubiese límites ecológicos, sería muy posible que el sistema capitalista global se reestructure y entre en una nueva ola de expansión. Pero como los distintos sistemas ecológicos se acercan al colapso, es imperativo que la humanidad termine con el capitalismo antes de que el capitalismo termine con nosotros.

Las superpotencias incrementaron sus confrontaciones en varios escenarios ¿Qué piensa de estos conflictos? ¿Cuál es la política exterior China al respecto? ¿Qué nivel puede alcanzar en el corto plazo?

Los intereses de la clase capitalista china son fundamentalmente consistentes con el interés de la clase capitalista estadounidense. En relación a eso, no veo conflictos de peso entre ambos. La relación entre Estados Unidos y Rusia es una historia diferente. El capitalismo chino se basó en la exportación manufacturera que depende del mercado norteamericano, y de hecho, de la protección de la Marina Americana en las principales rutas de comercio. La actual cooperación entre China y Estados Unidos en la cuestión norcoreana sirve para graficar esto.

A medida que el poder hegemónico norteamericano decae, no va a ser reemplazado por ninguna otra potencia. Como resultado, vemos una creciente inestabilidad geopolítica y la ausencia de una significativa coordinación de la macroeconomía global. Esto va a profundizar la crisis existente.

El proceso de reforma e integración al mercado mundial que usted describe en China ha incrementado el nivel de organización de su clase obrera. ¿Cuál es su situación hoy?

Aún no es posible formar sindicatos en China de manera democrática y voluntaria entre obreros. Pero esto no ha impedido que se den luchas bajo varias estructuras informales. A medida que el excedente de mano de obra rural se agota, el balance de poder empieza a inclinarse en favor de los obreros. Esto contribuyó al aumento de la participación de los salarios en la renta nacional de los últimos años, un fenómeno que no se daba en economías de gran tamaño en muchas décadas. Dentro del sistema capitalista, hay un límite definido al aumento de salarios teniendo en cuenta que la acumulación capitalista está basada en la búsqueda de ganancias y que un declive de la tasa de ganancia prolongado no es sostenible. Por este motivo, los obreros chinos tendrán que enfrentar el mismo dilema que sus pares americanos o europeos (o también la clase obrera argentina) en los 70. Es decir, cuando el capitalismo no pueda satisfacer las cada vez mayores demandas obreras, ¿los trabajadores cederán y le permitirán a los capitalistas recrear las condiciones de la acumulación a través de “ajustes estructurales” o “terapias de shock” o la clase obrera podrá liderar la transición hacia una nueva sociedad?

En su opinión ¿Qué camino deben tomar los obreros chinos y del resto del mundo para enfrentar la crisis capitalista?

A diferencia de las crisis previas, le es muy difícil encontrar al capitalismo global una nueva área geográfica que pueda proveer de mano de obra barata, así también como otras condiciones necesarias para la acumulación capitalista. Por otra parte, la crisis ecológica global se ha acelerado hasta el punto en el que el futuro de la civilización humana está en riesgo. En las décadas venideras, podremos averiguar si la clase obrera y el resto del mundo pueden conducir a la humanidad a un nuevo sistema basado en la igualdad social y la sustentabilidad ecológica o si el capitalismo nos va a conducir por el sendero de la barbarie.



II años
leemos, colisión libros, publicamos, divulgamos

Pabellón Azul, número 322

colisionlibros@gmail.com
TEL: 0054 11 48078611
Junín 1616 - 6to. (CABA)
Cristina Will

www.lacolision.com.ar

 <p>ISBN 978-987-1804-17-7 AGOSTO Y OTROS PERROS Daniel Lopes</p>	 <p>ISBN 978-987-25151-2-6 CUENTOS ROJOS Roxana Torres Neira</p>	 <p>ISBN 978-987-1804-29-0 SERIES Y GRIETAS Horacio Beascochea</p>	 <p>ISBN 978-987-1804-15-3 LA ÚLTIMA TIERRA DE LA GENTE Soledad Arrieta</p>
 <p>ISBN 978-987-1804-28-3 AGNÈS & ADRIEN Augusto Munaro</p>	 <p>ISBN 978-987-1804-19-1 SALAMANCA Alejandro Ruiz</p>	 <p>ISBN 978-987-1804-14-6 EL PORVENIR ES UNA ILUSIÓN Horacio Bautista</p>	 <p>ISBN 978-987-1804-31-3 ÍNTIMA-MENTE Roxana Torres Neira</p>

¿Qué está pasando en Conicet?

Debate sobre la política de Ciencia y Técnica

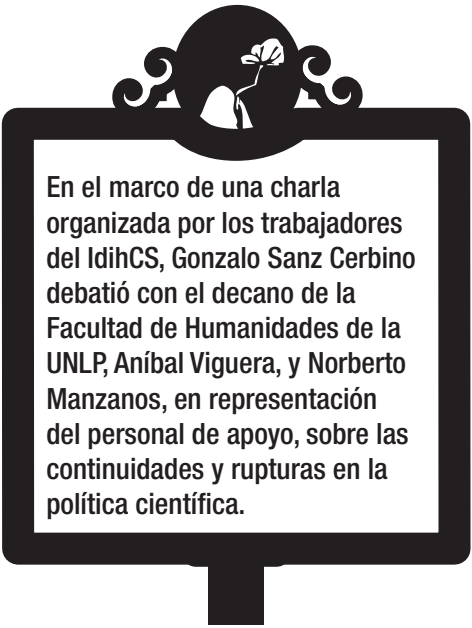
El pasado 6 de abril se llevó a cabo la 1ra. Jornada de Debate organizada por la Asamblea de Trabajadores del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS-UNLP-CONICET). Participaron del panel Aníbal Viguera –actual decano de la Facultad de Humanidades de la UNLP–, nuestro compañero Gonzalo Sanz Cerbino –miembro de la Comisión de ingresantes a carrera de Conicet– y Norberto Manzanos –personal de apoyo del IdIHCS. El eje del debate fue la situación actual de la ciencia y sus trabajadores. A continuación reproducimos los puntos salientes de las exposiciones.

Aníbal Viguera: Yo quería recuperar dos o tres dimensiones que creo que tenemos que tener en cuenta para pensar específicamente la cuestión de la ciencia y las ciencias sociales. Una es la dimensión del ajuste. Evidentemente, hay una política que involucra ajuste: ajuste en términos de política económica por un lado, pero también creo que hay una pretensión de recorte respecto al Estado más allá de lo que se requeriría en términos de ajuste. Una pretensión de recortar funciones del Estado que son consideradas innecesarias o nocivas. Hay una ofensiva contra todas aquellas funciones que no signifiquen empoderar y darle más rentabilidad a las clases dominantes, y otras que casi diría que se potencian en ese sentido. Entonces no es que el Estado se reduce sino que se reduce un conjunto de funciones, entre las cuales algunas, muchas de ellas, tienen que ver con el ámbito en el que estamos todos nosotros. Todas estas dimensiones de la política actual se enmarcan en discursos que lamentablemente tienen bastante pregnancia en buena parte de la sociedad, que pueden ser discursos atractivos que hay que tener en cuenta para discutir. Discursos que desprestigian a los trabajadores estatales con esta figura de los ñoquis, hay todo un discurso montado en la necesidad de racionalidad, de eficiencia. Todo esto mezclado con la apropiación de las ideas del cambio y el supuesto pluralismo -que cada vez es más claro que no es tal-, de transparencia, etc. Estos son elemento discursivos, junto con otros que voy a mencionar después más ligados a las ciencia sociales que forman parte de este contexto. Qué implicancias tendría esto que acabo de sintetizar para la ciencia. Creo que desde una perspectiva acá compartida, la ciencia depende y debe depender de decisiones públicas, de financiamiento público, de orientaciones públicas y en este sentido todo ámbito de recorte es una amenaza concreta con respecto a las actividades de ciencia y técnica en general. Ya es difícil imaginar articulaciones productivas o favorables a la ciencia con el Estado bajo este gobierno o con un gobierno como este y acá la amenaza contra la actividad científica parece que está dada, por un lado, por los posibles recortes en general, recortes presupuestarios que se empiezan a manifestar de alguna manera en términos indirectos, porque los presupuestos ya aprobados en

su momento han quedado desfasados por la inflación que en buena medida es producto, aunque no solamente, de las políticas que se adoptaron a partir de diciembre. La magnitud del eventual ajuste a ciencia y técnica todavía tiene alcances en principio inciertos, pero cabe pensar que es una amenaza en ciernes. Ahora bien, es un ajuste que vendría no solo por el lado del financiamiento sino también por el lado ideológico. Creo que en toda esta ofensiva vuelve a ponerse sobre la agenda un discurso que no es nuevo, que tuvo mucha vigencia en los 90 y que es esta oposición entre ciencia y política, el retorno a lo técnico, a la idea de que los problemas sociales se resuelven desde la técnica y que la política es un estorbo. Esto se lleva puesto en primer lugar a la militancia, pero también a la política en términos más generales. Ya hay muchas dependencias estatales que han sido liquidadas por distintos motivos, implícitos y explícitos, y que son lugares donde la ciencia y las ciencias sociales en particular tenían una inserción significativa y mucho para aportar en este sentido. Si se quiere plantear esto en términos de continuidad o ruptura, venimos de un contexto de expansión en todos estos aspectos. Expansión que no estuvo exenta de problemas, ni exenta de cuellos de botella, ni dificultades ni desafíos, pero ahí sí creo que hay una ruptura en este tipo de cuestiones que estuve planteando en términos generales. ¿Cómo va a impactar esta ofensiva sobre la ciencia y las ciencias sociales? Me parece que ahí los criterios supuestamente estratégicos, los criterios atravesados por la evaluación, por el rendimiento, por la productividad, por la idea de vinculación, por la idea de que la ciencia tienen que ser útil a la sociedad -algo que dicho así podríamos compartir todos, pero dicho en el contexto que acabo de señalar es peligrosísimo para nosotros-, viene por ahí una cuestión que, independientemente de la magnitud del ajuste, en cuanto política en ciencia y técnica y al discurso de cara a la sociedad, me parece que es un problema muy fuerte para nosotros porque “termas prioritarios”, “temas estratégicos”, “vinculación con la sociedad”, no son siempre cuestiones para rechazar per sé, depende del contexto. Yo adelanto, no quiero que quede ninguna duda, en un contexto como el del gobierno actual todas estas expresiones me parecen peligrosísimas y creo que por ahí va a venir la amenaza que ya se empieza a advertir en particular en las ciencias sociales. Para terminar creo que todo este recorte y esta ofensiva que puede impactar de distintos modos a las ciencias y particularmente a las ciencias sociales. Seguramente va a agravar las tensiones ya existentes en relación con el tercero de los puntos que se plantea para la charla de hoy, en la medida en que los últimos años han visto una enorme expansión de oportunidades de trabajo en el sistema científico tanto para becarios como para investigadores. Y el primer riesgo es que ese contexto de expansión se corte, retroceda y entonces los cuellos de botella

-que ya se venían dando porque evidentemente hay una tensión de la que venimos hace bastante- se profundicen. Qué pasa con los becarios que terminan sus becas, qué pasa con los que hoy no están entrando a carrera de investigador. Ahí hay un cuello de botella que creo se va a agravar.

Gonzalo Sanz Cerbino: Estamos presenciando la continuidad de un modelo, hasta ahora por lo menos, que tuvo como base tres ejes que están conectados entre sí: 1) Un crecimiento de la cantidad de científicos, que se dio sobre la base del empleo precario de los investigadores; 2) Una política que priorizó la titularización, que es un indicador muy bueno para las estadísticas, mientras ha pasado a un segundo plano la producción de conocimiento científico; y 3) La formación de RR.HH. destinados a subsidiar el capital privado. Respecto al primer punto, este crecimiento, sobre todo en el CONICET, se ha dado multiplicando la cantidad de becarios, que son investigadores a los cuales el CONICET no considera trabajadores. Lo cual tiene un montón de implicancias en la precarización de nuestro trabajo. No tenemos los derechos básicos de un trabajador, no tenemos aportes jubilatorios, licencias médicas, no tenemos sueldo sino estipendio, no podemos acceder a créditos hipotecarios y así muchas cosas. No tenemos indemnización ni pre-aviso cuando nos echan y esto es un tema importante porque me parece que el elemento más grave de esta situación de precariedad es la inestabilidad. Los becarios tenemos dos concursos que definen nuestra continuidad en el organismo, dos concursos en los cuales no son públicos los criterios de evaluación que determinan que uno se quede o no se quede, y hasta hace poco no había ni derecho a apelar. A su vez, se evalúa en estos concursos con criterios que son discutibles, por ejemplo, vale más la publicación en tal o cual revista científica que un libro que tiene diez veces más extensión. Es en estos concursos poco transparentes que uno tiene que participar para seguir trabajando. El resultado es que en estas instancias -y no ahora sino que desde hace cuatro o cinco años-, uno de cada dos investigadores se va quedando fuera del sistema cada año. Lo cual tiene, por un lado, resultados muy perniciosos para quienes se van quedando afuera, pero más allá de eso hay que empezar a pensar también en los resultados para toda la sociedad. El Estado destinó recursos para la formación de un investigador durante siete o más años, que terminan, en el caso de las ciencias sociales, desperdiciados. ¿Por qué? Porque nos formamos como investigadores y terminamos recalcando en el sistema educativo, como docentes, con una formación muy superior a la que se requiere para ser docente. Yo ya podía dar clases hace siete años, podía dar clases en universidades, en terciarios y en secundarios, el título de doctor no me da muchos más recursos para ser docente. Por lo cual es una formación que



En el marco de una charla organizada por los trabajadores del IdihCS, Gonzalo Sanz Cerbino debatió con el decano de la Facultad de Humanidades de la UNLP, Aníbal Viguera, y Norberto Manzanos, en representación del personal de apoyo, sobre las continuidades y rupturas en la política científica.

no sirve. Es más, durante ese tiempo en el que uno estuvo formándose como científico, dejó de formarse como docente. Quien siguió la carrera docente, hizo cursos de formación docente, adquirió experiencia, cuando se presenta en un concurso para docente, tiene más chances que alguien que estuvo los últimos siete años haciendo una tesis de doctorado. En las ciencias naturales, el destino de esos investigadores es ir a sector privado. Retomo un concepto que se había mencionado que es el tema de la utilidad. Cuando hablamos de utilidad social muchas veces quienes nos evalúan en los organismos de ciencia y técnica consideran que utilidad es utilidad para el capital. Las investigaciones útiles son las investigaciones que tal o cual empresa necesita. Entonces aparecen becas cofinanciadas con tal o cual empresa, incluso CONICET tiene bolsa de trabajo para esos científicos que vienen de las ciencias naturales y que terminan trabajando para una empresa como recursos humanos formados por el Estado, que en vez de producir ciencia para la sociedad, produce ciencia para una empresa. Ese modelo tiene dos problemas, la inestabilidad y la precariedad. En esas condiciones es muy difícil hacer ciencia. Porque buena parte de nuestro tiempo mientras somos becarios, lo tenemos que destinar a buscar otro trabajo en los momentos en que no sabemos si nos quedamos afuera o no, incluso a trabajar de otra cosa por las dudas de que nos quedemos afuera. Además, debería ponerse a discusión el tema de los “papers”. Se ha convertido el trabajo científico en la producción de pequeños fragmentos de investigaciones más grandes, repetitivos al infinito, que uno tiene que mandar a docientos lugares, porque después esos papelitos son los que cuenta el CONICET para ver si te quedás o no. Con el agravante, que desalienta el desarrollo científico, de que los mecanismos de evaluación y de promoción en el CONICET están en manos de pequeños grupos con criterios no conocidos, que no son públicos. Esto fomenta mecanismos de reproducción del statu quo. Las jornadas se convierten en un ámbito donde muy poca gente va a discutir, la mayoría va a buscar su papelito y si no discutís, mejor, porque por ahí la persona con la que discutís es la que después te evalúa. Obviamente, hay muchos que intentamos escapar a esto y que

NOVEDADES

Historia del fundamentalismo islámico desde sus orígenes hasta el ISIS

Colección Historia
Mercedes Saborido y Marcelo Borrelli

Comunicación gubernamental en acción

Narrativas presidenciales y mitos de gobierno
Mario Riorda y Omar Rincón (editores)

Periodismo con G

Entrevistas en perspectiva
Sonia Santoro

Por una dictadura desarrollista

Clarín frente a los años de Videla y Martínez de Hoz, 1976-1981
Colección Comunicación, Medios, Cultura
Marcelo Borrelli

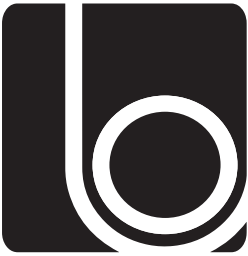
Hegel, la doctrina de la esencia

Colección Filosofía
Rubén Dri

Educación, pueblos indígenas y migrantes

Educación, pueblos indígenas y migrantes. Reflexiones desde México, Brasil, Bolivia, Argentina y España
Gabriela Novaro | Ana Padawer
Ana C. Hecht (coordinadoras)

42° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
La Rural
Pabellón Azul Stand 616



Editorial Biblos
www.editorialbiblos.com

parcialmente lo logramos, pero igual estamos metidos en este sistema y algunas de las reglas de este sistema tenemos que aceptarlas porque si no, nos quedamos afuera.

Estos mecanismos que fomentan la reproducción del statu quo se refuerzan en los nuevos proyectos que ya están en marcha para becas. Las Ideas-Proyecto, que es una de las nuevas modalidades de becas que se va a implementar este año, son proyectos de investigación elaborados y evaluados por los institutos, que van a tener prioridad en la asignación de becas. Este año, las becas CONICET van a tener tres modalidades, dos de ellas con prioridad. La primera prioridad son las líneas estratégicas decididas por el Ministerio en la cual los criterios siempre son aquellos relacionados con lo que es útil, no para la sociedad sino para el mercado. Como dijo Ceccatto en alguna reunión reciente, quienes se quieran presentar como becarios ya no tienen que hablar con un director, ya no tienen que llevarle el proyecto a un director, van a ir hablar a un director de un instituto a decir “yo me quiero presentar”. Lo cual refuerza a quienes hoy dominan la producción de ciencia y técnica en Argentina, las camarillas dominantes de los institutos, quienes van a decidir quién entra y quién no entra al sistema de becas. Si esta reforma pasa, lo más probable es que progresivamente se vaya achicando el espacio para quienes vayan por fuera de los institutos CONICET, para los institutos CONICET que tienen menos poder dentro de CONICET mismo, incluso para aquellas líneas de investigación que dentro de los institutos no tienen tanto poder como otros. Ni hablar de aquellos que van con directores que siquiera son parte del CONICET. Los becarios van a dejar de ser investigadores para convertirse en empleados de un director o un instituto.

¿Cuál es la política actual del CONICET frente a la herencia kirchnerista? Lo que ha dicho Ceccatto, el presidente del CONICET, en varias entrevistas es que hay que redimensionar la estructura del CONICET, que CONICET está sobredimensionado. ¿Qué entendemos por esto? Que hay gente que sobra en el CONICET, así como en otras instancias del Estado, hay gente que sobra en el CONICET. No está planteado, por lo menos en el corto plazo, echar gente. ¿Entonces qué es lo que van hacer para redimensionar esa estructura? Lo que ya se venía haciendo. Empezar a cerrar el camino a aquellos becarios que no pueden seguir en el sistema porque se quedaron fuera de la carrera de investigadores del CONICET.

¿Cómo enfrentar esto? Aquí entra el problema de la organización de los trabajadores de CyT, donde creo que hay dos problemas. El primero es que los sindicatos estatales en donde los investigadores están enrolados -no así los becarios-, se han ocupado mal y poco de los problemas específicos de los investigadores. Quienes se han preocupado un poco más fueron algunas organizaciones de becarios, aunque ahí también hay problemas. El principal problema es la dispersión de fuerzas, con el surgimiento de colectivos desarticulados entre sí, lo cual tiene



que ver con la estructura laxa que se dan. Hay en alguno de ellos, por ejemplo en JCP, una voluntad de tener un funcionamiento de tipo gremial, pero no se avanza en ese sentido, no se termina nunca de conformar como un sindicato. Lo que tenemos que hacer los investigadores, los becarios, para tomar en nuestras manos este tipo de problemas que fui señalando es avanzar en la conformación de un sindicato nacional de investigadores. Un sindicato que tome a los investigadores, a los becarios de todas las categorías que luchan contra la división en castas que existe, por lo menos en el CONICET, en donde los derechos de un investigador asistente son distintos de los de un investigador principal y ni hablar cuando uno lo compara con los derechos que tiene un becario. Un sindicato que pueda resolver los problemas comunes que tenemos los investigadores. Por ejemplo la inestabilidad, que no se termina cuando uno entra a carrera de investigador, o la necesidad de democratizar los mecanismos de evaluación y promoción. Los trabajadores debemos poder discutir los mecanismos con los que se evalúa nuestra producción científica. ¿Quién decide qué es útil? ¿Quién decide qué es válido? Y eso lo tenemos que decidir los propios investigadores a través de mecanismos democráticos de evaluación, que sean públicos y que se puedan discutir. En los últimos años en la Argentina hubo un crecimiento de los científicos en todos los ámbitos, no solo en el CONICET, institutos, universidades, ministerios, que también están atravesados por la inestabilidad y la precariedad. Entonces tenemos que juntar a todos

esos trabajadores y organizarlos y dar una pelea contra estos elementos: la precariedad, la inestabilidad y la escasa transparencia en los mecanismos de evaluación y promoción.

Norberto Manzanos: Para que se entienda desde donde hablo, yo soy trabajador del CONICET desde el año 2002, como programador. Con respecto a la cuestión de las continuidades y rupturas, puedo contar que yo cuando entré en el año 2002 a CONICET, entré como contratado. En esa época no había ingresos, me encontré con un panorama desolador: había un montón de pasantes, prácticamente cobraban un sueldo de miseria. En esa época no había cargos de CPA y mi sueldo en ese momento era de \$600 y pagaba de alquiler \$900. En este momento mi sueldo puede ser dos o tres veces esos alquileres, no es gran cosa, pero es una gran diferencia. Me parece que ahora esperamos una ruptura grande, una ruptura que ya está porque el poder adquisitivo de los trabajadores ya está siendo afectado y es muy probable que haya reducción de la planta. [...] En cuanto a la jubilación seguimos igual de mal que siempre y paritarias nunca hubo, me parece que va a seguir unos cuantos años así. A pesar de que en la etapa anterior, en el gobierno anterior, hubo paritarias en todos los entornos laborales, en el CONICET no. Yo creo que eso significa una continuidad del CONICET más allá de los gobiernos. Creo que hubo alguna presión, de parte del Estado para que haya paritarias y los que siempre se opusieron, en todos los gobiernos, son una

élite de investigadores que son los que deciden muchas cosas. Además no podemos olvidar que el directorio del CONICET está integrado también por la Sociedad Rural y por la UIA, es decir que no solamente tenemos que pensar en una élite de investigadores sino en una clase dirigente que es la que decide. Con respecto a los sindicatos, el CONICET se piensa como un sindicato de investigadores donde los CPA somos una cosa que molesta. Una estructura bien corporativa que habría que romper.

Recogí un extracto de una entrevista a Ceccatto, que dice: “el CONICET tal cual es hoy es inviable, en doce años el personal prácticamente se cuadruplicó, hoy somos 9 mil investigadores 10 mil becarios y 3 mil más como personal de apoyo y administrativo, es una de las estructuras más complejas y grandes del Estado, pero en la próxima década no vamos a seguir creciendo al mismo ritmo porque superaríamos la 100.000 personas”. Entonces, me parece que la ruptura no se ha producido pero se va a producir.

En relación al tema de la lucha de los trabajadores y volviendo un poco a la experiencia mía y de los compañeros de ATE-Saavedra 15, ese grupo surgió en el Instituto CAICYT, que es una excepción dentro de CONICET, porque un centro de servicios, no hay investigadores, ni siquiera el director tiene que ser un investigador. Éramos todos CPA, administrativos, contratados, precarios, cosas por el estilo. Entonces por eso ahí surgió una movida gremial grande y el problema con el que nos encontrábamos, como siempre, era que los investigadores no participaban. Ahora sí, muy lentamente, pero en ese momento era muy difícil, porque como dijo el compañero, uno de los grandes problemas de la lucha de los trabajadores del sistema científico es la conciencia de los investigadores, conciencia en tanto trabajadores, y CONICET hace todo lo posible para que no se desarrolle esa conciencia.

En cuanto a la cuestión del lugar de las ciencias sociales y los trabajadores en el sistema científico, la idea que tengo para proponer desde mi lugar y desde mis conocimientos es una crítica al modelo científico tecnológico académico. Un aspecto fundamental es la crítica al modelo de evaluación, el mercado de *papers* del que hablaba el compañero, según el cual quedan fuera las investigaciones de interés local, a su vez en las áreas donde hay disputas disciplinarias, hay una hegemónica y la otra queda afuera. Si uno publica en una publicación que no está en indexada, no es valorada. Muchas veces que una publicación no esté indexada tiene que ver con cuestiones formales y la capacidad financiera de cada revista y no con la calidad de la publicación. También lo que decía el compañero que es fundamental en las ciencias sociales: escribir un libro tiene relativamente poco valor para el sistema científico y en cambio, ustedes saben muy bien que escribir un libro en el ámbito de las ciencias sociales es más importante que escribir un *paper*.



Acompañamiento Terapéutico
niños y niñas



TGD-TEA-DISCAPACIDAD-TDAH

anaclarac86@gmail.com

cel: 15-68064295

CIRCUITO DE LIBRERÍAS DE ANTIGUOS Y USADOS

La Librería Aguilar

LIBROS USADOS

Compra-venta

Blanco Encalada 2376 (y Cabildo) - Belgrano

Tel.: 4782-1996

mail: info@libreriaaguilar.com.ar - www.libreriaaguilar.com.ar

JOSÉ
LIBRERÍA

Libros de Historia - Filosofía Derecho
- Literatura - Arte - Novelas Revistas

Literarias - Books-Livres

Compra - Venta (Vamos a domicilio)

Lunes a viernes de 10 a 20 hs

Sábados de 11 a 18 hs.

Suipacha 336 - Tel: 4322-9915

Librería de Las Luces

FONDO EDITORIAL DEL CEAL

Avenida de Mayo 979

Tel.: 4343-6216

C.P. 1084 - Buenos Aires

OBEL LIBROS

BEST SELLERS - NUEVOS - IMPORTADOS
COMPUTACION - TECNICOS
AGOTADOS - USADOS - COLECCION

CORRIENTES 1230 - TEL. 4382-3190
obellibros@yahoo.com.ar

Para publicitar en
este espacio

publicidad@razonyrevolucion.org

La Librería de Avila

Libros Nuevos y Antiguos

Historia Argentina y Americana
Arqueología, Indigenismo

Alsina 500 - Capital

Tel. / Fax: (54-11) 4343-3374 / 4331-8989

avilalibreria@gmail.com



http://facebook.com/libreriadeavila



http://libreriaavila.mercadoshops.com.ar



LIBROS



TERCERA FUNDACION

Sarmiento 3099 - Tel.: 4866-1657

vida-mala@hotmail.com

LIBROS NUEVOS Y USADOS

SOCIO-PSICO-POLÍTICA

HISTORIA-CINE-TEATRO-POESÍA

Buenos Aires BOOKS
"El Poder de la Cultura"

Dir: J.E. Uriburu 637
Tel: 4954-2840

www.buenosairesbooks.com

Compra-Venta-Alquiler
Libros Nuevos y Usados

Derecho - Económicas -
Sociales - Letras -
Filosofía - Medicina -
Psicología - Exactas -
Escolares - Idiomas -
Ingeniería - Literatura y
mucho más!
El mejor precio del
mercado!!!

Estados Unidos 700

San Telmo

Tel.: 4300-5561

Compra y Venta



eshops.mercadolibre.com.ar

/clubburton

CLUB



BURTON

LIBRERIA MEMORIAS DEL SUBSUELO
Libros Antiguos y Modernos
Florida 835 - Galería Buenos Aires (Subsuelo Local 28)
Tel.: (54-11) 4313-3481 - (1005) Capital Federal
memoriassub@hotmail.com

LIBRERIA El Gaucho Ricardo Benigno Baz

COMPRA - VENTA - CANJE DE LIBROS
www.libreriaselgaucho.com.ar

Abierto de lunes a sábados

de 10 a 21 hs y domingos de 13 a 21hs

Neuquen 765 Boyaca 1538

Tel.: 4432-5164 Tel.: 4582-2721

libreriaelgaucho@hotmail.com

Didón

Textos
nuevos
y usados

Universitarios - Inglés - Francés
Literatura en general

Compra Venta de Usados
Junin 82. Capital. Tel: 4951-8902
libreria_didon@yahoo.com

Rincón del Anticuario

libros antiguos y modernos

COMPRAMOS LIBROS ANTIGUOS Y BUENAS
EDICIONES DE LIBROS MODERNOS

Junín 1270

Tel: 4827-1666

rincondelanticuario@gmail.com

Nicolás Rossi

Para publicitar en este espacio comunicarse a
publicidad@razonyrevolucion.org

Compro

LIBRERÍA ANTICUARIA



EL FARO
DEL FIN DEL MUNDO

Libertad 1240
Unidad 20

1012 - Buenos Aires, Argentina
consultas@librosyantiguedades.com
www.librosyantiguedades.com

Tel. 4816-2920

Libros rusos publicados años 1910-1940
Encuadernaciones años 1880-1930
Carpetas de divulgación científica anterior a 1900
Exposiciones universales hasta 1911
Libros o carpetas referidas al campo hasta 1950
Atlas anteriores a 1890
Libros o recetarios de cocina hasta 1950
Expediciones polares publicados antes de 1940
Publicidades anteriores a 1950
Material gráfico sobre peronismo,
publicado por imprenta del estado de 1944 a
1955 (especialmente Plan Quinquenal)
Libros con grabados o litografías hasta 1950
Documentos comerciales anteriores a 1890
Libros de fotografías hasta 1950
Historietas hasta 1950
Libros de arte publicados de 1910 a 1940

Quemado

El síndrome de burn out y el trabajo capitalista



Ricardo Maldonado
Sicólogo - Razón y Revolución

En 1974 el psiquiatra Herbert Freudenberger llegó a la conclusión que su trabajo lo había quemado. Y lo mismo pasaba con muchos colegas que trabajaban con él: “Bajo la tensión producida por la vida en nuestro mundo, cuando los recursos internos llegan a consumirse, (...), no les queda más que un vacío inmenso en su interior, incluso aunque su aspecto externo parezca más o menos intacto.”¹ Nació así el Síndrome de Quemado por el Trabajo o *Burn out* (SBO). Dos años más tarde, la psicóloga Cristina Maslach elaboró el primer y más utilizado cuestionario (Maslach Burnout Inventory -MBI) para determinar quiénes son afectados por el síndrome. El nombre, los cuestionarios y las variables asociadas al SBO, difieren en un amplio abanico, pero por ser los más consensuadamente usados conviene denominarlo Síndrome de Quemado por el Trabajo (y utilizar la inglesa SBO) y referirse al MBI cómo el instrumento de medición de referencia. Los libros, trabajos de campo, investigaciones y tesis sobre el tema suman varios miles en una gran amplitud geográfica. Sin embargo, existe un punto común reconocido:

“En 2001, Maslach, Schaufeli y Leiter, establecieron las tres dimensiones clave que definían este síndrome: cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal. Estas tres dimensiones fueron caracterizadas por Morán Astorga como: –Cansancio emocional es la dimensión principal del síndrome y su manifestación primaria. Se trata de una sensación de agotamiento y cansancio que ocasiona acciones para separarse emocionalmente del trabajo. –Despersonalización es la respuesta impersonal y fría hacia los receptores de los servicios y cuidados. –Realización personal es la dimensión más compleja del síndrome, y se define como el sentimiento de incompetencia y falta de éxito profesional.”²

Aunque hay algunos trabajos de campo realizados con otras ocupaciones como transportistas o deportistas, es amplio el consenso en atribuir el SBO a los trabajadores de la salud, la educación y aquellos trabajos del cuidado de otros y que se realizan en estrecho contacto con ellos.

El síndrome

Un síndrome no es una enfermedad sino su manifestación observable, el conjunto de signos y síntomas que se asocian a una patología y que puede tener una o varias causas. Por eso, se “establece” el síndrome al delimitar una cantidad de expresiones perceptibles que nos permiten determinar su existencia. En salud mental los padecimientos pocas veces se encuentran asociados con disfunciones orgánicas observables (“marcadores biológicos”). Es el sujeto el que debe expresar de alguna manera su sufrimiento para demandar una solución. La disciplina que cruza las opiniones y acciones de los individuos con modelos y constructos mediante procedimientos estadísticos es la psicometría. Una concepción de medir que “enlaza conceptos abstractos (constructos) inobservables directamente, con indicadores empíricos observables directamente (conductas)”. El MBI es la herramienta psicométrica más utilizada para medir el SBO. Un trastorno como este pasa por diferentes momentos. La comunidad científica pone en funcionamiento su detección y manejo, la aceptación por los sistemas de salud, su cobertura para los tratamientos. Por último, el reconocimiento de la posible relación causal con las actividades laborales, permite que los

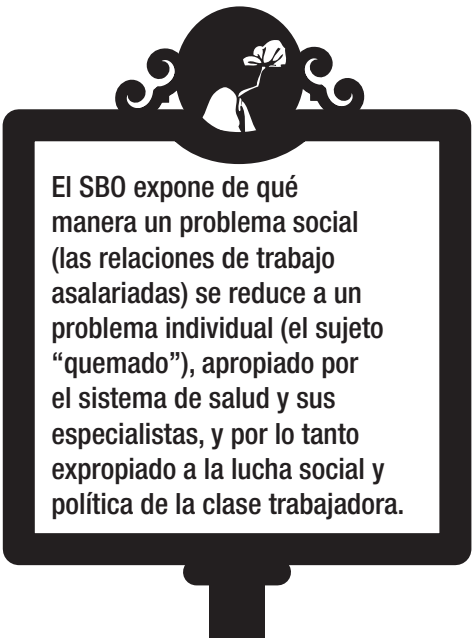


trabajadores exijan protección y resarcimiento. Estos avances son motivos de disputa en el plano de la lucha de clases. Como cuando el Estado cuestiona, a través de fallos laborales, las conclusiones que previamente han establecido los investigadores, atribuyendo el SBO a causas desconocidas. La salud de los trabajadores, variable central en la acumulación del capital, no es tema de definiciones abstractas sino de lucha política. Un aspecto interesante que se desprende de la información ya disponible en múltiples trabajos de campo es que, partiendo de las respuestas conscientes de los trabajadores, se suele estimar la proporción de “quemados” en un porcentaje que, generalmente, oscilan entre el 20 al 50%. Dado que las inferencias no son indirectas (los ítems son, por ejemplo: “Soy capaz de resolver adecuadamente los problemas que surgen en mi trabajo”, “Desde que comencé este trabajo, he ido perdiendo mi interés en él” o “Trabajar todo el día, es realmente estresante para mí”), no se puede estar quemado sin saberlo (como sí se puede ser chagásico mucho tiempo ignorándolo), por lo que muchos trabajadores siguen trabajando “quemados”, sin expresiones clínicas invalidantes, percibiéndolo y asumiendo que es una forma “normal” de relación laboral. El cuestionario establece, al procesar las respuestas y compararlas, la existencia del SBO y de sus tres componentes esenciales. A la vez, en el intento de asociar este síndrome a otros factores y determinar su incidencia se suelen cruzar esos datos con otros recabados simultáneamente. Se mide así la relación entre la “percepción consciente” de los encuestados con una gran variedad de datos demográficos y organizacionales (edad, sexo, cantidad de hijos, pluriempleo, especialidad, etc.) Algunas de estas variables han demostrado su relevancia y

otras no. Sin embargo, este gran avance en el reconocimiento, medición e intento de solución del “quemarse” por el trabajo deja ver importantes problemas.

Las deficiencias de la medición

Aunque el SBO se define como un padecimiento causado por las condiciones laborales, los datos con los que se cruzan los resultados del MBI son demográficos, con una significativa ausencia de cruces con información referida al trabajo concreto, al trabajo socialmente determinado. Por ejemplo no se hacen cruces sistemáticos (ni esporádicos) con la relación entre salario y canasta familiar, o entre empleados por la administración provincial municipal y nacional. Tampoco se estudia la relación de la tarea en cuestión con la determinación de clase: asalariados estatales, privados, cuentapropistas, profesionales liberales. Las variables asociadas se refieren a la población (información censal) y no la clase (información laboral). No se hacen estudios longitudinales, que abarquen más de un par de años, en los que se pudiera percibir y estimar el efecto de cambios sociales. Aunque los trabajos suelen referirse a “las fórmulas cada vez más flexibles de organización del trabajo”, “nuestra época de cambios permanentes”, “el neoliberalismo” ó “el fin del estado de bienestar”, estas variables, que se proponen como el marco en el que hace su aparición el SBO, no son medidas, operacionalizadas, ni comparadas. Como consecuencia, tanto el trabajo como la relación productiva son abstractos e indeterminados. Se da por sentado que el SBO aparece y crece, se da por sentado que afecta a los asalariados, se da igualmente por sentado que no distingue geografías. Sin embargo se lo estudia y trata como si no fuera un efecto del trabajo



El SBO expone de qué manera un problema social (las relaciones de trabajo asalariadas) se reduce a un problema individual (el sujeto “quemado”), apropiado por el sistema de salud y sus especialistas, y por lo tanto expropiado a la lucha social y política de la clase trabajadora.

asalariado bajo las condiciones capitalistas reales. Por el contrario, se lo circunscribe a la interacción grupal, a las organizaciones y a los modos de afrontamiento por parte de los individuos. Tampoco se cruza el trabajo “de cuidado” con otros para determinar por qué o en qué medida afecta a unos y no a otros, y desarrollar alguna hipótesis consistente sobre la propensión mayor a “quemarse” de unos u otros. O qué componente concreto determina el tipo de trabajo que deja al trabajador más expuesto al SBO.

El mal al que no se le quiere poner nombre

Aquí viene la paradoja del SBO. Por un lado permite demostrar científicamente la degradación vital a la que se ven sometidos los trabajadores que padecen la discordancia estructural de una demanda superior a sus fuerzas. Por otro, las soluciones (al igual que las investigaciones) no superan el plano del esfuerzo individual de cada trabajador (sea sometándose al tratamiento medicamentoso, tomando licencias o modificando el modo de trabajar y relacionarse). Esa es al fin y al cabo la función de lo que se define como “psicosocial”³: disolver lo social en lo grupal, lo grupal en las interacciones, y las interacciones en conductas individuales. Invertir lo social en lo psicosocial es diluir lo sistémico en el agregado de los sujetos, la suma de las psiquis. Se estudia a los sujetos “quemados” y no el trabajo “quemador”. La definición de salud adoptada por la OMS a mediados del siglo XX, fue un avance: “Un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Hoy esa definición es limitada y limitante. El SBO expone de qué manera un problema social (las relaciones de trabajo asalariadas) se reduce a un problema individual (el sujeto “quemado”), apropiado por el sistema de salud y sus especialistas, y por lo tanto expropiado a la lucha social y política de la clase trabajadora. Este es el núcleo del problema de la medicalización, es decir, el proceso por el cual problemas no médicos se tratan como enfermedad o trastorno. No es negativo que la medicina amplíe sus horizontes, lo negativo es que estreche las posibilidades de la lucha política. Medicalización es despolitización. El SBO no es un problema de cada trabajador, sino la consecuencia de la degradación de la vida y el trabajo en el capitalismo.

Notas

¹Freudenberger, H. J.: “Burn-Out”, *Journal of Social Issues*, nº 30, 1974, p. 159-165.
²Sanclemente Vinué, Isabel, Carmen Elboj Saso y Tatiana Íñiguez Berrozpe: “La prevención del síndrome de burnout en la enfermería española”, asequible en internet.
³Los factores psicosociales, de acuerdo a la OIT, se definen como “elementos externos que afectan la relación de una persona con su grupo y cuya presencia o ausencia puede producir daño en el equilibrio psicológico del individuo”. OIT: “Factores psicosociales en el trabajo: naturaleza, incidencia y prevención”, *Informe del Comité mixto OIT/OMS*, 1984.

Espejitos de colores

Una crítica al Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina



Dolores Martínez González y Giselle Vinokur
Grupo de Estudio del Femicidio
en Argentina - CEICS

La primera y multitudinaria concentración que tuvo lugar el 3 de junio de 2015 bajo la consigna *Ni Una Menos*, puso en evidencia la inexistencia de estadísticas oficiales que cuantificaran los casos de femicidio en el país. Es evidente que esta gran concentración y su agitación mediática, despertaron en el Gobierno la necesidad de dar algún tipo de respuesta.

Por un lado, el 4 de junio de 2015 la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco puso en funcionamiento el relevamiento que daría lugar al primer Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer (OM). Dicho registro fue publicado el pasado 25 de noviembre de 2015, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el informe, se hace mención del reclamo elevado por diversas organizaciones sociales y por la convocatoria *Ni Una Menos* de la urgencia de contar con un registro oficial, pero haciendo la salvedad de que la OM se encontraba trabajando con anterioridad en la elaboración de un sistema de recolección de datos, que debía ser validado por el MESECVI¹ (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará). Sin embargo, se aclara que dicha validación internacional aún no ha sido conseguida, razón por la cual, el registro elaborado constituye sólo una “aproximación cuantitativa”, con el fin de proporcionar bases para el diseño de políticas públicas. Se excusan así por la publicación de un documento acotado, escueto y precario, que no cuenta con la validación internacional correspondiente.

Por otra parte, el 5 de junio de 2015 se conformó la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios agravados por el género, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), cuyo objetivo sería crear un registro oficial de femicidios, que incluyera tanto los femicidios como los homicidios agravados por el género. A pesar de haber sido creada dos días después del *Ni Una Menos*, en la web² informan que la Unidad vendría efectuando una serie de “reuniones preliminares” desde 2014 con diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales, para establecer criterios metodológicos y algunas acciones de recopilación y sistematización de la información. La Unidad se encargaría de elaborar un registro tanto cuantitativo como cualitativo, cuya información se sistematizaría mediante una “Base de Datos”, a partir de la cual se elaboraría supuestamente un *informe semestral* que además de



sintetizar el trabajo realizado, aporte recomendaciones de políticas públicas.

Asimismo, según afirma Ana Oberlin³ (Directora de Asuntos Jurídicos de la SDH de la administración anterior), en diciembre del año pasado se iba a publicar el primer documento de la Unidad, que abarcaría de 2012 a 2015 e incluiría el entrecruzamiento de datos con distintas fuentes. “Curiosamente”, Oberlin rechazó la posibilidad de que la creación del registro respondiera a los efectos de la multitudinaria concentración, ya que la decisión se habría tomado y comenzado a ejecutar un año antes.

A la fecha, no existe publicación alguna de la Unidad, siendo las únicas cifras oficiales las del Registro de Femicidios elaborado por la OM, cuyas fuentes sólo son judiciales y su relevamiento acotado al año 2014. ¿Por qué se elaboró rápidamente un documento con un corte temporal menor y un solo tipo de fuente, en lugar de esperar los primeros resultados de la Unidad?

Un registro incompleto

El informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia argentina reconoce entre sus

antecedentes el trabajo de la Casa de Encuentro y afirma que la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte publica mensualmente en su página web los casos de violencia doméstica que se denuncian, incluyendo datos “sociodemográficos”. En la web, encontramos que dicha publicación consiste en una serie de cuadros que sistematizan las denuncias por casos de violencia familiar únicamente ocurridos en Capital Federal, no dicen demasiado y no son acompañados de ningún informe explicativo. Muy pobre para constituir un antecedente válido.

En el aspecto metodológico, el relevamiento de los datos fue encomendado a una persona responsable de cada jurisdicción. Cada una delegó la tarea mayoritariamente en la Oficina de la Mujer local u oficina similar, en la persona referente de la OM-CSJN, en el área de estadísticas, o en algunos casos en la secretaría administrativa o de jurisprudencia. Sin embargo, como en algunas jurisdicciones está vigente el sistema acusatorio, las causas se inician en fiscalías, por lo que muchos datos obran en poder del Ministerio Público Fiscal, representando así una barrera para el acceso a la información que no pudo ser sorteada en todos los casos. Este obstáculo queda como “una tarea pendiente” para procesos futuros.

Asimismo, la carga y recopilación de la información fue llevada a cabo a través de un sistema informático donde cada encargado de la jurisdicción ingresa directamente los datos. Teniendo en cuenta que los expedientes judiciales no son siempre caratulados como femicidios, depende de la voluntad y la capacitación de la persona designada por la jurisdicción, dilucidar cuáles se incluyen en la categoría.

Así señalan que la capacitación y la evacuación de las dudas fue realizada por medio de un video explicativo y de “grupos de discusión”. Realmente poco serio. Estas cuestiones pueden explicar, entre otras cosas, situaciones como las de Catamarca y La Rioja, donde según la estadística, no existen femicidios...

Por otra parte, lo primero que podemos observar en las conclusiones es el número de muertes: 225 en todo el país durante 2014, frente a los 277 que establece la Casa del Encuentro para ese año. ¿Cómo es posible que un registro elaborado por la colaboración de toda la justicia argentina, no sólo encuentre menos casos que la Casa del Encuentro, sino que además carezca de información en algunas jurisdicciones?

A la fecha, no existe publicación alguna de la Unidad, siendo las únicas cifras oficiales las del Registro de Femicidios elaborado por la OM, cuyas fuentes sólo son judiciales y su relevamiento acotado al año 2014. ¿Por qué se elaboró rápidamente un documento con un corte temporal menor y un solo tipo de fuente, en lugar de esperar los primeros resultados de la Unidad?

Por último, el Registro no discrimina los casos por clase social. De esta manera, no nos permite comprobar si el fenómeno afecta a todas las mujeres por igual, o si existen mayores víctimas de clase obrera. La Casa del Encuentro, la OM y otros organismos vinculados al tema, consideran *a priori* que la violencia contra la mujer es una problemática que afecta a todas las mujeres por igual, sin importar pertenencia de clase. Afirmar esto sin una estadística que lo avale no sólo es anticientífico, sino que constituye una forma ideológica de negar las relaciones sociales que rigen este tipo de sociedad, considerando que la única opresión que sufre la mujer es el patriarcado.

Ante las inquietudes y críticas formuladas, decidimos ponernos en contacto con la OM con el fin de realizar una entrevista a los profesionales que trabajaron en la conformación del informe. A fines de diciembre del 2015 logramos comunicarnos con la Lic. Nidia Marsero, a cargo de la Gestión administrativa y articulación, que si bien expresó interés por realizar la entrevista, nos explicó que la misma debería llevarse a cabo en febrero porque estábamos entrando en feria judicial. Los primeros días de febrero recibimos un correo donde nos explicaba que ya no se encontraba a cargo del sector y nos dejaba el contacto de la Dra. María Delia Castañares, que había formado parte del equipo de la OM y se encontraba a cargo del área. Automáticamente intentamos coordinar una entrevista con las dos. Durante un mes recibimos respuestas muy amables que posponían el encuentro por motivos de reacomodamiento del sector y que ya nos iban a “dar una fecha”. Todavía estamos esperando.

Espejitos de colores

El jueves 14 de abril la Agencia de Noticias del Poder Judicial publicó una nota donde informaba que en la Cumbre Judicial Iberoamericana⁴ se aprobó por unanimidad la creación del Registro Iberoamericano de Femicidios, propuesto por Highton de Nolasco, cuyo fin es ampliar la experiencia argentina para diseñar un mapa regional.⁵ Teniendo en cuenta lo analizado en esta nota, ¿qué se puede esperar de esta propuesta “regional”? Parece bastante claro que se trata de una maniobra propagandística y nada más. Mientras tanto, seguimos ignorando la verdadera magnitud del fenómeno.

Notas

¹Vease <http://goo.gl/9s4PhC>, pág 5.

²Vease <http://goo.gl/IGB6jj>.

³Vease <http://goo.gl/v1o2ti>.

⁴Es una organización que articula la cooperación y concertación entre los poderes judiciales de los 23 países de la Comunidad iberoamericana de naciones, aglutinando en un solo foro a las máximas instancias y órganos de gobierno de los sistemas judiciales iberoamericanos. Reúne en su seno a los presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y a los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura iberoamericanos.

⁵Vease <http://goo.gl/7wKda0>.

SUMATE AL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

Somos intelectuales que militamos para el desarrollo de la revolución socialista aquí y ahora. Nuestra tarea es desarrollar el conocimiento de la sociedad que queremos transformar. Nuestros grupos de investigación tienen el objetivo de develar los interrogantes que plantea la revolución en Argentina: la revolución burguesa, el desarrollo del capitalismo, el estudio de la economía actual, la lucha de clases y sus expresiones culturales, el Argentinazo y el movimiento piquetero, los crímenes sociales, la historia de la educación y la construcción de un arte revolucionario. El CEICS de Razón y Revolución retoma las mejores tradiciones del marxismo, poniendo la producción científica y artística al servicio del socialismo. Si creés que como intelectual tenés un lugar en la lucha, la revolución te llama.



Informes: ceics@razonyrevolucion.org.ar



OES

Oficina de Estadísticas Sociales

www.ceics.org/oes - oes@ceics.org.ar

Los ajustados de siempre

La quita de subsidios a los servicios públicos y el intento por desarmar el bonapartismo

Nicolás Villanova
OES-CEICS

Luego de la crisis de 2001, las tarifas de los servicios públicos se congelaron. El Estado inició una política de subsidios a las empresas y los residentes a los efectos de reactivar la economía y evitar la explosión social. Por su parte, durante la última campaña presidencial, tanto Macri como Scioli mencionaron la urgencia de actualizar las tarifas de los servicios públicos. A dos meses de asumir el macrismo, en febrero de este año, aumentó la luz, con subas que pueden implicar hasta el 500%, y en abril anunció el incremento de los precios del gas natural (300%), agua (500%) y transportes (100%). Sin embargo, estos aumentos de las tarifas no son novedosos ni arrancan con el gobierno de Cambiemos. Hace varios años que diversos servicios vienen incrementando sus precios, sobre todo en el interior del país, razón que explica la disparidad en el pago de servicios de los provincianos.

La supresión gradual de los subsidios a los servicios públicos ahora tendrá un mayor impacto en la ciudad porteña y el Gran Buenos Aires, es decir, las zonas donde se prolongó el congelamiento de tarifas o cuyos aumentos no fueron sustantivos respecto de otras provincias. Se trata de descargar la crisis sobre la masa de los trabajadores del país, que hasta ahora habían logrado mantener niveles de consumo conquistados gracias a la lucha del 2001.

Aquí no hay nada nuevo

Entre los años 2004 y 2006 algunas provincias implementaron aumentos en el servicio de transporte de pasajeros. En general, los argumentos para efectuar dichos ajustes se basaron en la ausencia de la

Impacto del gasto en servicios públicos según hogares obreros de la provincia de Buenos Aires.	Aumento según año	Hogares compuestos por		
		Jefe obrero registrado privado	Jefe obrero registrado estatal	Jefe obrero no registrado
COLECTIVO (sólo cantidad de boletos en base a tarifa mínima. No incluye abonos, SUBE y otros servicios de transporte)	2015 (\$)	152,03	152,03	136,51
	2016 (\$)	304,06	304,06	273,02
	Aumento (%)	100	100	100
GAS NATURAL (incluye impuestos)	2015 (\$)	21,89	14,34	11,35
	2016 (\$)	217,85	140,41	92,76
	Aumento (%)	895	879	718
AGUA y SANEAMIENTO	2015 (\$)	35,00	35,00	35,00
	2016 (\$)	110,66	110,66	110,66
	Aumento (%)	216	216	216
ELECTRICIDAD	2015 (\$)	16,79	17,98	14,73
	2016 (\$)	70,60	79,09	32,11
	Aumento (%)	321	340	118
Ingreso total familiar de hogares según jefe de hogar	Promedio 2015	15.462,11	16.520,89	9.991,58
Gasto en servicios con subsidios / ingreso familiar	2015 (%)	1,5	1,3	2,0
Gasto en servicios sin subsidios / ingreso familiar	2016 (%)	4,5	3,8	5,1

*Para hogares con jefes asalariados no registrado se estimó en base a la Tarifa Social.
Fuente: CEICS en base a EDENOR, METROGAS, AySA, ENGH0 (2012) y EPH (2015).

recaudación frente al aumento de la demanda y las limitaciones de los subsidios para hacerse cargo de los incrementos en los salarios de los choferes. Por ejemplo, la ciudad de Córdoba aumentó por primera vez en mayo de 2004 y llevó su boleto de colectivo de 80 a 95 centavos (un 19%). Allí se mantuvo una suba escalonada en los años posteriores: a mediados de 2005 hubo un aumento del 26%; en 2008, un 25%; en 2009, 33% y en 2010 un 25%. Corrientes, por su parte, llevó el boleto en julio de 2006 de 0,70 a 1 peso, es decir, un aumento del 43%. En la ciudad porteña y el Gran Buenos Aires, el primer aumento en las tarifas del transporte llegó durante el año 2008. Los trenes, subtes y colectivos se incrementaron entre

un 13 y un 29%. Unos años después, en enero de 2012, la Nación produjo el traspaso del subterráneo a la ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente, Macri anunció un aumento del pasaje a 2,50 pesos (127%). En agosto del mismo año, el gobierno nacional anunció una suba del boleto de trenes y colectivos para aquellos usuarios que no tuvieran tarjeta SUBE, del orden del 87 y 82% respectivamente. En mayo de ese mismo año, Scioli anunció un incremento que oscilaba entre el 18,7 y el 75% para toda la provincia de Buenos Aires. En el año 2013, la suba del boleto del colectivo se efectuó en 13 de las 24 jurisdicciones. En 12 distritos (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz, Tierra

del Fuego, Santa Fe, Chaco, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Jujuy y Misiones) el precio superaba los 3 pesos. Durante el año 2014, a partir del cambio de formaciones ferroviarias luego del crimen de Once, el boleto mínimo del tren de la ex línea Sarmiento aumentó de 1,10 a 2 pesos, o sea, un 82% con SUBE. Sin la tarjeta el viaje pasó a costar 6 pesos. Por su parte, las tarifas de electricidad y gas también se incrementaron hace tiempo en las provincias del interior del país. En el año 2006, la luz aumentó tanto para consumidores residenciales como para los comercios e industrias. Por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego (cuyos residentes son los que más energía consumen a nivel

Macri ya quitó algunos subsidios a los servicios públicos y anunció la disminución de otros. Estas medidas se lanzan para bajar el déficit fiscal, pero provocan inflación y caída del consumo. Sin embargo, no son nuevas. Se trata de un ajuste gradual que continúa los lineamientos ya iniciados por el kirchnerismo.

nacional por su situación climática), su gobernador Cocco aprobó en ese entonces un ajuste promedio del 25%. En Córdoba, el aumento promedio fue del 20%, mientras que en Mendoza y Río Negro los usuarios residenciales registraron incrementos del 12,9 y 12%, respectivamente. Por su parte, en Salta la tarifa eléctrica aumentó un 21% a lo que se sumó un incremento del agua del 19,5%. Otras provincias como Buenos Aires (excluyendo la zona del Gran Buenos Aires), San Juan, Chaco, Formosa, Catamarca y Santa Fe también impulsaron un ajuste de las tarifas. Estos aumentos se mantuvieron de manera escalonada en varias jurisdicciones durante años sucesivos. Por ejemplo, en diciembre de 2011 la provincia de Santa Fe incrementó la tarifa en un 13,4%; y en 2014, hubo otra recomposición del precio en la mayoría de las empresas eléctricas del país. Dentro del conjunto de los servicios, las tarifas del gas natural fueron las que más tardamente se incrementaron. En efecto, durante el 2006 sólo aumentó sus precios la empresa GASBAN (proveedora de gas en la zona de la provincia de

LOCALES

JOSÉ BONIFACIO
1398 (ESQ. PUÁN)

EL ARCA II
EN HIDALGO 748

TODOS LOS MATERIALES DE HISTORIA ESTÁN DISPONIBLES EN LOS DOS LOCALES

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES

EL ARCA

EL.ARCA.PUAN@GMAIL.COM

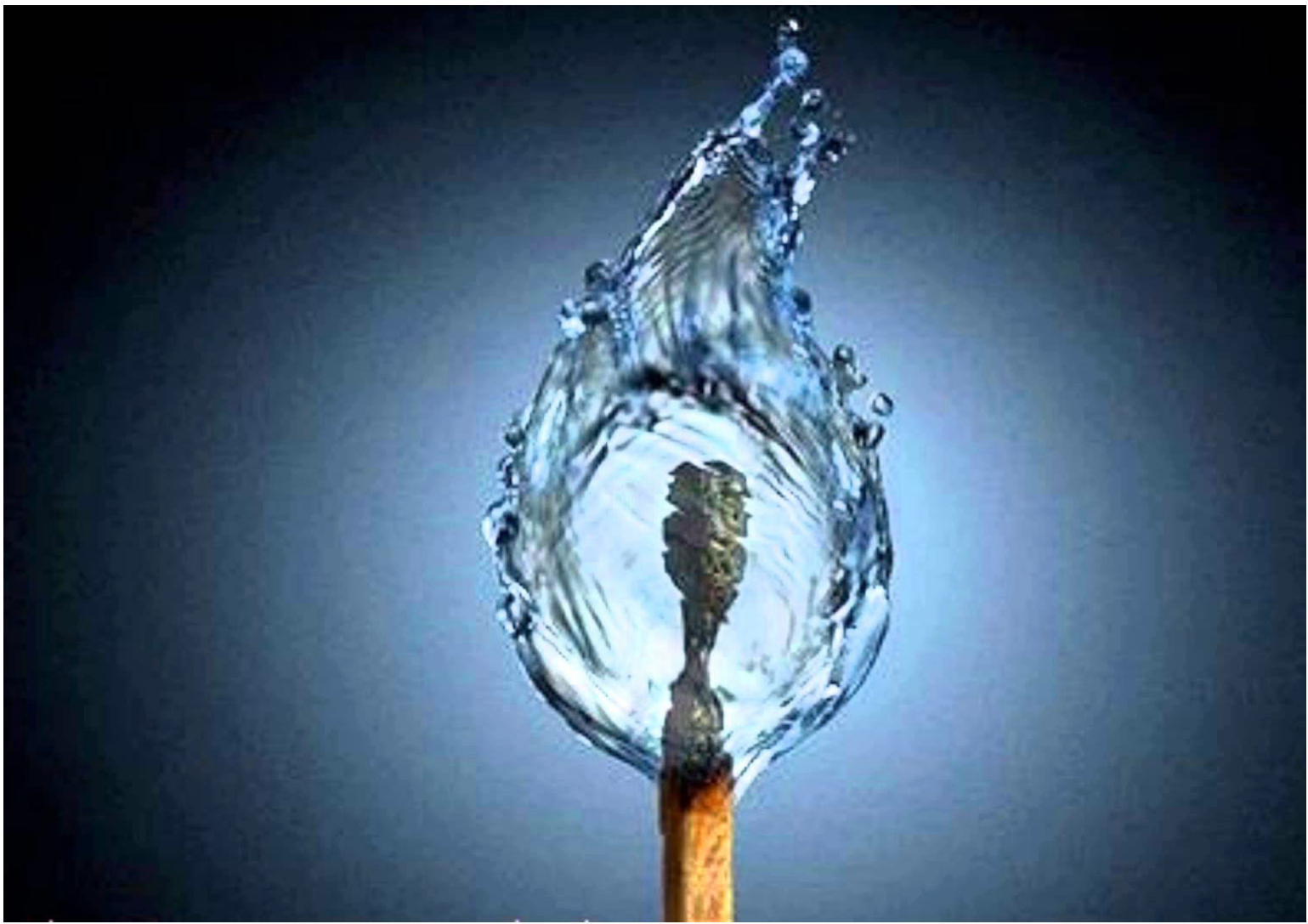
VENTA DE:

- EDICIONES RYR
- EDITORIAL
- EL GRAN CANAÁN

SALDO LIBROS

-ANILLAMOS EN IMPRESIONES DE FORMATO LIBRO

LUNES A VIERNES 9 A 23 HS
SABADOS 10 A 18 HS



Buenos Aires que no corresponde al área metropolitana). Durante el 2008, Cristina Kirchner anunció una quita de subsidios al servicio y un aumento de las tarifas de gas que implicaba un incremento entre el 200 y el 500% para usuarios residenciales de elevado consumo, medida que fue frenada por los reclamos de asociaciones de consumidores y la justicia. Finalmente, en el año 2014 el gobierno nacional anunció una quita escalonada de los subsidios al gas en los meses de abril, junio y agosto y un aumento generalizado en las tarifas para usuarios residenciales que no ahorrasen al menos un 5% de su consumo, incremento que implicaba hasta un 600%.

En la mayoría de los casos, la población más vulnerable supo tener algún beneficio en el pago de una tarifa menor en el transporte y otros servicios, sobre todo los jubilados, pensionados, empleadas domésticas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, beneficiarios de programas y planes de empleo. O bien, un mayor beneficio en caso de no consumir más respecto del mes del año anterior, sobre todo en el servicio de gas natural. En este punto tampoco se diferencian

los gobiernos de Cambiemos y el kirchnerismo.

No fue en vano

La quita de subsidios y el aumento de las tarifas en el conjunto de las provincias produjeron una fuerte disparidad en el pago de los servicios. Por ejemplo, cada habitante del AMBA recibía en el año 2013 un monto anual de 989 pesos en subsidios, mientras que los residentes del resto de la provincia de Buenos Aires percibían 514 pesos; en Jujuy, 410; Tucumán, 366; Mendoza, 360; Córdoba, 310; San Juan, 308; y, los habitantes del resto de las jurisdicciones, un promedio anual de 177 pesos.¹

En cuanto al servicio de electricidad, durante el año 2014, un habitante del Gran Buenos Aires que consumía en promedio de 150 a 300 kw/h (se trata de un usuario representativo del promedio) sólo pagaba el 20% de la tarifa, mientras que el 80% restante estaba subsidiado por el Estado. En cambio, un residente de Santa Fe o Córdoba pagaba el 70% de la tarifa plena puesto que el subsidio sólo garantizaba el 30% restante.² Lo mismo sucedía con el transporte: en el año

2012, los cordobeses pagaban un boleto de colectivo equivalente a un 104% más de lo que gastaban los residentes de la ciudad porteña y del Gran Buenos Aires. Los santafesinos pagaban un 76% por encima de los habitantes del AMBA; los pampeanos, un 58% más; los salteños, un 49%, entre otros.

Dos papas y una batata

La quita parcial de subsidios impactará mayormente en los hogares de la ciudad porteña y el conurbano bonaerense, es decir, la región que prolongó en el tiempo el congelamiento tarifario y donde los incrementos no fueron tan elevados como en el resto de las provincias. A partir de un ejercicio estadístico hemos relevado cuál será el impacto en una familia obrera en la provincia de Buenos Aires, tomando como criterios los gastos en boletos de colectivo y en los servicios del agua, gas y electricidad. Tomamos como base el consumo de los hogares de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares efectuada por el INDEC durante el año 2012, y sin incluir otros transportes y gastos en combustible, tarjeta SUBE ni

abonos mensuales. Dicho en otros términos, no deja de ser un cálculo conservador.

En este sentido, manteniéndose constante la cantidad consumida, el mayor impacto de los aumentos se verá reflejado en el gas natural, agua y electricidad. Con la quita parcial de subsidios, el aumento del gasto en el servicio de gas será de más de 8 veces para las familias obreras con jefe asalariado registrado privado y estatal, mientras que, para una familia con jefe asalariado no registrado, el incremento será de 7 veces. En el caso del servicio eléctrico su aumento representará una suba del gasto de más del triple para las familias con jefes registrado privado y público, mientras que, para una vivienda con jefe asalariado “en negro” el incremento será de un poco más del doble (ver Cuadro I).

Cabe destacar que si comparamos el monto que se gasta en estos servicios respecto del ingreso total familiar (o sea, de los ingresos laborales y no laborales del conjunto de la unidad en el hogar), el mismo representaba en 2015 de un 1,3 a un 2%. Con la quita parcial de subsidios, y manteniéndose constantes dichos ingresos, esos porcentajes pasarían a representar entre un 4 y

un 5,1% del ingreso familiar. Esto que parece poco, en realidad representa mucho para la vivienda obrera. Sobre todo porque el gasto destinado a los bienes y servicios más elementales, o sea, aquellos que hacen a la reproducción biológica, representan un porcentaje muy elevado respecto del total del gasto mensual. Para las familias obreras con jefe asalariado no registrado o con jefe beneficiario de un plan de empleo de la provincia de Buenos Aires, el gasto en alimentos, indumentaria, vivienda y salud representa el 58 y 57% del total de gastos, respectivamente.

Preparando el terreno

El kirchnerismo intentó varias veces desarmar lo que había armado para evitar la explosión social y para mantener su base electoral. Encontró una resistencia inmediata y, en medio de la crisis política permanente en la que comenzó a vivir desde al menos el 2013, prefirió transformar esa energía social en la “bomba” que le dejaría de herencia al próximo gobierno. El macrismo sabe que no puede desarmar de la noche a la mañana todo aquello que se obtuvo luego del Argentinazo sin consecuencias políticas. De hecho, entre los aumentos tarifarios, la inflación y las promesas incumplidas en relación al impuesto a las ganancias, va camino a perder sus apoyos entre la burocracia sindical que, hoy por hoy, se encamina a la unidad, preocupada por la resistencia y la movilización de las bases. Sin dudas es un escenario propicio para la intervención de la clase obrera y la izquierda. Pero la izquierda debe tomarse la tarea de explicar a los obreros qué es lo que se viene y cómo enfrentarlo, sin embellecer el pasado. De lo contrario, terminará constituyendo al moribundo kirchnerismo en una alternativa para las masas. Qué mejor que un congreso de obreros ocupados y desocupados donde confluyan todas las organizaciones de izquierda para crear comisiones, dividir tareas, organizar a los desocupados en los barrios, los ocupados en las fábricas, intervenir en todos los frentes e impulsar un plan de lucha en bloque.

Notas

¹ASAP (2014). “Subsidios y Compensaciones Tarifarias en Transporte”. Disponible en: <http://goo.gl/MqeJ9N>.

²ASAP (2015). “Los subsidios energéticos en Argentina”. Disponible en: <http://goo.gl/HSAZbb>.

LIBROS Y TEXTOS USADOS

SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS

**Técnicos - Matemática - Química - Física - Medicina - Derecho - Filosofía - Literatura
Psicología - Arte - Arquitectura - Agronomía y Veterinaria - Ciencias Económicas - Administración**

**COMPRAMOS LIBROS A DOMICILIO
EMILIO MITRE 431 - 15-6519-4979**

¿Dónde están los obreros?

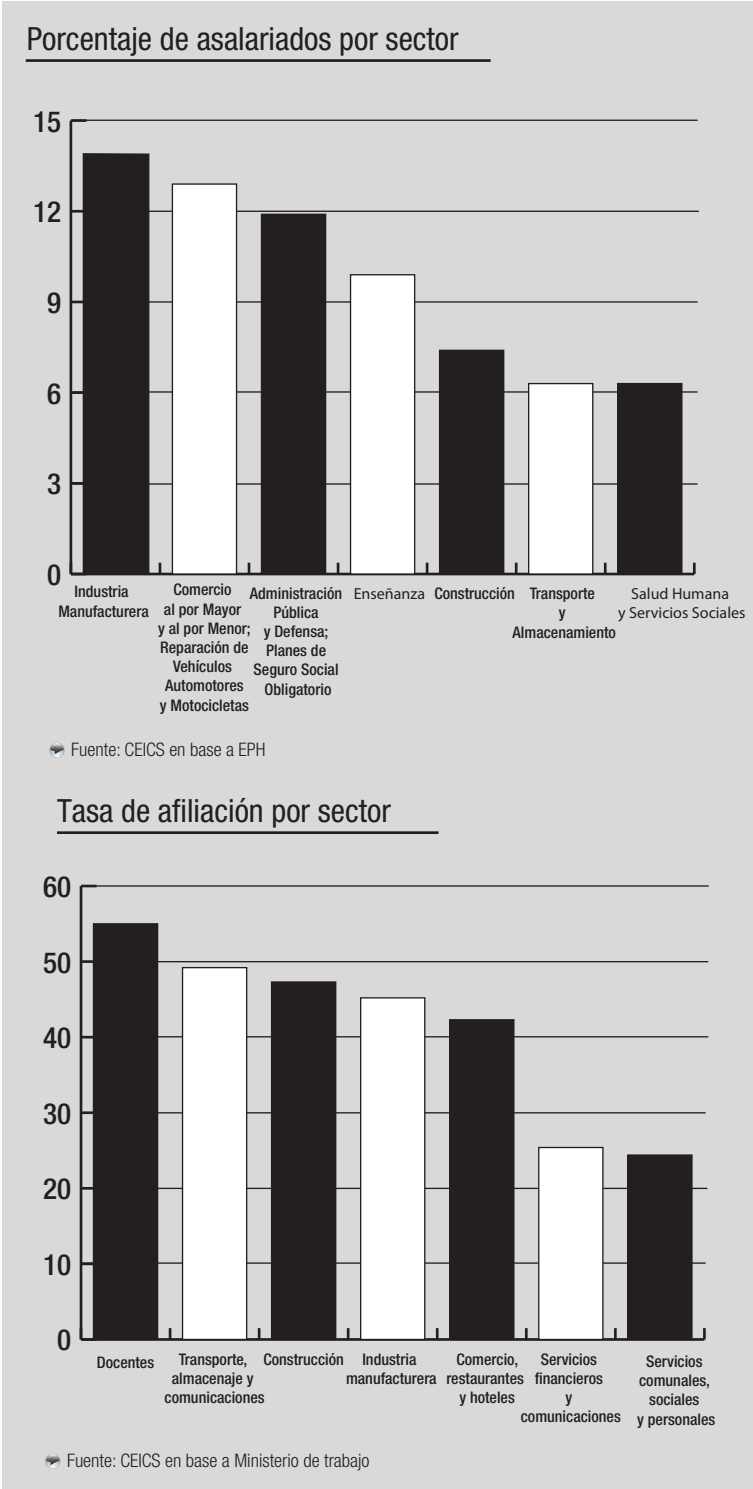
Un análisis de la estructura de la clase obrera argentina

lanina Harari
TES - CEICS

A lo largo de su historia, la clase obrera argentina ha atravesado cambios en su fisonomía. Su estructura no es la misma hoy que a comienzos del siglo XX o que en la década del 70. A medida que la acumulación capitalista fue avanzando, la estructura de la clase explotada sufrió modificaciones. Una de los elementos que motoriza este proceso es la expansión y profundización del régimen de gran industria, caracterizado por la mecanización del proceso de trabajo y la consecuente expulsión de fuerza de trabajo de aquellas ramas que han alcanzado ese estadio. A su vez, van surgiendo nuevas ramas que comienzan con un proceso de trabajo manufacturero, que implica mayor utilización de trabajo vivo. A ello se suman actividades en donde el proceso de subsunción del trabajo al capital no se había completado, la concentración no había avanzado, y por tanto podían ser ejercidas por la pequeña burguesía. A medida que estos procesos se desarrollan, sobreviene un proceso de proletarianización. Todo esto, sumado a otros procesos económicos, como la expansión o contracción de la producción en ciertas ramas, o la necesidad de la burguesía de emplear trabajadores en el aparato estatal –sea porque se complejizan sus funciones o para absorber parte de sobrepoblación relativa–, va moldeando la estructura de la clase obrera. Comprender estos cambios y conocer la fisonomía actual de la clase resulta imprescindible para cualquier estrategia política.

Adiós a los grandes batallones industriales

Uno de los mitos más presentes en la izquierda es que la vanguardia de la revolución van a ser los “grandes batallones” de la clase obrera nucleados en el sector industrial. Pero hay una mala noticia: tal cosa ha dejado de existir. No solo una parte importante de la clase obrera carece hoy de trabajo, sino que el sector industrial nuclea una porción menos de los obreros ocupados. El grueso de la clase obrera argentina se ocupa en el sector “servicios” y no en aquel al que suele apelar la izquierda. El 67% de los ocupados se emplea allí y solo un 13,9% en el sector manufacturero. Fuera de ello, tenemos un 7,4% en construcción y un 1% en actividades primarias (agropecuarias y extractivas). Además, el 83% de los obreros ocupados se emplea en establecimientos de hasta 100 trabajadores, es



decir que la concentración de obreros en grandes fábricas no es un fenómeno muy extendido. Por otro lado, un sector importante se encuentra empleado en el ámbito estatal: un 22%.¹ Esta distribución de la fuerza de trabajo no guarda relación con la producción física o de valor de cada sector. Más bien podría relacionarse con el avance de la gran industria en las distintas ramas. Aquellas del sector servicios tienden a estar menos mecanizadas que el resto. Por el contrario, las actividades primarias, en especial la principal, la cerealera, y las industriales, tienden a presentar una mayor composición orgánica, por lo que el requerimiento de fuerza de trabajo es menor.

El peso de cada rama

Si se realiza un análisis por rama

de actividad, se puede observar con mayor precisión el peso de cada fracción obrera. A primera vista los trabajadores de la industria manufacturera son mayoritarios (13,9%). Pero dado que allí se engloban una gran cantidad de ramas (40 en total), cada una resulta en una pequeña fracción: ninguna de ellas supera el 1,6% del total de trabajadores ocupados. Alimentación (1,6%) y metalúrgicos (1,5%) lideran el ranking. El resto no llega siquiera al 1% del total de los asalariados. En promedio, el 50% de los trabajadores de la industria manufacturera se concentra en GBA. A su vez, en este aglomerado, el 18% del total de asalariados se ocupa en este sector. En Rosario se ubica el 6,29% como promedio de obreros de las ramas del sector. En esa ciudad se concentra una porción importante de los obreros ocupados

en la fabricación de metales (siderurgia): un 30% de los obreros de la rama, por la presencia de Acindar, a lo que hay que sumar el 12% de productos de metal. Sin embargo, en el total del aglomerado estas ramas explican el 0,25% y 3,68% del empleo asalariado respectivamente. En promedio, en Córdoba se ubica el 5,4% de los obreros del sector manufacturero. Se destaca en la fabricación de vehículos (20,4% de los obreros de la rama, que solo explican el 3,36% del empleo allí), fabricación de aeronaves (29,87%; que explica el 0,13% del empleo). En Tierra del Fuego (Ushuaia-Río Grande) solo se concentra el 2,75% de los trabajadores del sector, pero la industria manufacturera explica el 27% del empleo de este aglomerado, relacionado con la presencia de la industria electrónica (el 87% de esta industria se encuentra en esa provincia). A su vez este sector representa el 14% del proletariado de Tierra del Fuego. El sector que sigue en importancia, luego de la industria manufacturera en su conjunto, es el de comercio (12,9%). El problema es la dispersión en establecimientos chicos, lo cual dificulta su organización. En promedio de las actividades de la rama, el 51% de los trabajadores se emplea en establecimientos de hasta 10 obreros. También este sector se concentra en mayor proporción en GBA (38,79% para las ramas de comercio). Estas ramas constituyen, a su vez, el 14,3% del empleo asalariado de GBA. En CABA se encuentra el 10% de esta rama, y del total de empleo de la ciudad, constituyen el 11,5%. En tercer lugar se ubican los trabajadores de la administración pública y defensa (11,9%). Aquí no se contabilizan los obreros estatales de otras ramas. El 22% de este sector se ubica en GBA y CABA. Córdoba concentra 5% y Rosario y Mendoza, alrededor del 3% cada una. Representa del total de trabajadores de cada aglomerado urbano (enumeramos los que tienen los porcentajes más importantes), el 36% en Río Gallegos; 33,5% en Viedma; 22% en Gran La Plata; 20% en Gran Paraná; 24% en Posadas; 19,5% en Gran Resistencia; 21% en Corrientes; 15,6% en Concordia; 22% en Formosa; 19% en Neuquén; 26% en Santiago del Estero; 25,7% en Jujuy; 26,6% en Gran Catamarca; 15,6% en Salta; 26,6% en La Rioja; 17% en San Luis; 25% en Santa Rosa; 19% en Ushuaia; 25% en Rawson; 13,6% en Gran San Juan; 12,3% en Gran Mendoza. El sector de enseñanza, principalmente docentes, es el que sigue en importancia (9,9%). De ellos,

Comprender los cambios y conocer la fisonomía actual de la clase obrera resulta imprescindible para cualquier estrategia política. Uno de los mitos más presentes en la izquierda es que la vanguardia de la revolución van a ser los “grandes batallones” de la clase obrera nucleados en el sector industrial. Pero tal cosa ha dejado de existir.

tienen un gran peso los estatales (68%). El 33% del sector de enseñanza se encuentra en GBA y el 14,3% en CABA; Córdoba y Rosario tienen un 5% cada una y hay un 4% en Mendoza. El Gran Resistencia es el aglomerado donde hay un mayor porcentaje de docentes entre el proletariado: 15,9%. Le sigue Jujuy con un 15,2%, Concordia con un 13,8%, La Rioja con un 13% y San Luis 12,9%. Casi en el mismo porcentaje, tenemos el empleo en hogares (9,7%), con un alto porcentaje de trabajo en negro (80%). Aquí se incluye al personal doméstico, un sector al que nadie organiza, y a los porteros de edificios. La mayor parte de estos trabajadores se ubican en GBA (45,3%). Luego tenemos el sector de construcción (7,4%). Se trata también de un sector desconcentrado (59% en obras con menos de diez empleados), con una incidencia alta del trabajo en negro (68%). Si bien el trabajo directamente estatal es bajo, en muchos casos las obras privadas que contratan mayor cantidad de trabajadores resultan obras públicas licitadas por el Estado, pero ejecutadas por empresas privadas. GBA concentra la mayor cantidad de obreros de la construcción (37,5%), seguido de Córdoba (7,3%) y Gran Rosario (5,60%). A su vez los aglomerados donde hay una mayor proporción de obreros de la construcción en relación al total de los asalariados son Formosa (17,22%), Santiago del Estero (13,5%), Gran San Juan (13%) y Comodoro Rivadavia (11,3%). Le sigue en importancia transporte (6,3%), donde se destaca el transporte automotor de pasajeros y de cargas. Es un sector con baja incidencia del trabajo en negro en relación al resto (21%) y con una alta concentración en empresas de más de 100 trabajadores (42%). El 47,6% de los trabajadores de esta rama se ubican en GBA y un 15% en CABA. El 17% de los



trabajadores de depósito y almacenaje se encuentran en Mendoza (por el paso a Chile) y 57% en GBA. El 27,5% de los trabajadores de transporte por vía acuática se encuentran en el Gran Rosario (por el puerto) y el 40% en CABA. En ningún aglomerado parecen tener un peso importante dentro del proletariado local.

En igual porcentaje al anterior, tenemos el sector de salud (6,3%). En lo que refiere a la atención sanitaria estrictamente, los trabajadores se encuentran prácticamente divididos a la mitad entre estatales y privados. En GBA se concentra la mayor cantidad de obreros de este sector (promedio de 25,9% y se destaca 51,4% de Asistencia social relacionada con la atención a la salud). Sigue Ciudad de Buenos Aires (promedio 10,9%). A su vez, este sector explica el 10,9% del empleo de Santa Rosa, el 9,4% de CABA y 9,6% en Corrientes.

El resto de las actividades contienen fracciones menores de obreros: Actividades Administrativas y Servicios de Apoyo (3,5%), Alojamiento y Servicios de Comidas (3,4%), Información y comunicación (2,4%), Actividades Financieras (2,4%)—con la presencia de bancarios (1,3%)—, Actividades profesionales, científicas y técnicas (2,3%), Arte, entretenimiento y recreación (1,5%), Suministro

De Agua; Alcantarillado, Gestión de Desechos y Actividades de Saneamiento (0,6%), Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado (0,2%), Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (0,6%) y Explotación de Minas y Canteras (0,5%).

Fragmentados

La fragmentación de la clase obrera no se da solo entre ocupados y desocupados, sino también por otras vías que utiliza la burguesía para aumentar la explotación. Una de ellas es la utilización de distintos tipos de contratos. El trabajo en negro aparece como el problema más grave: constituye un 32% del total. Pero otra vía de precarización es el contrato por tiempo determinado, que representa el 9% del total. En construcción y en cultivos agrícolas es donde mayor porcentaje hay de contratos por tiempo determinado (36% y 38% respectivamente), por las características de estas ramas. Ahora bien, incluso entre los trabajadores en blanco, hay un gran porcentaje de trabajadores que no se encuentra comprendido dentro de los convenios colectivos: alrededor del 50%. Una parte de quienes están por fuera de la negociación colectiva corresponde a aquellas actividades que legalmente no están

encontrados en la Ley de Contrato de Trabajo.

Otro indicador de la fragmentación, esta vez en términos organizativos, es la caída de la tasa de afiliación. El último dato disponible es de 2008 y muestra que la cantidad de afiliados a sindicatos representa solo el 37,7% de los trabajadores.² Los sectores con mayor tasa de afiliación son transporte, almacenaje y comunicación, que pertenecen al gremio de camioneros, y construcción, con un 49,2% y 47,3% respectivamente. Los gremios industriales (45,2%), comercio y gastronomía siguen en importancia (42,3%). Con menor porcentaje se encuentran los servicios financieros (25,4%). Bastante por encima de todos ellos se encuentra la afiliación entre docentes: 55%.

Si se compara históricamente, la tasa de afiliación bajo el kirchnerismo se recuperó respecto a fines de los 90, pero no superó la existente hasta mediados de esa década. En el 2000 esta tasa era de 31,7%, pero en 1995, del 38,7% y, si nos vamos más atrás, en 1974, del 43%. Según distintas mediciones, durante el kirchnerismo nos encontraríamos en niveles históricos de sindicalización bajos, a pesar del discurso de la “revitalización sindical”.

El empleo en negro y el empleo en pymes explican parte del problema, pero la baja afiliación es registrada

en las empresas más grandes, con mayor presencia del empleo registrado. A su vez, en el interior del país la tasa de afiliación tiende a ser mayor: 44% contra el 35,8% en GBA. Otro dato que muestra el bajo nivel de organización sindical, al menos en el sector privado, es la presencia de delegados: solo el 14,2% de las empresas cuenta con al menos un delegado gremial. Si se contabiliza la cantidad de obreros que se encuentran en empresas con representación gremial, se obtiene el 39%. Es decir que hay cierta correlación entre los obreros que se afilian y aquellos que tienen representación sindical en su lugar de trabajo.

Más allá de la burocracia

El escenario sindical hace décadas que está dominado por la burocracia sindical peronista. No solo son fuertes en gremios cuantitativamente importantes, sino en gremios claves de la estructura económica que le permiten tener fuerza de presión (como transporte). La izquierda viene ocupando espacios en algunos gremios de fracciones importantes como docentes y construcción (en menor medida) y en otros de menor relevancia (como gráficos, periodistas o neumáticos). En el resto de las ramas tiene una presencia marginal, con delegados

dispersos aquí y allá.

En la izquierda, aun hoy persiste cierto fetichismo del overol, cuando el grueso de la clase obrera ya no lo utiliza. Tener en claro la composición del campo en el que se mueve y las tendencias que están operando es una condición necesaria para acertar en la organización de la clase. Los anarquistas ganaron fuerza en los sindicatos de oficio cuando el trabajo manual imperaba, los comunistas tuvieron éxito cuando reconocieron la desaparición de los oficios e impulsaron sindicatos por rama, el PRT creció cuando organizó obreros en las ciudades y no buscando campesinos inexistentes en el monte.

Notas

¹Todos los datos fueron extraídos de la Encuesta Permanente de Hogares y el Censo Nacional de Población de 2010. Lamentablemente el CNP ha perdido su carácter censal para gran parte de los datos relevados y no se cuenta con un Censo Económico ni Agropecuario reciente gracias a la política de ocultamiento estadístico del kirchnerismo. Por este motivo, utilizaremos principalmente la EPH, a pesar de las deficiencias que puede presentar como fuente.

²Ministerio de Trabajo: *Principales resultados del Módulo de Relaciones Laborales. Año 2008*.

manuel suárez

Editor

manuel suárez

Editor

Edición e Impresión de
Libros, Revistas, Folletos
Todo tipo de impresos

Contacto: estelaymanuel@yahoo.com

15- 57223311



LAP

Laboratorio
de Análisis
Político

www.ceics.org/lap - laboratorio@ceics.org.ar

La crisis política en España y sus perspectivas

De Moncloa a Podemos



Nadia Bustos
Grupo de Análisis
Internacional-CEICS

Las elecciones de diciembre pasado en España mostraron la crisis política en la que se encuentra sumergida la burguesía española. De las 350 bancas en el parlamento, el Partido Popular (PP) ganó 123, el PSOE 90, Podemos 69 y Ciudadanos 40. Para formar gobierno, hace falta reunir 179. El PP recibió el apoyo de Ciudadanos desde el momento que se dieron a conocer los resultados. Sin embargo, para que esa coalición prosperara, era necesaria una abstención del PSOE. César Luena, referente del PSOE, afirmó que jamás apoyarían al PP o a Rajoy. Finalmente, el primer intento de coalición fracasó. En enero Podemos se reunió con el PSOE para negociar una alianza. La condición, era la aceptación del referéndum sobre la independencia de Cataluña. El PSOE rechazó la oferta y se acercó a Ciudadanos. En el mes de febrero, ambos partidos firmaron el acuerdo de un programa de gobierno. Hacia finales de marzo la coalición se presentó en el congreso, para someter a votación la aprobación de la nueva coalición. De los 179 votos necesarios para ganar, solo obtuvieron 130. Hubo 219 votos en

contra, 123 provenientes del PP y 69 de Podemos. En este contexto, Podemos comienza un nuevo acercamiento hacia el PSOE y Ciudadanos, con el objetivo de reformar el acuerdo entre ambos partidos. Los dos principales puntos a discutir era la derogación de la reforma laboral y el referéndum catalán. PSOE y Ciudadanos afirmaron que no modificarán el acuerdo firmado. El 18 de abril Podemos llevó adelante un referéndum en sus bases, respecto a la aceptación del acuerdo con el PSOE-Ciudadanos. El rechazo fue rotundo: 88% se pronunció en contra. En cambio, cuando se consultó si aceptarían un gobierno PSOE-Izquierda Unida-Confluencias-Podemos, el 91,2% respondió favorablemente.

La preocupación por la gobernabilidad llegó hasta la casa real. El rey Felipe VI tomó el problema en sus manos y convocó a los partidos a una nueva reunión de diálogo para el 25 y 26 de abril. Según la Constitución española, en caso de no conseguir formar gobierno para el 2 de mayo, el rey deberá disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones. Sin embargo, esto tampoco resolvería el problema de gobernabilidad. Varias encuestadoras muestran que la intención de voto no se modificó desde las elecciones de diciembre.¹



La incapacidad de formar gobierno es una muestra de la crisis política en la que se encuentra sumergida a la burguesía española desde 2011. Estamos ante la crisis del régimen de plena hegemonía instaurado en el Pacto de la Moncloa. A continuación analizaremos los principales aspectos de la historia del régimen democrático y su debacle a partir de la crisis del 2008.

La era de la hegemonía

El bipartidismo clásico que predominó en el sistema político español en los últimos veinte años, tuvo su origen en la firma del Pacto de la Moncloa. El período de transición política inaugurado con la muerte de Franco, enfrentó a la burguesía con el problema de la gobernabilidad. El sucesor de Franco fue el Rey Juan Carlos de Borbón, quien controlaba el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Juan Carlos I se propuso el abandono del régimen implantado bajo el signo fascista, con el objetivo de establecer un régimen democrático. Se trató de una etapa acompañada de un aumento de las huelgas obreras y de resistencia de los sectores más reaccionarios. Uno de los elementos claves de la transición fue la alianza establecida con el PCE. Aún en la clandestinidad, el partido tenía una

importante influencia dentro del movimiento obrero y también en el resto de Europa. El nuevo presidente concedió la legalización del PC, a cambio del apoyo a la monarquía. La crisis económica obligó a un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para la implementación de un plan de reformas. El Pacto de la Moncloa fueron dos acuerdos, uno económico y otro político, firmado por Alianza Popular (AP), PSUC-PCE, PSOE, Unión del Centro Democrático (UCD) y la minoría vasco-catalana. El acuerdo económico implicaba reformas en presupuesto, seguridad social, política monetaria, fiscal, empleo, acción sindical y modernización agraria. El político instauraba el pleno funcionamiento un régimen democrático con sus correspondientes instituciones y libertades. Estos acuerdos permitieron sancionar al año siguiente la Constitución Nacional. Los pactos pudieron resolver la crisis económica, que amenazaba con desestabilizar el sistema político, a costas de un profundo ajuste. Aunque el PCE no lo firmó, fue su principal artífice. La promesa de que se encargaría de disolver a todos los elementos revolucionarios en su interior, fueron los que permitieron avanzar a la burguesía española. En 1982, se inició un período de

14 años de gobierno del PSOE, mientras que AP intentó articular una alternativa de derecha. En 1986, España logró ingresar a la Comunidad Económica Europea y se convirtió en uno de los máximos receptores de los fondos europeos para el desarrollo de economías retrasadas. Se estima que el país recibió entre 1986 y 2010 casi 230 millones de euros, sin contar ayudas directas.² El PSOE gobernó hasta 1996, apoyado por los nacionalistas catalanes (CiU) y vascos (PNV). Sin embargo, hacia 1992 se inició una etapa de desgaste, a partir del descubrimiento de casos de corrupción. Mientras tanto, la derecha logró unificarse en el Partido Popular (PP) y ganó las elecciones de 1996, con un estrecho margen. El PP contó con el apoyo de la CiU, PNV y la Coalición Canaria. Aznar gobernó con una coyuntura económica favorable y pudo ingresar a la zona euro hacia el año 2002. Sin embargo, la pérdida de apoyo de la población comenzó a verse hacia 2003, cuando España colaboró con la invasión estadounidense a Irak. El inicio de una ola de protestas abrió el camino para que el PSOE, con Zapatero a la cabeza, obtenga buenos resultados en las elecciones de 2004.

La incapacidad de formar gobierno es una muestra de la crisis política en la que se encuentra sumergida la burguesía española desde 2011, lo que no es más que la ruptura de los lazos que unían políticamente a la clase obrera con determinadas estructuras burguesas, construidas durante décadas.

De la crisis económica a la crisis política

La crisis de 2008, producto de la caída de tasa de ganancia, afectó en mayor o menor medida, a todas las economías del mundo. La aparición de este factor disruptivo llevó al gobierno de Zapatero a descargar un ajuste feroz sobre la clase obrera. Entre ellas, recorte salarial a los empleados públicos, recortes en salud y reformas en el sistema previsional y laboral. El descontento de la población hizo eclosión hacia 2011, con el surgimiento del movimiento de indignados y el pedido de renuncia de Zapatero. La crisis política fue contenida con el adelanto de las elecciones y el advenimiento de un gobierno liderado por el Partido Popular (PP) encabezado por Rajoy. Sin embargo, el PP no ofreció un programa distinto al del PSOE, sino que avanzó en el ajuste iniciado por Zapatero. Apenas asumió Rajoy realizó un aumento impositivo y una reforma laboral. La polémica reforma fue criticada por distintos sectores del movimiento obrero y fue motivo de importantes movilizaciones. La normativa establece una reducción de la indemnización por los despidos sin causa. Además, amplió los motivos de despido para empresas en crisis, figura que permite pagar un porcentaje menor de indemnización. La reforma laboral promueve además una reducción de impuestos a las pymes que contraten trabajadores menores a 30 años. Otro aspecto que favorece a las empresas en crisis es la posibilidad de incumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

Luego de esta medida, el gobierno del PP impulsó la polémica Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordata, que estipula multas desde los 600 a los 30 mil euros para delitos que abarcan la ocupación de inmuebles, entidades bancarias, faltas de respeto a la policía, negación a la identificación, las manifestaciones frente al Congreso, Senado,

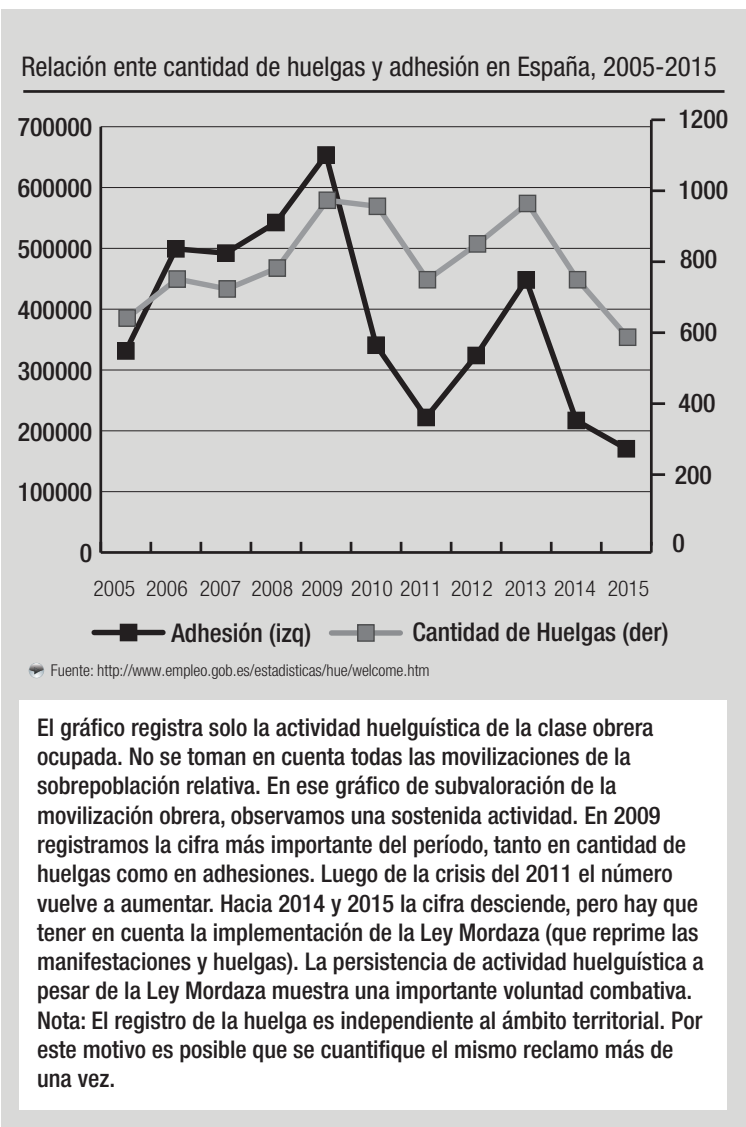
Parlamentos autonómicos o impedir un deshaucio. La ley mordaza criminaliza y sanciona cualquier intento de protesta, con el objetivo de disciplinar al movimiento obrero.

La sanción de la Ley Mordaza estuvo acompañada por una reforma del Código Penal. La medida impulsada por el PP y el PSOE, muestra otro aspecto de la crisis política. Allí se reformula el concepto de atentado y se lo define como “acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente de las fuerzas de seguridad o miembros de servicios de asistencia y rescate”.³

El PP impulsó además una reforma educativa conocida como Ley Orgánica para Mejorar la Calidad Educativa (LOMSE). Entre las medidas más polémicas se encuentra la incorporación de la materia Religión a la currícula optativa de la escuela media y la descentralización de los contenidos y mínimo de horas requeridas por curso.

En 2015 el PP impulsó una nueva reforma educativa, esta vez dirigida hacia el ámbito universitario, conocida como “reforma 3+2”. La medida reduce las carreras de grado a 3 años y amplía a 2 años los posgrados y masters. Se trata de cursos que cuestan casi el doble que cualquier carrera de grado. Así el gobierno profundiza la degradación de las carreras de grado y encarece la titulación superior. En consonancia con la medida, se avanzó con el recorte de becas que pasó de 793.949 en 2011 a 757.027 en 2016. El recorte alcanzó al personal docente de las escuelas públicas: durante 2009-2010 había 51 mil profesores en centros públicos, esa cifra se redujo a los 47 mil en 2014. La disminución del personal docente tiene su causa en el cierre de cursos. El gobierno impulsó un aumento del 20% de alumnos por clase, lo que permitió cerrar varios cursos.⁴

La salida a la crisis económica se vio acompañada de medidas la degradación de las condiciones de vida de la clase obrera. En enero de 2008, el desempleo alcanzaba al 9% de la población. La cifra fue aumentando hasta alcanzar un pico del 26,3% en marzo de 2014. En enero de 2016, rondaba el 20%, una de las más altas de la UE, seguido solo por Grecia con el 24,4%.⁵ La falta de perspectivas de vida se observa a partir del aumento de la tasa de suicidios. Dentro de las causas de muerte no natural, el número de suicidios dobla el total de muertos por accidentes de tránsito en 2008.



Esta tendencia se mantiene hasta 2014, cuando las cifras duplicaron el número de muertos por accidentes y se convirtieron en la principal causa de muerte no natural.⁶ Distintas fracciones de la clase obrera realizaron huelgas y movilizaciones para luchar por sus condiciones de trabajo. Frente a la crisis política de la burguesía, la clase obrera no logró formular una alternativa política que responda a sus propios intereses de clase. El fracaso del movimiento de indignados muestra el límite de la ruptura con la estructura política. El autonomismo de los indignados dejó el camino libre al ajuste del PP. Hasta el momento, la clase obrera organizada a través de los sindicatos está llevando adelante una lucha fragmentada, que abarca sectores particulares o no logran superar la consigna sindical. A pesar de esta situación, en algunos sectores minoritarios existe una ruptura incipiente con las direcciones burocráticas de la UGT, la CCOO y la CGT.

La crisis política iniciada en 2011 derivó en el fin del bipartidismo español. En este contexto surgen Ciudadanos y Podemos. El primero

es un partido que ya existía desde 2006 pero cobra relevancia política recién en 2012, vinculado al Ibex 35, es decir, a las empresas que cotizan en la bolsa española. El segundo surge en 2014, encabezado por Pablo Iglesias. Podemos encarna un programa reformista, que promueve el referéndum por la cuestión catalana, la derogación de la reforma laboral del PP y el refugio a los refugiados sirios. Ciudadanos tiene un programa liberal opuesto al separatismo catalán y favorable a apoyar tanto al PP como al PSOE. Estas alternativas políticas en un contexto de crisis representan un intento de reconstrucción del programa de los partidos tradicionales por fuera de esas estructuras. La incapacidad de formar gobierno no solo muestra el fin del bipartidismo clásico. Es además la expresión de una tendencia hacia la fragmentación del sistema político español. No vamos hacia un sistema de partido único, sino a una profundización de la fragilidad. La raíz del problema reside en la debilidad de la burguesía española. La incapacidad de resolver el reclamo separatista de Cataluña es un ejemplo de ello.

La cuestión catalana

El problema de la independencia de Cataluña siempre estuvo presente dentro de la historia de España. Sin embargo, cobra relevancia en 2010, a partir de la crisis económica y política que atravesaba el país. Cataluña concentra la producción industrial más importante del país, representa el 19% del PBI y el 25% de las exportaciones. La mayoría de los bienes allí producidos son comercializados en el resto de España y en la UE. El último año los sectores productivos más favorecidos fueron la industria del caucho, química, plástica y metalúrgica. Se trata de una región que presenta, en promedio, un crecimiento mayor que el resto del país. Cataluña es además el principal destino de la inversión extranjera.

A pesar del crecimiento económico, Cataluña posee un déficit económico importante. El gobierno emitió entre 2010 y 2011 los “bonos patrióticos” para conseguir financiación. La llegada de las divisas no impidió la realización del ajuste. El gobierno impulsó recortes en gasto público, fundamentalmente sanidad y educación, como también la venta del patrimonio del gobierno.⁷

Dentro de la región, la burguesía se encuentra dividida respecto al pedido de independencia. Entre las cámaras impulsoras del reclamo se encuentran las trece cámaras de comercio catalanas: Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Palamós, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Tàrraga, Terrassa, Tortosa y Valls. A ellas se les suma el Consejo de Cámaras de Catalunya. Esta fracción de la burguesía catalana firmó en 2014 un manifiesto conocido como el Manifiesto del Faro, que promueve la consulta popular sobre la separación del resto del país. El argumento principal es la diferencia entre el aporte de la región catalana al resto del país en términos de impuestos y lo que recibe del gobierno nacional. Estas fracciones de la burguesía son representadas por Convergencia Democrática de Catalunya y tienen mayoría dentro del parlamento catalán. Los independentistas afirman que si estos impuestos se quedaran en la región, Cataluña podría ser autosuficiente.⁸

En la oposición se encuentra la patronal Fomento del Trabajo, junto con Empresarios de Catalunya, quienes expresaron en reiteradas oportunidades su oposición al proceso secesionista. La principal

preocupación reside en la salida de la zona del Euro y una posible devaluación cambiaria. Esta fracción de la burguesía propone resolver el conflicto a través de un pacto fiscal que aumente los recursos de la región.

Los empresarios integrantes de Foro Puente Aéreo, también expresaron su rechazo a la independencia de la región. El foro reúne a 40 de las empresas más concentradas de Barcelona y Madrid, entre las que se encuentra Telefónica, Repsol, Grupo Godó, Agbar, Endersa, Banco Sabadell y Caixabank. Todos ellos se encuentran a favor de un pacto que dé cuenta de las especificidades de Cataluña.⁹ Es que la integración al Estado español le permite recibir migración de otras provincias y un mercado protegido a sus productos.

El problema del separatismo catalán muestra que España no tiene completamente resuelta su cuestión nacional. En este caso, quiénes conforman la burguesía nacional unificada. Pero eso no quiere decir que la clase obrera catalana sufra una opresión particular como para justificar una consigna independentista. El separatismo es contrario a los intereses de la clase obrera y a su unidad.

Perspectivas

El resurgimiento del separatismo catalán revela la falta de unidad política del conjunto de la burguesía de España y se constituye en un obstáculo para la resolución de la crisis política del país. Podemos, luego de todas las bravatas contra el ajuste, ha firmado su compromiso para mantener las medidas de Rajoy. Poco le va a quedar a esa coalición gobernante, si se acuerda sobre el punto catalán.

Lo que aparece como la crisis del Pacto de la Moncloa no es más que la ruptura de los lazos que unían políticamente a la clase obrera con determinadas estructuras burguesas, construidas durante décadas. Ese quiebre es el producto de las promesas incumplidas de la democracia burguesa, de la integración a la Comunidad Económica Europea y del capitalismo en general. Se prometió que si se abdicaba de la revolución, si se enterraban los sueños que se anudaron en la Guerra Civil, la vida de todos sería mejor, que habría lugar para todos. Eso es lo que se derrumbó. Estos son momentos para poner todas esas ilusiones contra la pared y revisar lo que se prometió en aquel entonces. Es tiempo de retomar aquellas palabras enterradas: Revolución y Socialismo. Pero también, de sacar un balance sobre por qué se perdió en aquel entonces, por qué hay palabras que son las del enemigo, como República. Hoy, los revolucionarios españoles deben poner las manos a la obra, unificar sus fuerzas y convocar a las fracciones ocupadas y desocupadas para discutir un programa y una estrategia de intervención.

Notas

¹ <http://goo.gl/wVDZrn>.

² <http://goo.gl/gqHcFT>.

³ <http://goo.gl/4SH8mb>.

⁴ <http://goo.gl/5uMOjN>.

⁵ <https://goo.gl/LKDdds>.

⁶ <http://goo.gl/e5NIFn>.

⁷ <http://goo.gl/zfTT3P>.

⁸ <http://goo.gl/BPQAqa>.

⁹ <http://goo.gl/XXyGBh>.

LA UNIVERSIDAD OBRERA

Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales

Con el objetivo de acercar el conocimiento científico al conjunto de los trabajadores, abrimos este nuevo espacio de intervención en donde, programa a programa, analizaremos distintos aspectos de la sociedad capitalista, particularmente la argentina. Hablaremos de su historia, la economía, los conflictos políticos y sociales, las condiciones y desarrollo de la lucha de clases y las tareas que se le plantean a aquellos que pretenden transformar la realidad social hoy. Acompañanos ingresando a nuestro canal y escuchá online las intervenciones de los científicos que integran los distintos grupos de investigación del CEICS.

Escuchanos en <http://universidadobrera.ivoox.com>



OME

Observatorio
Marxista de
Economía

www.ceics.org/ome - observatorio@ceics.org.ar

El acuerdo con los denominados “fondos buitres” y la naturaleza de la deuda argentina

Volviendo a las andadas



Jonathan Bastida Bellot
OME-CEICS

Durante abril se aprobó en el Senado la media sanción que necesitaba el gobierno nacional para conseguir la ley que lo autoriza a endeudarse por hasta 12.500 millones de dólares. A su vez, se derogaron las leyes de Cerrojo y Pago Soberano, que impedían el pago de deuda a bonistas que rechazaron reestructurar títulos impagos desde el default del 2001 y la emisión de deuda para abonar a esos acreedores, conocidos como *holdouts* o *fondos buitres*. De esta manera, se habilitó el pago de 11.684 millones de dólares en efectivo para cerrar el litigio. La sanción fue aprobada por casi todos los partidos que conforman la cámara, independientemente de su signo político. Es sintomático de ello que el proyecto impulsado por Cambiemos haya sido aprobado en un Senado donde solo cuenta con 15 representantes. El cierre del conflicto le da enormes posibilidades al actual gobierno de iniciar un ciclo de endeudamiento, necesario para obtenerlos dólares que requiere. Con esta búsqueda, el gobierno actual sigue la misma política de la gestión kirchnerista en los últimos años. La apuesta del gobierno anterior para ilusionarse con una nueva victoria era volver al ciclo de endeudamiento externo. No sólo por parte del gobierno central, sino también por las administraciones provinciales y municipales y, sobre todo, por el sector privado, aprovechando las bajas tasas de interés vigentes en el mercado mundial. Sin embargo, lo que se buscaba mediante gestos como el acuerdo con el Club de París, la millonaria indemnización a Repsol por YPF, y el CIADI, se derrumbó con el revés judicial en la corte de Nueva York. Por fuera de declaraciones de ocasión, ni el Gobierno de los EE.UU. anuló el fallo como hizo en otras ocasiones ni los inversores apostaron a comprar la deuda argentina a los buitres para solucionar el problema, ni ningún organismo internacional ofreció ayuda a la Argentina para zafar del default. En estas condiciones sólo se conseguiría deuda a elevadas tasas de interés.¹ La necesidad de dólares vía endeudamiento, tanto del kircherismo ayer como del macrismo hoy, surge de un doble condicionamiento: por un lado, la acuciante situación de caja. La caída del precio internacional de los *commodities*, en particular de la soja, junto a la merma de otras fuentes de recursos adicionales como los fondos de ANSES y las reservas del BCRA significaron una disminución de la cantidad de recursos que el Estado puede tener



a su disposición.² Esto se agravó por el primer año de déficit comercial desde 1999: la balanza de 2015 cerró, según cifras de INDEC, con un rojo de 3.000 millones de dólares aun con un descenso del 50% en el rubro de importación de combustibles. Esto se suma al quinto año consecutivo de déficit fiscal, que acumuló, solo en 2015, 104.800 millones de pesos (desde 2011, 202.600 millones en valores del año 2015). En segundo lugar, hay una demanda cada vez mayor de dólares por parte de la burguesía local, a medida que se hace evidente el rezago de la productividad del trabajo nacional. La magnitud de dólares necesarios aumentó por el propio crecimiento de las importaciones para sostener una industria con insumos extranjeros, y a la vez creció el déficit energético porque la producción petrolera local no alcanzaba. Primero el cepo y luego la devaluación pusieron en evidencia que las reservas no alcanzaban y que no había dólares suficientes para sostener la acumulación del ineficiente capital local. A esto se suma el hecho de que la rentabilidad industrial empezó a caer en los últimos años. No cayó más, además de por la baja salarial, por la expansión del crédito

que sostuvo el consumo y por la intervención del Estado a través de la expansión del gasto público, en particular por los subsidios directos al sector privado.³ La política de ajuste de Macri va en consonancia con la necesidad de mostrarse solvente ante potenciales acreedores. La baja del costo laboral en dólares y del salario real por medio de devaluación y el tope a las paritarias, junto a la apertura comercial, el levantamiento del cepo y el aparente achicamiento estatal, van en este sentido.

Un poco de historia

En cuanto al ciclo de endeudamiento, la negociación en torno al pago a los holdouts se debe enmarcar en la larga historia de la deuda externa y en la serie de problemas estructurales que han caracterizado a la economía argentina, que está muy lejos de poder superar. Las interpretaciones corrientes, a izquierda y derecha, tienen limitaciones que reducen su análisis, ya que se abstraen de las condiciones de acumulación de capital en Argentina. En otras palabras, se considera a la deuda como fetiche, desgajada de su naturaleza y función en la estructura económica argentina.

Un primer dato que salta a la vista y que puede generar conclusiones distorsionadas, es el progresivo crecimiento de la deuda externa total (pública y privada) desde la década de los '70 hasta la actualidad. En 1973 su monto era de 4.890 millones de dólares, bajo los gobiernos de Cámpora y Perón. Para fines del gobierno de Isabel Martínez, se había elevado hasta alcanzar los 7.800 millones. Durante los años de la dictadura militar se disparó, llegando a 45.800 millones de dólares. Con el retorno de la democracia burguesa no dejó de crecer, y al retirarse Alfonsín en 1989 el monto trepaba hasta los 65.300 millones. Con el menemismo, su crecimiento volvió a acelerarse, hasta alcanzar los 146.216 millones. Por último, durante los gobiernos kirchneristas, la deuda externa disminuyó tras su renegociación en 2005-06, pero de ahí en adelante se observa una clara tendencia al alza hasta 2011 (año hasta el cual hay cifras oficiales), en el que llega a 140.655 millones. Pese al discurso del desendeudamiento, el kirchnerismo se va con una deuda externa cercana a la de las épocas de Menem. Con estas cifras se podría pensar que, mal que mal, al menos se estabilizó la carga de endeudamiento

Lejos de ser un mecanismo de exacción que trabó el desarrollo nacional, la deuda permitió a la burguesía que acumula en el mercado interno reproducirse, pateando hacia adelante la crisis y escondiendo su incapacidad de impulsar las fuerzas productivas, manifestación de su inutilidad como clase dirigente.

público. Pero esta suposición es incorrecta. El endeudamiento total no se detuvo. Por el contrario, la deuda pública valuada en dólares creció de forma constante, empujada por el endeudamiento interno con oficinas del Estado (ANSES, Banco Central y Banco Nación): a la salida de De La Rúa, la deuda pública alcanzaba los 144.500 millones de dólares; a diciembre de 2015, 222.700 millones.⁴ Por lo tanto, no se logró revertir la tendencia histórica al crecimiento de la deuda estatal. A lo sumo, lo que cambió *parcialmente* fue el signo de ese endeudamiento y el acreedor. No porque como supone cierto sector de la izquierda comprando el relato kirchnerista, se consiguió margen de maniobra para una política económica nacional, sino por la imposibilidad de endeudarse en los mercados internacionales. La deuda interna tiene la “ventaja” (para el Estado) de licuar ese monto mediante maniobras contables y financieras, o refinanciarlo con nueva emisión, estafando a los acreedores internos. Pero no soluciona la falta de divisas indispensables para la industria local, importadora neta de insumos. Por eso desde la campaña de la “re” de Cristina, e incluso antes, se intentó de forma desesperada reabrir el grifo de los otrora denostados organismos internacionales. En ese punto, la lectura más común en el progresismo y en amplios sectores de la izquierda es que la deuda es un mecanismo de extracción de riqueza nacional hacia los centros financieros internacionales, convirtiéndola en una carga cada vez más pesada para el desenvolvimiento económico de la Argentina. Sin embargo, la realidad es otra.

Chico, agrario...

La Argentina es un capitalismo tardío, chico y agrario. Tardío, porque ingresa al mercado mundial cuando otros han desarrollado una gran escala productiva en la mayor

parte de las ramas productivas.⁵ Por eso la producción local, salvo contadas excepciones, se rezaga de forma constante en escala y productividad en relación a los líderes mundiales. Es chico, porque debido a este y otros motivos, el capital no alcanza la escala y productividad medias del mercado mundial, lo que implica mayores costos. Esto significa que el nivel de la acumulación, la concentración y la magnitud del capital no alcanza ni por asomo el grado que tiene en los denominados países “centrales”; es decir los que se imponen en la competencia internacional. No quiere decir que en la Argentina no haya desarrollo capitalista. Al contrario, las relaciones capitalistas están plenamente desarrolladas. El problema no es la sujeción al imperialismo, las tareas inconclusas, la debilidad ideológica de los empresarios nacionales y otras patrañas por el estilo que tanto fascinan a la izquierda vernácula, sino el tamaño de su acumulación, el peso de su economía, cada vez más marginal a nivel mundial. Por eso, la industria argentina se rezaga de forma crónica en relación a los productores más eficientes. O sea, la productividad del trabajo avanza de forma más lenta que en los centros más competitivos. Resultado: mayores costos, menores ganancias y con eso mayores dificultades para sostenerse. En condiciones “normales”, el conjunto de los capitales que acumulan en el país, y el capitalismo argentino, no son competitivos y tienden a quebrar. ¿Cómo es posible que, a pesar de tener una productividad menor, puedan subsistir? Aquí es cuando aparece la especificidad agraria del capitalismo argentino. La Argentina contó con una fuente de riqueza extraordinaria durante buena parte del siglo XX: la renta diferencial. Por las ventajas de la producción pampeana, la economía argentina recibió un plus de riqueza social proveniente de la diferencia de costos entre la peor y la mejor tierra; monto pagado por el consumidor de los países compradores. Por ese mecanismo, el capitalismo argentino se apropió de una masa de plusvalor mayor al que le corresponde por el tamaño de su capital, aparentando ser “más de lo que es”, compensando el atraso de la productividad del trabajo. Este esquema impulsó la economía hasta la década de 1940. Pero a medida que el sector no agrario crecía y por diversos factores la renta alcanzaba su límite, se agotaba su capacidad compensatoria. La menor productividad se manifestó en

crisis periódicas, y en la aparición de otros mecanismos para cumplir el papel de la renta: devaluación, inflación y, cada vez con mayor peso, el endeudamiento.

Pulmotor nuevo

A partir de la crisis económica de los '70, se generó una situación de liquidez mundial que facilitó el endeudamiento de Estado nacionales y empresas, a la vez que la misma crisis empujó a endeudarse para capear la tormenta. Con precios agrarios reducidos y con la posibilidad de endeudarse a bajas tasas de interés, las salidas no eran demasiadas. Esto explica el crecimiento de la deuda externa durante los años de la dictadura que, como vimos, se multiplicó por más de cinco veces. Contra cualquier visión impresionista, esta fuente le reportó una ingente cantidad de recursos al Estado nacional. Así es que entre 1973-2015, grosso modo, el saldo de la deuda pública externa es de alrededor de 130.000 millones de dólares. Durante la casi totalidad de esos años, el saldo fue positivo gracias a las sucesivas renegociaciones y nuevas tomas de deuda que permitieron no solo pagar lo que se debía sino también ingresar dólares al circuito interno y mantener toda la batería de subsidios al conjunto de los capitales locales. De hecho, el único que pagó en los últimos años fue Néstor, en un contexto de elevados precios agrarios. No obstante, no desentonan con la lógica histórica: imposibilitado de endeudarse en el exterior (a pesar de todos los gestos mencionados para volver a tomar deuda), durante el kirchnerismo se incrementó el endeudamiento interno en 2,76 veces (de 58.000 millones de dólares en 2003 a 161.000 millones en 2015).

“Patria sí, colonia no”

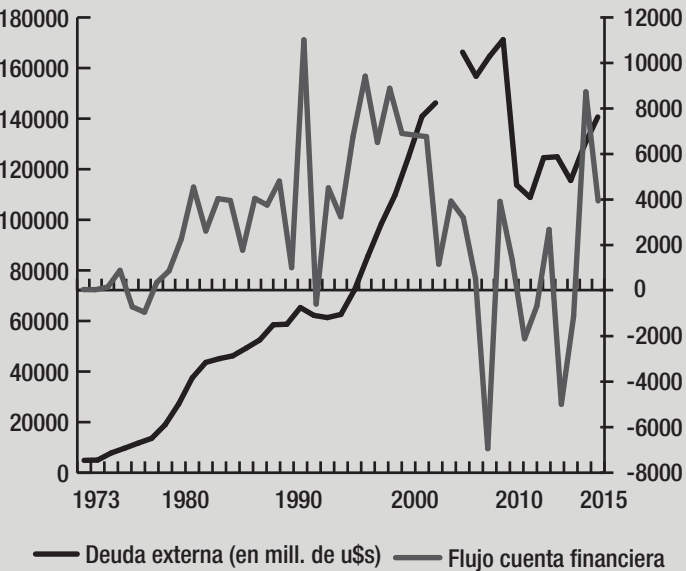
En definitiva, Argentina recibió más plata de la que pagó. De hecho, con el que se acaba de terminar, es el octavo default que nuestro país produce en los últimos años. En términos puramente financieros, se la pasaron estafando a sus acreedores desde 1824. Si Macri consigue endeudarse, reanudando el ciclo, va a tener mayores posibilidades de aumentar su caudal político, de dosificar el ajuste y de sostenerse por varios años hasta la próxima crisis, como el riojano en los '90. Otra vez, la izquierda esgrime en este contexto argumentos que llevan a posiciones incorrectas. La

idea de que la deuda es un mecanismo de dominación colonial, además de entender mal el problema, significa conciliar con el nacionalismo burgués,⁶ colocando un conflicto entre parásitos (burguesía nativa, burguesía financiera internacional) por sobre la contradicción capital-trabajo. El problema es quién pide y para qué: los capitalistas locales para cubrir su falta de productividad, es decir, para ocultar su fracaso histórico. El resultado no es un despegue de las fuerzas productivas, sino la perpetuación del atraso y la necesidad creciente de compensaciones.

La Argentina hace por lo menos sesenta años que no puede compensar su atraso con renta agraria. En realidad, lo que caracterizó al ciclo K es su excepcionalidad: fue el primero de muchos gobiernos, en ese largo período, que pudo gozar, como en las mejores épocas de la primera mitad del siglo XX, de renta agraria. Lo normal, desde 1950 por lo menos, es el endeudamiento. Lo que el kirchnerismo intentó a fines de su mandato y el macrismo parece haber logrado con éxito, es volver a la “normalidad”. En los últimos años, la caída del precio de las commodities empujó al gobierno a buscar nuevamente el endeudamiento externo como forma de compensación de los límites de la economía local. Lejos de ser un mecanismo de exacción que trabó el desarrollo nacional, permitió a la burguesía que acumula en el mercado interno reproducirse, pateando hacia adelante la crisis y escondiendo su incapacidad de impulsar las fuerzas productivas, manifestación de su inutilidad como clase dirigente. En lo sucesivo, el acuerdo para conseguir los dólares que precisan los empresarios incrementará la carga contra los trabajadores. Por eso debemos rechazarla: porque es un mecanismo de transferencia a los capitalistas locales (nativos o foráneos), un subsidio a los parásitos, que finalmente pagarán los trabajadores.

El problema no es la deuda, sino la estructura económica de la Argentina y el agotamiento histórico del capitalismo en el país, incluida la clase social que lo comanda. Es necesario organizar la sociedad bajo otro tipo de relaciones, concentrando los medios de producción en manos de la clase obrera, para maximizar los recursos y el trabajo de la sociedad en beneficio de los que generamos la riqueza y la vemos pasar de costado.

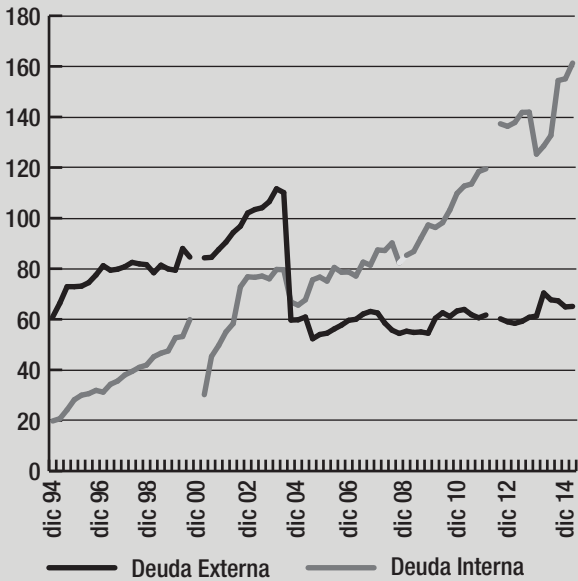
Deuda externa total, pública y privada y balance de la cuenta financiera pública, en millones de dólares corrientes, 1973-2015



Fuente: CEICS en base a información publicada por INDEC, MECOM y FMI

Desde 1973 la deuda externa no deja de crecer pese a que hayan pasado gobiernos de distinto signo político. Durante unos años del kirchnerismo, principalmente después del canje de 2005, la deuda se contrae levemente para proseguir su crecimiento. La contraparte de este crecimiento es un ingreso neto de dólares al país para financiar al capital local.

Deuda pública interna y externa en millones de dólares corrientes, 1994-2015



Fuente: CEICS en base a las estimaciones trimestrales de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, Ministerio de Economía, publicadas por el INDEC.

Pese al discurso del desendeudamiento, durante el kirchnerismo mientras disminuía la deuda pública externa aumentaba de forma más rápida la deuda pública interna, principalmente con organismos del propio estado (ANSES, BCRA, etc.).

Notas

¹Clarín, 22/04/2015; <http://goo.gl/dPQGBW>.

²Bil, Damian y Lamónica, Alejandro: “Balance reservado”, en *El Aromo* n° 87, 2015.

³Ver Bastida Bellot, Jonathan y Mussi, Emiliano: “Las finanzas al rescate” en *El Aromo* n° 80, 2014.

⁴Montos en base a estimaciones privadas y datos publicados por el

Ministerio de Economía, en <http://goo.gl/Mnuh99>.

⁵Ver Sartelli, Eduardo: “El presente griego”, en *El Aromo* n° 89.

⁶La posición del PO puede verse en goo.gl/BsrYhBygoo.gl/wsBQjo; la del PTS en goo.gl/eKXLcU. La discusión general la planteamos en Duarte, Juan Manuel: “Coqueteando con el enemigo”, en *El Aromo* n° 88, 2016.

SÁBADOS DE 11 A 13 HORAS

www.pateandoeltablero.com.ar



RADIO ON LINE

PARA SEGUIR DESENMASCARANDO LAS MENTIRAS DE LOS PODEROSOS

www.tvpts.tv

Seguinos en



ATRAPADOS EN LIBERTAD

Revoluciones en sonidos, imágenes radiales de expresiones populares, fotos sonoras de las referencias que señalan el camino hacia la liberación...

www.atrapadosenradio.blogspot.com



GES

Gabinete de
Educación
Socialista

www.ceics.org/ges - ges@ceics.org.ar

En la tierra del fuego

Conflicto docente en la provincia más austral del país



Romina De Luca
GES - CEICS

Hace más de 50 días que los docentes de Tierra del Fuego se encuentran en paro por tiempo indeterminado. Protagonizan, junto a estatales y otros trabajadores de la industria, una de las medidas de lucha más importantes y masivas de los últimos 20 años en la provincia. A los métodos asamblearios se le opone la represión paraestatal y nuevas formas de criminalización de la protesta social. La reforma previsional fue la gota que rebalsó el vaso en una provincia que hace varios años se encuentra al borde del estallido. Consignas levantadas en el 2001 ya empezaron a sonar en las calles fueguinas y pueden anticipar lo que vendrá.

La raíz del problema

Tierra del Fuego se presenta al resto del país cómo la provincia que mejor paga a sus docentes. Claro, esa reivindicación se funda en el análisis del salario nominal. Es decir, se compara cuánto cobra el docente en abstracción de cuanto necesita para vivir en cada lugar. Como explicamos en el número anterior de este suplemento, la realidad es otra si miramos la evolución del salario en relación a la

Canasta Básica Total de alimentos en cada provincia. Al hacerlo, vemos que a lo largo y ancho del país, el salario docente cubre poco más de la mitad, y que Tierra del Fuego no se sale de ese esquema. En 2004, el salario de bolsillo de una maestra de grado con diez años de antigüedad cubría apenas el 63% de la canasta; entre 2006 y 2009 un 80% y, a partir de 2010, entre un 50 y un 70%.

Con esa realidad salarial no extraña que los docentes fueguinos no inicien su ciclo de huelgas en 2016. Tampoco los métodos desplegados hoy son nuevos: piquetes, tomas de la Casa de Gobierno o del Ministerio de Educación, asambleas, marchas de antorchas, se sucedieron en todas ellas. La contraofensiva patronal también recurre hoy a viejas técnicas: represión policial y paraestatal (ejercida centralmente a partir de “padres-autoconvocados”), súplicas por gestos de buena voluntad, desgaste y descuentos de los días caídos. Por cuestiones de espacio, no podemos aquí reponer toda la historia pero valgan los siguientes ejemplos. En abril de 2007, los docentes en el marco de una doble jornada de lucha por la mejora del salario y de las condiciones de trabajo ocuparon la sede del Ministerio de Educación. En 2008, se movilizaron para presionar para que el Ejecutivo

provincial homologara el aumento dictado por Nación y que abonara el ítem “material didáctico”. En 2010, protagonizaron una huelga por cinco semanas consecutivas que fue levantada luego de la conciliación obligatoria dictada por Nación. En ese momento, el SUTEF reclamaba un salario básico de 3.800\$ (igual al de Santa Cruz) cuando el fueguino se ubicaba en 2.600\$.¹ Luego de la conciliación obligatoria y nueva convocatoria a paritarias en abril, el gobierno apeló a la tercerización de la represión. “Padres auto-convocados” irrumpieron en medio de una asamblea docente “patearon la puerta y con insultos, amenazas, agresiones físicas y empujones hacia los docentes obligaron por la fuerza a algunas maestras a dirigirse a las aulas”.²

En 2013, los docentes iniciaron el año con una larga huelga que se extendió hasta el mes de mayo. En el marco de esa protesta, que tuvo una larga serie de paros, docentes y camioneros tomaron la Casa de Gobierno de la provincia durante una semana. En ese momento, mientras el sindicato pedía un 50% de aumento, el gobierno ofertaba 33%. Durante esa toma, se produjeron enfrentamientos con la policía que terminaron con heridos de ambos lados. Sin embargo, fueron los líderes sindicales docentes los únicos que fueron llevados a juicio.

Durante el 2014, los docentes volvieron al paro, a partir de julio, para reabrir las paritarias en medio de un fuerte contexto inflacionario. Paros y piquetes en las escuelas estuvieron a la orden del día.

Los episodios del año 2015, constituyen los antecedentes más inmediatos del conflicto actual. Por un lado, el inicio de clases se vio, una vez más, signado por los paros docentes. Una vez más, en articulación con camioneros, los docentes volvieron a tomar la Casa de Gobierno en el mes de mayo. Así lograron arrancarle al gobierno un incremento del 42% en el salario básico inicial y la mejora de ítems como “función docente”, valor índice y antigüedad. Al inicio del ciclo lectivo, los docentes habían realizado “paros activos” manifestándose frente a sus escuelas o “reteniendo tareas”. A partir del segundo semestre, los docentes iniciaron una nueva oleada de huelgas por la reapertura de las paritarias. Pero hacia fin de año los hechos se precipitarían. En noviembre, se inició juicio a los 33 trabajadores (17 de ellos son docentes e incluye a secretarios gremiales) que habían protagonizado la toma de la Casa de Gobierno en mayo de 2013. El proceso judicial fue un escándalo. El gobierno aportó testigos que eran citados para “reparar” su declaración, también un video

La última lucha docente volvió a poner sobre la mesa los mismos problemas de siempre, evidenciando la pauperización progresiva de las condiciones de trabajo docente y la ausencia de una herramienta política eficaz que ejerza un papel dirigente en sus luchas.

visiblemente editado en donde los docentes “atacaban” a la policía y una acusación general donde los imputados no sabían ni de qué se los acusaba. La fiscalía obtuvo la condena, el 2 de diciembre: a 28 de los 33 imputados les impuso penas que iban desde los 8 meses hasta los tres años de prisión efectiva, incluyendo al actual Secretario General del SUTEF, Horacio Catena. Con la condena bajo el brazo, la gobernadora Ríos pretendió “limpiarse” a los sindicalistas: les inició un proceso de exoneración, lo que equivale a expulsarlos del sistema educativo. El recambio del personal político a cargo del ejecutivo no impidió que se siguiera en la misma línea: Bertone ratificó meses más tarde el pedido de exoneración de los 17 docentes involucrados.³

Que se vayan todos (versión 2016)

Si el pedido de exoneración predispuso a los docentes a la lucha, la gobernadora Bertone avivó aún más el fuego e implementó un combo de ajuste y despidos. Desde la asunción, solo en el ámbito estatal, se registraban al 21 de abril 375 despidos, cifra que ascendería a 1.000 al contabilizar la caída en contratos privados. El jefe de Gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, defendió los despidos y señaló que la planta estatal era de 22.000 en una provincia con 220.000 habitantes. Dentro de los estatales, destacó que la gobernadora Ríos dejó un “festival de horas cátedra que generaban una erogación de 20 millones sin control”.⁴ A los despidos se sumó la propuesta salarial del gobierno: la expropiación vehiculada a través del arsenal de leyes de reforma previsional -leyes 1068, 1069 y 1070- (véase artículo en esta misma edición) y de la devaluación e inflación. Como si no fuera suficiente con la licuación del salario vía inflación-devaluación el paquete de leyes votadas en enero avanzó más. El congreso provincial aprobó nuevas normas para que los

trabajadores aportaran un porcentaje mayor de sus sueldos para cubrir el déficit del Ipauss (Instituto de Previsión Social). También se elevó el tiempo de aportes al ampliar la edad jubilatoria: se derogó la ley “25 inviernos”, que fijaba ese número como aporte requerido y se lo elevó a “treinta años de servicios computables” y a sesenta años la edad jubilatoria para ambos sexos. En lo que respecta a docentes, el artículo 35^a dispuso en 25 los años de servicios y 50 años de edad para los profesores con un mínimo de 21 hs cátedra o directivos y técnicos con más de 10 años de servicio frente al aula. La medida fue repudiada por diputados del FIT y otras bancadas con un Proyecto de Resolución.⁵

Los docentes que ya venían movilizadas a propósito de la criminalización de la protesta operada por el combo juicio-exoneración se articularon rápidamente con otros trabajadores estatales e industriales. Las movilizaciones que protagonizan los trabajadores por la magnitud solo encuentran paralelo con las de 1995, cuando asesinaron al obrero Víctor Choque. Asambleas, piquetes y acampes coparon rápidamente las calles fueguinas. Y, al igual que en otras contiendas, los docentes protagonizaron numerosas asambleas escolares y asambleas

diarias generales en las que se ratificaron las medidas de lucha y se decidieron nuevas acciones. El gobierno provincial “militarizó” el conflicto. Los docentes denunciaron que la policía se apostó, con sus armas reglamentarias, dentro de las escuelas para “velar” por el inicio de la jornada escolar. En la misma línea de acción, el 13 de abril, el Ministerio de Educación plantó dos patrulleros en la puerta del Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia al Escolar de Río Grande para prevenir “posibles tomas” del edificio.⁶ El gobierno también se sirvió otra vez de padres “autoconvocados” que llamaron a garantizar el dictado “normal” de clases, denunciaron a los huelguistas, armaron listas negras y llamaron a repudiar a los docentes y a su dirigencia sindical. Los docentes demostraron que muchos de los “padres” no eran más que militantes del Frente para la Victoria. El gobierno también habría liberado la zona para que camioneros desalojaran un piquete de docentes y estatales frente a la planta de YPF de Orión el pasado 12 de abril.

Antes de la expropiación previsional, la situación ya era en la provincia bastante precaria. Horacio Catena señaló que “tras la caída de los subsidios, se habla que el gas envasado estaría subiendo en un mil

por ciento y el gas en red un quinientos por ciento, lo que va a hacer también que suba la tarifa eléctrica.”⁷ Como dijimos, la canasta básica familiar total ronda los 26 mil pesos y el salario inicial del docente cubre apenas la mitad.

Sentando las bases para la represión

Luego del enfrentamiento en la planta de Orión, la gobernadora Bertone anunció dos medidas que preparan una escalada represiva mayor. Por un lado, bajo el slogan “se terminó la paciencia”, ordenó el desalojo del acampe frente a la Casa de Gobierno. Pero fue por más. En segundo lugar, anunció la quita de la representación gremial a los sindicatos provinciales al derogar el Decreto 834/09. La gobernadora fueguina anticipó que “vamos a trabajar en una solución con los gremios que tengan personerías a nivel nacional”.⁸ Por eso, el 21 de abril, se derogó el decreto y se quitó personería jurídica a los sindicatos provinciales estableciendo como únicos interlocutores sindicales a los gremios reconocidos por el Ministerio de Trabajo de Nación. Como si eso fuera poco, al igual que en provincia de Buenos Aires (ver nota en este mismo suplemento), el gobierno fueguino

pretende reemplazar a los docentes en huelga con “docentes auxiliares” para garantizar el “normal” dictado de clases. Si bien al momento de redacción de esta nota, aún la resolución no había sido difundida, es inminente el anuncio de la instauración de “pares pedagógicos” que cumplirían funciones en los establecimientos educativos fueguinos. Para diluir la gravedad, el Ministerio de Educación provincial, Diego Romero, señaló que la medida sería transitoria hasta el 31 de julio y que tampoco afectaría la continuidad de los puestos de trabajo de los docentes en huelga.⁹ Para él, se trata de “salvaguardar el supremo derecho de los niños a la educación”. Para eso contratarán rompehuelgas...¹⁰ La represión, el descabezamiento de la dirigencia sindical (exoneración y quita de personería jurídica) y el terror a perder el trabajo se entrelazan como respuesta de la patronal a la lucha docente. En ese magma en el cual la burguesía se pertrecha para la represión, los trabajadores fueguinos ya empezaron a corear las consignas del Argentinazo. En la reciente marcha de antorchas realizada el 16 de abril, que finalizó en la Casa de Gobierno, docentes y estatales, junto a otros trabajadores cantaban “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.¹¹ Dos días atrás, la

Unión de Gremios y Jubilados Estatales de Tierra del Fuego había realizado su propia marcha de antorchas. Al fuego, parece, comienza a responderse con fuego.

Notas

¹*Ámbito Financiero*, 30/03/2010. Disponible en: <http://goo.gl/IErVsw>

²*Opi Santa Cruz*, 16/04/2010. Disponible en: <http://goo.gl/JZMdFJ>

³*Clarín*, 03/12/2015. Disponible en: <http://goo.gl/8MGSxa>

⁴*Clarín*, 23/02/2016. Disponible en: <http://goo.gl/QPu3kF>

⁵Firmaron el proyecto Myriam Bregman, Soledad Sosa, Victoria Donda, Néstor Pitrola, Pablo López, Graciela Cousinet, Diana Conti, Araceli Ferreyra.

⁶*Gremiales del Sur*, 13/04/2016. Disponible en: <http://goo.gl/EeKNrk>

⁷*Gremiales del Sur*, 20/04/2016. Disponible en: <http://goo.gl/bJ5KNG>

⁸*Clarín*, 12/04/2016. Disponible en: <http://goo.gl/9z4ybX>

⁹*Telam*, 20/04/2016. Disponible en: <http://goo.gl/nlMwph>

¹⁰*Red 23 Noticias*, 19/04/2016. Disponible en: <http://goo.gl/Y3JlKA>

¹¹*Gremiales del Sur*, 16/04/2016. Disponible en: <http://goo.gl/qIqqaw>

Cuidando pichones blancos

Vidal y las bases de la represión a los docentes



Martín Rodríguez
GES - CEICS

Cuando el conflicto entre el gobierno provincial y el SOEME llegó a su punto más alto de conflictividad, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bajó la Resolución 142-16 para todas las escuelas públicas de la provincia. A pesar de constar de tres carillas, el documento fue contundente, ya que se autorizaba a los establecimientos educativos a contratar empresas privadas de limpieza. Las mismas serían empleadas con los fondos de cooperadora (como si las escuelas bonaerenses tuvieran plata) y, en caso de no alcanzar, la DGCyE giraría una partida complementaria. La disposición también apelaba a que toda la comunidad educativa tomara las riendas del asunto y garantizara la continuidad del ciclo lectivo. En línea con la flexibilización y la degradación educativa profundizada durante el menemismo y el kirchnerismo, el gobierno “tecnócrata” de Cambiemos demostró que camina por la misma vereda que los gobiernos pasados: “inclusión” a ultranza. Si bien pasó inadvertido, también sentó las bases para reprimir a los docentes.

¿Alguien quiere pensar en los niños?

Como todo buen Estado burgués, el argentino se vale de algún tipo de fundamento, por lo general jurídico, para validar su accionar y, si es posible, vestir al lobo de cordero. Por esta razón, la resolución 142-16 entra en acción con bombos y

platillos citando la ley provincial de Educación n° 13.688 art 5°. La misma afirma que “la Provincia, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia social en el ejercicio de este derecho, con la participación del conjunto de la comunidad educativa”. El Estado, entonces, se hace responsable de brindar una educación integral, inclusiva, de calidad, etc. Recordemos que estos fueron los principios de los cuales se ha valido el kirchnerismo para hacer bandera de un modelo educativo progresivo que, a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional en el año 2006, venía a romper con la Ley Federal de Educación de Menem. De lo citado en esta primera parte recordemos para más adelante la frase “con la participación del conjunto de la comunidad educativa”. Luego de esta pequeña presentación, nos adentran en el primer plato aclarándonos que todos los trabajadores de la educación somos servidores públicos. Dentro de esta categoría incluyen a los administrativos, técnicos, auxiliares y profesionales del sistema educativo. Las citas a la ley provincial continúan, en este caso al artículo 92, el cual nos adjudica a los trabajadores de la educación el deber de “contribuir a asegurar el funcionamiento del Sistema Educativo y de las instituciones educativas”. Muchas cosas podemos desglosar de estas líneas ¿No le sonó duro el termino *servidores públicos*? ¿No sintió cierto

escalofrío? La cuestión es más o menos sencilla: si un trabajador de la educación es un servidor público, se debe a la comunidad en su totalidad. Por eso, acto seguido se afirma que “La Provincia promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho a la igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el pleno desarrollo de los niños y su efectiva participación en la comunidad”. Correlativamente con estos lineamientos afirma que es “deber del Estado para con los niños, asegurar con absoluta prioridad la realización de sus derechos sin discriminación alguna”. Añade el artículo 7°, el cual le adjudica al Estado “la Prevalencia en la exigibilidad de su protección jurídica, cuando sus derechos colisionen con intereses de los mayores de edad, o de las personas públicas o privadas”. Dicho en criollo, el interés de los niños está por encima de cualquier otro, más aún si hablamos de “servidores públicos”.

Una vez que el gobierno provincial se ampara en todos estos artículos, descarga con munición pesada la solución al problema, no sin antes aclarar que “resulta conveniente habilitar otras alternativas operativas para atender los servicios afectados”. Es por eso que la resolución, para el caso de los auxiliares, habilita a la contratación de servicios de terceros o a la asunción de esas funciones por parte de esa argamasa denominada “comunidad educativa”. Pero al recordar que los docentes también somos “servidores públicos” van por nuestras condiciones de trabajo. A esta altura del partido, adentrados en el siglo XXI, uno creía que ciertas concepciones

acerca de los roles de la comunidad educativa ya estaban superadas. Sin embargo, esta resolución tiene una bajada ideológica que pretende igualar la figura del docente con la del sacerdote o el viejo apóstol. Según esta conceptualización, de fines del siglo XIX por cierto, los trabajadores de la educación son sujetos dedicados a tiempo completo a aquella profesión que han elegido por vocación. Como tal, debe bancarse lo que venga. Su carácter de trabajador se ve relegado por el del servidor público. Bajo este condicionamiento, si quedaron sin limpiar los baños, usted compañero/a debe agacharse y fregarlos para que las blancas palomitas puedan higienizarse y así poder continuar las clases. Si falta pintura en las aulas o hay algún desperfecto eléctrico, de nuevo, compañero/a, vístase con el ombú, la escalera en el hombro y proceda con las tareas de maestranza. Si se trata de “atender los servicios afectados” cuando en huelga estemos nosotros, prepárese. Imagine si el día de mañana los docentes vamos al paro por tiempo indeterminado, ¿qué pasaría si a los auxiliares se les ocurre abrir las puertas del establecimiento educativo y brindar clases? O lo mismo si piden la colaboración de los padres en reemplazo nuestro. Imagine nomás, a este ritmo en un futuro no muy lejano, a cualquier miembro de la comunidad educativa reemplazado en sus tareas diarias por X persona. El padre de Juancito, por ejemplo, que es taxista, y algo de maña se da para las cuestiones filosóficas y la historia, decide hacerle un favor a la comunidad y en el hueco libre que le queda por las mañanas decide reemplazarlo a

usted que está protestando por mejorar la calidad educativa...

La solución de ellos y la nuestra

Debemos repudiar entonces la Resolución 142/16 porque estas medidas atentan contra la unidad de la clase obrera, porque, en primer lugar, fomentan la fragmentación entre aquellos que realizan tareas de mantenimiento y los docentes. En segundo término, abre las puertas para el futuro quiebre entre obreros-docentes y obreros-padres.

El macrismo ya jugó sus primeras cartas y mostró, por si quedaba alguna duda, el rumbo que va a seguir: avanzar con los procesos de flexibilización y degradación educativa. Es doloroso ver como nuestros pibes no pueden realizar consignas apenas abstractas, como su capacidad simbólica se encuentra hecha añicos, como vemos que desde todos lados se bastardea al cono-cimiento. Ahora, cuando batallamos contra eso apareceremos como los verdugos. Peor, porque la nueva legislación sienta las bases para prescindir de nosotros. El Fines 2 y Terminá la secundaria fueron los laboratorios de esto. Vienen por más. Rechazamos la división y fragmentación de la clase obrera. Solo tomando el toro por las astas y estableciendo lazos solidarios entre nosotros, los que creamos al mundo con las manos y la cabeza, podemos empezar a construir una nueva sociedad. Volvamos a posicionar a la educación y al conocimiento en general, como una de las tantas herramientas que nos damos los trabajadores a nosotros mismos en pos de lograr la definitiva emancipación del hombre.

La ciencia y el científico en la era capitalista

Richard Levins y
Richard Lewontin

La investigación se convirtió en una inversión empresarial

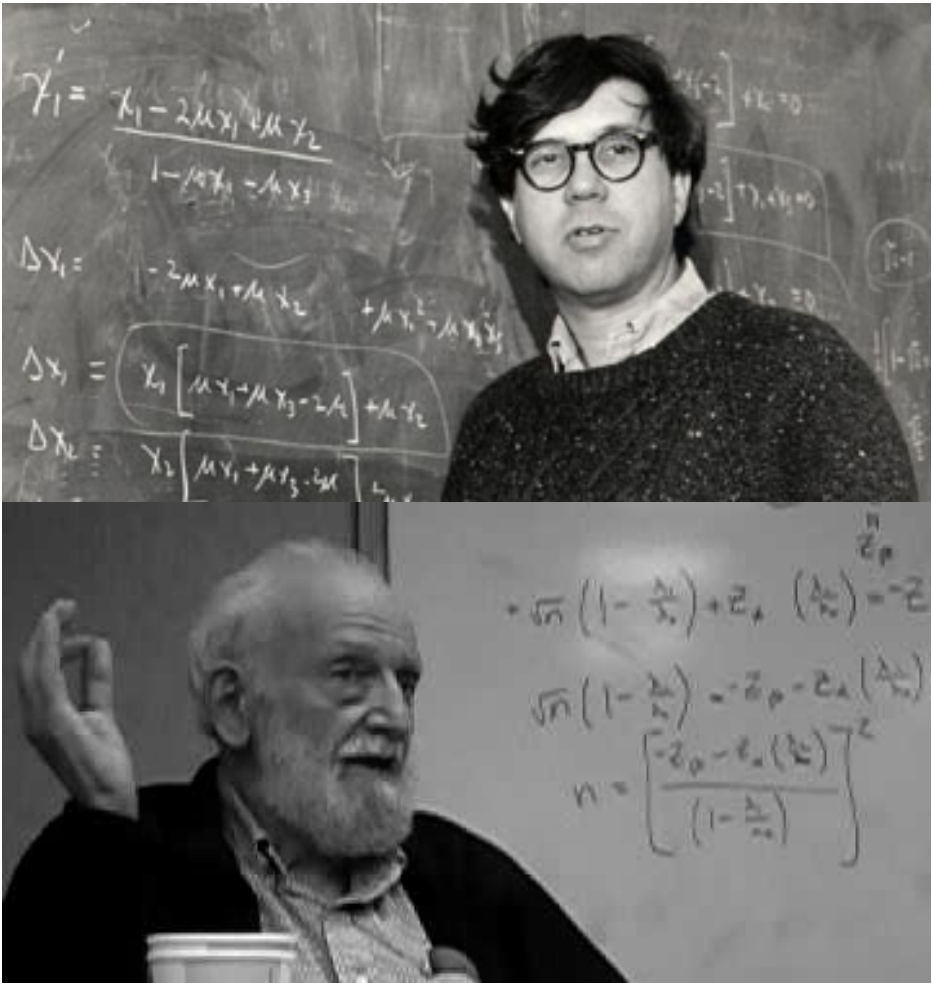
Entre el 3 y el 7% de los gastos que realizan las corporaciones de las industrias técnicas corresponde a investigación y desarrollo. La inversión en investigación, que es una forma más de invertir capital, compite con otras formas, por ejemplo, el incremento de la producción de productos existentes, aumento de la publicidad, contratación abogados o lobistas, adquisición de negocios en otras ramas, conciliación con los sindicatos, sobornos para los ministros de los posibles países clientes, etc. Todas estas formas son medidas unas con otras utilizando una escala de maximización de la ganancia.

Es un hecho reconocido que los gastos en investigación son los primeros en ser recortados cuando una corporación sufre un revés económico, ya que la innovación técnica no tiene una recompensa inmediata, mientras que aumentar la publicidad, los costos de la mano de obra y materiales se refleja en las ganancias de manera inmediata. Los estudios sobre las decisiones en las corporaciones muestran que el horizonte de decisión típica de los gerentes es de un máximo de 3 a 5 años. Como la investigación no tiene una recompensa dentro de ese periodo, es más prescindible. Al mismo tiempo, los costos de investigaciones de largo plazo son socializados, cambiando el lugar de trabajo de un emprendimiento individual a las instituciones públicas... De esta manera, utilizan la subvención fiscal, ninguna firma individual necesita arriesgar capital y el costo total se reparte en toda la base imponible. En las últimas etapas del desarrollo, cuando estas investigaciones socializadas se aproximan a la producción de un producto con valor comercial, vuelven a manos privadas a fin de obtener la propiedad exclusiva. (...)

Los descubrimientos científicos se vuelven cuantificables

Una corporación puede estimar cuánto tiempo le puede llevar en promedio desarrollar una nueva droga o computadora, con cuánto trabajo y a qué costo. Por lo tanto, una compañía de investigación y desarrollo o una división corporativa considera a la actividad científica como un trabajo humano generalizado, antes que una forma particular de resolver problemas. (...)

Por lo tanto, están sujetos a los costos de producción, intercambio y supervisión gerencial. La división del trabajo dentro de la ciencia, la creación de especialidades y las jerarquías se vuelven cada vez más racionalizadas. La parte creativa del trabajo científico está cada vez más restringida a pequeñas fracciones, los científicos, mientras que el resto está altamente proletariado, esto significa que perdió el control no sólo de elegir el problema y el enfoque, sino de las actividades que realiza diariamente, e incluso, cada hora. La organización científica del trabajo, desarrollada en primer lugar por la industria automotriz en el infame sistema taylorista en Ford, luego se extendió al comercio, al trabajo de oficina y a la investigación científica. El enfoque gerencial ve la fuerza de trabajo como un objeto que se utilizará con fines empresariales. La fragmentación de las habilidades y el consecuente aumento de la especialización no deriva de las necesidades intelectuales de un campo sino de la contabilidad de los costos empresariales: es más barato entrenar a un hematólogo o analista de orina de laboratorio que preparar dos médicos técnicos generales. En consecuencia su fuerza de



trabajo es más barata, los salarios son más bajos y las partes obsoletas pueden ser despedidas y reemplazadas. Además, la fragmentación y descalificación consolidan el control sobre la fuerza de trabajo dividida. A su vez, la descalificación en el trabajo científico produce mayor alienación, el productor no comprende el proceso total de producción, no sabe hacia dónde va o cómo, y tiene pocas oportunidades de ejercitar su inteligencia creativa. Una vez que el trabajo está alienado en este sentido, una vez que la ciencia es sólo un trabajo, es necesario aumentar la supervisión. El agravante de esta supervisión es que profundiza la alienación, alienta la corrupción y la indiferencia. Además toma el control de las manos de los científicos y se lo da a los gerentes. Los propios investigadores, e incluso los administradores de la ciencia, ya no son los principales responsables de sus pares, esta se realiza en niveles más altos de la jerarquía, en los controladores de recursos. Un subproducto de este fenómeno es que las propuestas de investigación presentadas a los organismos correspondientes se hacen más largas, detalladas y cautelosas y son un reflejo menos honesto de las intenciones de la investigación. (...)

Los científicos reaccionan a esta mercantilización de maneras opuestas. Por un lado, lo deploran. Muchos de ellos, reclutados de la clase media, eligen la ciencia pensando escapar del mundo del comercio. Eligieron emplearse en un tipo de trabajo cuyo producto tenía un valor de uso, que valía la pena por sí mismo y no por su valor de cambio. Lamentan la pérdida del viejo espíritu de corporación y de una dedicación desinteresada por la verdad, que era el mito de la organización de la ciencia anterior a su mercantilización. Lamentan la proletarianización del trabajo científico y la pérdida de autonomía, y tratan de resistir de manera individual la imposición del control gerencial y la determinación burocrática del valor. Incluso, si están organizados, evitan apelar al sindicato. Como resultado de este desarrollo, la división de clases que impregna a nuestra sociedad en su totalidad, también atraviesa el rango de la ciencia. La mayoría del millón aproximado de trabajadores científicos en los Estados Unidos forma parte del proletariado científico, venden su fuerza de trabajo y no

tienen control sobre el producto o la forma de trabajo. En el extremo opuesto, unos científicos forman la burguesía científica, invirtiendo en investigación y determinando la dirección de la investigación y el desarrollo. Entre estos dos extremos está el grupo de la pequeña burguesía profesional trabajando por su cuenta o en pequeños grupos en universidades o institutos de investigación. Estos últimos pueden estar motivados por una gran diversidad de asuntos, pero sus actividades dependen cada vez más de obtener financiamiento de las agencias del gobierno, fundaciones privadas o corporaciones. Para ellos la beca de investigación es una necesidad. Y la relación entre beca e investigación se ha ido transformando gradualmente: inicialmente la beca era un medio para la investigación, para los “entrepreneurs” de la ciencia; actualmente la investigación se convirtió en un medio para una beca. (...)

Las condiciones de existencia del estrato científico en la economía capitalista refuerzan las creencias y las actitudes científicas recibidas como parte de la herencia general liberal-conservadora. A pesar de una amplia gama de variaciones en las creencias científicas, y a pesar de las creencias contradictorias que todos tenemos, existe fehacientemente una ideología implícita que puede ser designada como burguesa. Esta ideología incluye las siguientes características:

Individualismo

La visión burguesa atomista de la sociedad, como se aplica en la ciencia, afirma que el progreso se produce gracias a unos pocos individuos. Los científicos se ven a ellos mismos como agente libres independientes, persiguiendo sus propias inclinaciones (...) En ningún otro sector es mayor la sensación de independencia y más lamentable la decepción que entre los intelectuales. (...) Un elemento crucial de la ideología individualista es la negación de esa ideología.

Elitismo

La afirmación de la superioridad de una pequeña minoría de intelectuales lleva a creer que la supervivencia de la humanidad depende de la habilidad de esa minoría para

engatusar y engañar al resto de las personas para que hagan lo que es bueno para ellos. Este sesgo es especialmente pronunciado en los cuentos de ciencia ficción, donde la resistencia a la opresión política es llevada a cabo por algunos científicos consagrados que conspiran para burlarse de las reglas. Este elitismo es profundamente antidemocrático, alienta el culto a la pericia, a la apreciación estética de la manipulación y desdén a aquellos que no están hechos por las reglas de la academia, lo que generalmente refuerza el racismo y el sexismo.

Pragmatismo

En la ideología occidental el “pragmatismo” es un elogio, en contraste con la calificación “ideológico”, que es peyorativa. Para los científicos, el pragmatismo significa aceptar las condiciones límite impuestas por la mercantilización y la especialización. Esto significa progresar en el trabajo sin preguntarse por qué, postura inmortalizada en la canción de Tom Lehrer sobre los expertos con proyectiles: “si los cohetes suben, ¿a quién le importa dónde bajan? Esa no es mi especialidad”, dice Werner von Braun. (...) A los ojos de un pragmático, el sentimiento fuerte de injusticia social es sospechado de ideológico, reflejando una inmadurez contraria a la serenidad del erudito.

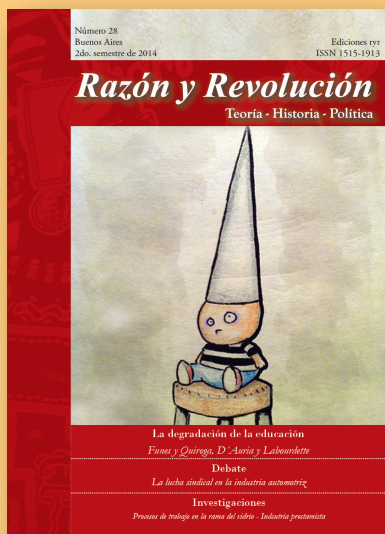
Separación de pensamiento y sentimiento

Los científicos lucharon para establecer el principio que dice que todas las afirmaciones del mundo deben ser validadas por la evidencia. No se permite que influyan en las controversias científicas ni el hecho de apelar a la autoridad ni a los deseos que cada uno tenga. Probablemente fue necesaria alguna separación entre el sentimiento y el pensamiento para establecer la legitimación de la ciencia. Pero una vez que se volvió absoluta, esta separación se convirtió en un obstáculo para la práctica científica autoconsciente. Esto oscurece la fuente de nuestras preferencias en relación a las direcciones a tomar o los métodos a utilizar, también impone la introducción formal en las publicaciones científicas, pretendiendo sacar al científico individual fuera del proceso de trabajo creativo a través del lamentable recurso de remover la primera persona del singular, adoptando una forma gramática que Susan Griffin describe como impersonal pasiva. Aún más importante, después de las preguntas sobre el hecho, los científicos están formalmente liberados de las preguntas sobre el valor; estas cosas no se unen fácilmente. Mientras que los filósofos dedican su vida a discutir como relacionar el “ser” con el “deber”, los científicos están libres de construir todo tipo de armas, protegidos por un vocabulario impersonal (donde dominan conceptos como “rentabilidad” o “kill ratio”) y de reconocer los efectos de los productos de su trabajo. (...)

Reduccionismo

La especialización del trabajo científico y las funciones de mando para la investigación, crearon un modelo de organización científica que es vista como modelo de organización del mundo. Se percibe a la naturaleza como un reflejo del organigrama de nuestra compañía o universidad, con fenómenos similares unidos bajo un mismo presidente, fenómenos distintos pero relacionados bajo un decano común, y eventos aislados perteneciendo a diferentes escuelas o divisiones. Esta especialización en la práctica está conectada con el individualismo atomista que refuerza el reduccionismo que aún predomina en la filosofía implícita de los científicos.

NOVEDADES



Revista *Razón y Revolución* n° 28

-Dossier: La degradación de la educación
Funes y Quiroga, D'Auria y Labourdette
-Debate
La lucha sindical en la industria automotriz
-Investigaciones
Procesos de trabajo en la rama del vidrio - Industria prestamista



Literatura y revolución León Trotsky

La nueva y más completa edición en castellano del clásico de León Trotsky. Una versión traducida directamente del ruso, que recupera textos inéditos.



Damián Bil
Mala cosecha



Ianina Harari
A media máquina

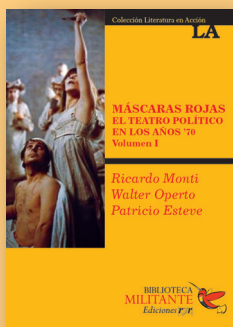
42° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La Rural, Predio Ferial de Buenos

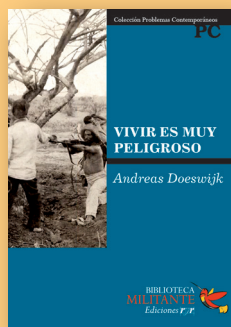
Prometeo Editorial: Pabellón verde, stand n° 822.
Catari-Raíces: Pabellón amarillo, stand n° 1820.



BIBLIOTECA MILITANTE



R. Monti, W. Operto,
P. Esteve
Máscaras Rojas
El teatro político en los '70



Andreas Doeswijk
Vivir es muy peligroso



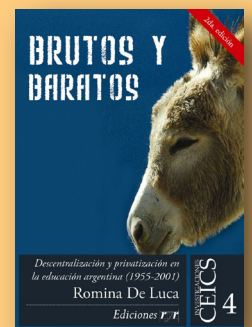
Richard Lewontin y
Richardm Levins
El biólogo dialéctico



León Trotsky
Historia de la revolución rusa



Rosa Luxemburgo
Espontaneidad y acción



Romina De Luca
Brutos y Baratos
2a Edición

Ediciones ryr - www.razonyrevolucion.org



BARRILETE LIBROS

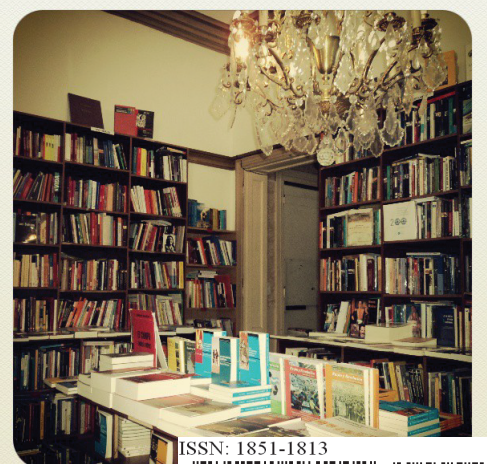
La librería y centro cultural de Razón y Revolución
Condarco 90, entre Yermal y la Av. Rivadavia
Horarios de atención: Lunes a viernes de 15 a 20 hs., sábados de 10 a 15 hs.
Tel: 4611-7695
barriletelibros@gmail.com

www.barriletelibros.com.ar - www.facebook.com/barriletelibros

Izquierda - Marxismo - Política - Psicología - Trabajo social - Economía - Educación - Comunicación - Filosofía - Divulgación científica - Sociología - Historia - Antropología - Artes plásticas - Artes visuales - Música - Literatura - Poesía

Libros nuevos y usados
Compramos libros usados
Enviamos libros a todo el país

Actividades culturales
Cine club - Talleres - Seminarios - Charlas - Presentaciones de libros
Invitamos a artistas y escritores a presentar sus obras en nuestro espacio



ISSN: 1851-1813

